

# *La industria del secuestro en Colombia*

*¿Un negocio que nos concierne?*



**pax**  
christi  
holanda

La industria del secuestro en Colombia.  
¿Un negocio que nos concierne?

***La industria del secuestro en Colombia.  
¿Un negocio que nos concierne?***

**Pax Christi, Holanda**

Utrecht, enero del 2002

**Dirección**

P.O. Box 19318  
3501 DH UTRECHT  
paxchristi@paxchristi.nl

**Texto**

Pax Christi Holanda  
M. Moor  
L. Zumpolle

**Fotografía**

Mattheus Engel  
(anteriormente publicado en: *Colombia. Vergeten mensen*)

**Imprenta**

Drukkerij Moretus B.V.  
La Haya

**Editor**

Pax Christi Holanda

**ISBN**

90 704 4351 1

**Las siguientes instituciones contribuyeron económicamente con este informe:**

La Congregación de las Hermanas de San Francisco de Oirschot  
El Ministerio Holandés de Cooperación para el Desarrollo  
La Fundación Haëlla  
Icco  
Novib

# Contenido

<b>Agradecimientos</b>	7
<b>Mapa de Colombia</b>	8
<b>Introducción</b>	9
<b>1. El secuestro en el contexto mundial</b>	11
1.1 El secuestro: arma de todos los tiempos	11
1.2 El auge mundial del secuestro	12
1.3 El secuestro en América Latina	15
1.4 El secuestro como combustible de conflictos armados	17
<b>2. Colombia: del secuestro político a las pescas milagrosas</b>	21
<i>La industria del secuestro como un incentivo para la guerra</i>	
2.1 El conflicto colombiano durante el período de la Guerra Fría	21
2.2 El conflicto colombiano después de la Guerra Fría	22
2.3 Nuevas fuentes de financiación de la guerra: las drogas	24
2.4 Nuevas fuentes de financiación de la guerra: la extorsión	25
2.5 Nuevas fuentes de financiación de la guerra: el secuestro	26
2.6 Cifras del secuestro en Colombia	28
2.7 El incremento del secuestro en los años noventa	30
2.8 Los principales autores del secuestro	33
2.9 El secuestro alimenta la maquinaria de la guerra	34
<b>3. Cinco estrategias colombianas para contrarrestar el secuestro</b>	41
3.1 El marco legal colombiano contra el secuestro	41
3.2 El marco institucional colombiano contra el secuestro	42
3.3 Negociaciones nacionales de paz	43
3.4 El compromiso de no pago: ¿una opción realista?	46
3.5 El Derecho internacional humanitario y la Corte Penal Internacional	48
<b>4. El secuestro por parte de los grupos armados de la oposición desde una perspectiva legal</b>	51
Resumen ejecutivo	
4.1 Introducción	53
4.2 Restricciones legales para los grupos armados de la oposición en Colombia	54
4.3 Atribución de la responsabilidad	58
4.4 ¿Quién debería llevar a juicio a estos infractores?	62
4.5 Conclusiones	64

<b>5.</b>	<b>Los extranjeros: la presa más apetecida</b>	<b>73</b>
	<i>El involucramiento de los inversionistas extranjeros en el conflicto colombiano</i>	
5.1	El secuestro de extranjeros: surge un nuevo fenómeno	73
5.2	'Unas pocas víctimas', ganancias astronómicas	75
5.3	Un código de silencio guardado por todos	78
5.4	La implicación de los inversionistas extranjeros en Colombia	79
5.5	El sector energético y de la ingeniería	83
	¿Defensa legal contra actores ilegales?	
5.6	¿Hacia un código de conducta para los inversionistas europeos?	86
	La extrema reserva de los inversionistas europeos	
<b>6.</b>	<b>¿El riesgo bajo control?</b>	<b>93</b>
	<i>Debate sobre los servicios que ofrece la seguridad privada como solución contra el secuestro</i>	
6.1	Asesoría sobre el riesgo	94
6.2	Servicios de seguros antisequestro y rescate	94
6.3	Manejo de la crisis	97
	(incluyendo los servicios de respuesta antisequestro)	
6.4	Seguros y servicios de respuesta antisequestro; el debate	99
<b>7.</b>	<b>¿Hacia una política común europea sobre el secuestro?</b>	<b>105</b>
7.1	Los esfuerzos realizados por la comunidad internacional	105
7.2	No existen unos principios rectores comunes europeos sobre el secuestro	107
7.3	¿Mayor presión política de la unión europea sobre las partes en conflicto?	114
	<b>Principales temas de la campaña contra el secuestro</b>	<b>119</b>
	(noviembre del 2001 - noviembre del 2002)	
	<b>Glosario</b>	<b>123</b>
	<b>Anexo</b>	<b>126</b>

# ***A todas las víctimas del secuestro en Colombia que no pueden hacerse oír***

## ***Agradecimientos***

Mucha gente ha contribuido a este informe de una u otra forma. Deseamos mencionar algunos de ellos individualmente: (en orden alfabético).

Colombia:	Emilio Meluk Rodrigo Rojas Héctor Torres León Valencia
Alemania:	Dr. Herdegen Peter Schumacher
U.S.A:	John Heidema
Bélgica:	Ruth e Yvette Perrier An Vranckx, IPIS
Holanda:	E.C. de Bouter y compañero Haydee Díaz Hans Schouwenburg Liesbeth Zegveld

Sin ellos no hubiera sido posible realizar este informe. También queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a aquellos que han contribuido con valiosa información, pero que, por razones de seguridad, desean permanecer en el anonimato.

Marianne Moor  
Lidune Zumpolle





# Introducción

***“Este es un llamado urgente de una madre y de una esposa a los señores que tienen al ciudadano holandés en su poder y a las demás personas que puedan dar información sobre su paradero. Como un acto de desesperación la madre de Mark y su esposa se dirigen por medio de este boletín a Ustedes.***

***¿Dónde está Mark?***

***¿Quién puede dar información?***

***Fuimos a Colombia para buscar a nuestro hijo y esposo.***

***Pero buscar en un país tan grande es muy difícil.***

***¿Quién quiere ayudarnos?***

***Nuestra tristeza es tan profunda que ya no podemos más.”<sup>1</sup>***

Actualmente, el delito del secuestro afecta a casi uno de cada cuatro países en el mundo. Colombia ocupa el primer lugar en esta triste lista desde hace varios años. Incluso los secuestros masivos y los secuestros de niños se han convertido en parte de esta forma cínica de financiar una guerra.

La toma de individuos desarmados e indefensos como rehenes no solamente paraliza a la víctima sino que también afecta la integridad psicológica y económica de toda la familia. Además, crea un dilema moral imposible de manejar para los individuos, las compañías y los gobiernos involucrados cuando se les exige el pago de un rescate. Por un lado, parece que pagar el rescate es la única forma de salvar la vida de la víctima. Por el otro lado, este pago contribuye directamente a fomentar la guerra.

Hace ya muchos años que Pax Christi de Holanda tiene contactos con todos los sectores civiles de Colombia, especialmente con las iglesias. Hemos sido testigos cercanos de muchas tragedias personales causadas por el secuestro de un ser querido. Varios de nuestros socios colombianos nos sugirieron la idea de organizar un debate abierto sobre el rol que desempeñan las compañías y los gobiernos europeos. Una tercera parte de los extranjeros secuestrados en Colombia son europeos que han pagado enormes cantidades de dinero por los rescates. De esta forma mientras Europa habla sobre el apoyo de la Unión Europea a los diálogos y a las iniciativas de paz en Colombia, está contribuyendo al mismo tiempo a fomentar la guerra por cuanto paga por el rescate y la extorsión.

---

<sup>1</sup> Esta es una cita del folleto que se distribuyó en Urabá (Colombia) en el verano de 1993, cuando la familia le pidió a Pax Christi de Holanda que la ayudara en el secuestro del jardinero holandés. Desde entonces, ha habido muchos más casos trágicos de europeos y colombianos.

Una barrera de silencio rodea este tema. En Colombia esto se puede explicar por el miedo abrumador de la gente. Todas las partes involucradas, tanto colombianas como extranjeras, tienen sus propias razones para guardar silencio o para esconder la realidad detrás de una cortina de humo o de mentiras flagrantes. Esto, junto con un clima generalizado de corrupción y anarquía, es la razón principal por la cual no se ha hecho nada efectivo hasta ahora en Colombia. El tradicional código de silencio no nos ayudó mucho en el proceso de elaboración de este informe. Más difícil de entender es por qué no se denuncia más explícitamente el delito de la toma de rehenes en los círculos internacionales de derechos humanos.

Este informe, lejos de pretender ser un documento completo, está dirigido a los colombianos y los europeos que tienen que enfrentar el dilema mencionado anteriormente. El objetivo de este informe no es criticar las decisiones tomadas por las personas que se ven involucradas en un caso de secuestro. Por el contrario, su intención es promover el debate sobre esta forma de terrorismo cada vez más utilizada. Este es el momento preciso para desarrollar una estrategia común. Pero sobre todo, esta iniciativa debe ser un incentivo para que la comunidad internacional le brinde más atención al secuestro como una violación flagrante a los derechos humanos.

### **Objetivo, alcance y método del estudio**

En este documento nos concentramos en las prácticas del secuestro relacionadas directamente con los ingresos de las partes en conflicto. Esto excluye el secuestro realizado por los delincuentes comunes (aproximadamente el 10%) y los secuestros por motivos políticos. El enfoque de este estudio está determinado por el hecho de que los extranjeros (europeos) pagan una cantidad relativamente grande por los rescates, aunque en realidad son pocos comparados con los miles colombianos víctimas de este flagelo anualmente. La resistencia armada (y no los otros grupos armados ilegales como los paramilitares que también cometen este delito, pero que hasta al momento no han secuestrado extranjeros) es responsable de la mayoría de los secuestros, incluyendo los de los extranjeros. Esto explica el por qué se menciona a la guerrilla con mayor frecuencia en el contexto europeo.

El material investigativo de este documento está basado en una gran cantidad de fuentes, tales como las autoridades colombianas e internacionales encargadas de la seguridad, las ONGs y algunos expertos internacionales. Por otro lado, varios funcionarios de estado y diplomáticos nos han suministrado información confidencial y valiosa, además de incluir los datos de nuestra extensa red en Colombia. Todas las fuentes consultadas solamente difieren en cuanto a los detalles, pero no en cuanto a la esencia. Todos coinciden con nuestra experiencia en Colombia, que fue el motor que impulsó la elaboración de este informe.

# 1. El secuestro en el contexto mundial

## 1.1 El secuestro: arma de todos los tiempos

El secuestro ha sido utilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad como una arma poderosa para obtener dinero, rehacer la deshonra, presionar cambios políticos, liberar prisioneros (de guerra) o como venganza personal. En efecto, casos de secuestro fueron narrados ya por los tiempos de la escritura del Antiguo Testamento. El examen del fenómeno del secuestro depende sin embargo, de circunstancias históricas, políticas y culturales. En la antigüedad el secuestro era un medio para subyugar o comerciar personas tras la conquista de sus territorios. En el medioevo, el secuestro con fines de obtener ganancias a través del rescate, a pesar de ser una práctica común durante guerras y cruzadas, era considerado como un asalto ilegal.

Hoy en día el secuestro es calificado, por lo general, como un acto criminal. No obstante, Estados o individuos aducen tener razones políticas, culturales o económicas para no ver en el secuestro un delito. Recientemente en Colombia, por ejemplo, cuando salió a la luz pública que el grupo subversivo de las FARC mantenía a 53 soldados en su poder, atados y con sogas al cuello, un ministro colombiano recriminó a la prensa por hablar de ‘secuestro’ en cambio de utilizar el término más neutral de ‘retención’.<sup>2</sup> El uso de eufemismos es, aparentemente, un instrumento de algunos funcionarios oficiales para querer convencer a la opinión pública de que Colombia no se encuentra en un estado de guerra.

A pesar de los múltiples motivos relacionados con los casos de secuestro y las diferentes formas históricas y culturales en las cuales se manifiesta el rapto, el fenómeno del secuestro puede ser definido en términos generales. El verbo secuestrar se describe en el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española como ‘retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros fines’. Según la organización colombiana de víctimas del secuestro ‘Fundación País Libre’ el secuestro es considerado generalmente como ‘la limitación arbitraria, injustificada e ilegal de la libertad personal mediante acciones de retención, arrebatamiento, ocultamiento y/o la sustracción’.<sup>3</sup>

*Cuando los secuestros se cometen dentro del contexto de una guerra (civil) o un conflicto armado, el uso del vocablo ‘toma de rehenes’ es más frecuente. Dicho término proviene del Derecho Internacional Humanitario, más exactamente del artículo 1(b) del Artículo común 3 de las Convenciones de Ginebra y el artículo 4(2) (c) del Protocolo II. Sin embargo en muchos países, la llamada toma de rehenes es cono-*

*cida como secuestro. El comentario del Protocolo define a los rehenes como personas que “se encuentran, de grado o por fuerza, en poder de una de las partes en conflicto o de uno de sus agentes y que responden con su libertad, su integridad corporal o su vida de la ejecución de órdenes dadas por las personas en cuyo poder están o de los actos hostiles cometidos contra ellas”.<sup>4</sup>*

En términos generales, los motivos y las intenciones de los secuestradores definen la clasificación del crimen del secuestro. Fundación País Libre distingue en este sentido tres tipos de secuestro. Primero está lo que ellos llaman el ‘secuestro simple’, y que se refiere a los casos en los que los secuestradores no hacen exigencias concretas. Algunos ejemplos de secuestros simples se dan en el tráfico ilegal de menores destinados a la adopción o a la prostitución, la violación del derecho de custodia, el secuestro durante actividades delictivas como el asalto, el secuestro de personas por motivos sexuales y la desaparición forzada a manos de fuerzas estatales. El segundo tipo de raptó se da en los casos en que los secuestradores alegan motivos políticos y piden demandas políticas claras. El secuestro extorsivo por motivos económicos es la forma más conocida de este crimen. Con fines lucrativos los criminales exigen, en estos casos, un rescate en dinero o especies.<sup>5</sup>

## **1.2 El auge mundial del secuestro**

En algunos países del mundo, la seguridad y la protección de la población en cuanto al secuestro es cada día menor. El número de secuestros con fines lucrativos ha venido creciendo, a nivel mundial, desde la década pasada. Entre 1968 y 1982 un estudio gubernamental registró 951 casos de secuestro en 73 países.<sup>6</sup> Al final del año 1997 la prensa internacional (basada en estadísticas de la compañía aseguradora Hiscox Group) reveló el alarmante incremento del secuestro, de 1.367 casos en 1996 a 1.407 casos en 1997. Comparado al año 1991, el número de secuestros casi se había duplicado.<sup>7</sup> Es más, en 1999 el número de secuestros extorsivos a nivel mundial había alcanzado un nuevo récord. De acuerdo a los cálculos conservadores del Grupo Hiscox, en 1999 hubo 1.789 casos de secuestro, el 92% de ellos ocurridos en sólo 10 países. Habiendo ocurrido en Latinoamérica más de las tres cuartas partes del total de casos, esta región se convierte en la de más alto riesgo de secuestro.<sup>8</sup> Expertos estiman que más de 500 millones de dólares son pagados cada año a las bandas de secuestradores, en su mayor parte en Sudamérica.<sup>9</sup>

*Tal crecimiento espectacular del secuestro a nivel global no es sólo el resultado del incremento de la delincuencia común, pero puede ser aclarado también, en buena parte, por la agudización de numerosos conflictos internos y el estallido de otros conflictos internos ya existentes tras el cese de la Guerra Fría.<sup>10</sup>*

## La Guerra Fría

Los conflictos intraestatales o internos no son, en sí, un fenómeno nuevo. Ya durante la guerra fría casi un 75% de los conflictos registrados en el mundo podrían ser clasificados como internos.<sup>11</sup> Tras la Segunda Guerra Mundial surgieron guerras irregulares o informales declaradas, frecuentemente, por grupos guerrilleros izquierdistas inspirados en los modelos de Mao Tse-Tung o Ché Guevara.<sup>12</sup> En América Latina surgieron grupos guerrilleros en El Salvador, Guatemala y Colombia. Sin embargo durante esta era, los conflictos internos fueron frenados a cierto nivel debido al interés de ambas superpotencias de guardar un equilibrio de fuerzas en el mundo. La posibilidad de una intensificación grave de un conflicto regional los llevó a ser precavidos y limitó sus demostraciones de poder principalmente a una política de disuasión.

Los bandos armados de los conflictos internos durante la Guerra Fría representaban principalmente la división bipolar de las superpotencias e incluso, dependían financiera y militarmente de ellas. Por aquella época, el secuestro era utilizado, frecuentemente, para chantajear políticamente a gobiernos. Los sonados casos de secuestros ejecutados por grupos políticos, como el del ex-primer ministro italiano Aldo Moro (1978), el de 52 funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Teherán (1979) y el del Brigadier General estadounidense James Dozier, fueron comentados intensamente por la opinión pública.

## La época de la Post-Guerra Fría

Con la culminación de la guerra fría las estructuras culturales y socio-económicas existentes se debilitaron en diferentes partes del mundo. El fundamento ideológico de las fuerzas del poder perdió su sentido. Sin la influencia contenedora de las potencias, las tensiones locales y los conflictos brotaron de nuevo. Surgieron entonces nuevas pugnas internas que tomaban las más variadas formas desde el nacionalismo tradicional hasta las guerras tribales, y las características de conflictos ya existentes en los tiempos de la guerra fría, posteriormente, cambiaron su forma drásticamente.<sup>13</sup> Por ejemplo, en el mercado negro mundial podía obtenerse una considerable cantidad de armas ligeras y equipos pesados. Numerosos conflictos internos han sido alimentados con armas provenientes de los depósitos inhabilitados de la guerra fría.<sup>14</sup>

*Con el fin de la guerra fría los grupos irregulares actores de los conflictos internos no pudieron contar más con el apoyo y el dinero de las potencias, y se hicieron a la búsqueda de fuentes financieras propias. Un análisis de numerosos conflictos de la década pasada demuestra que las guerras civiles están relacionadas con la presencia de actores que han conseguido financiación para su implicación en la guerra. El dominio sobre las nuevas fuentes financieras es, a menudo, motivo de más violencia y guerra.<sup>15</sup>*

El saqueo, el chantaje tributario y el tráfico ilegal de recursos naturales han demostrado ser negocios muy lucrativos para rebeldes y grupos irregulares armados. En Angola, por ejemplo, grupos irregulares armados financian sus guerras con el comercio ilegal de diamantes y los rebeldes de Afganistán lo hacen con el comercio de jade, lapis lazuli y narcóticos.<sup>16</sup> Un ejemplo reciente de este fenómeno es la industria de madera en Liberia, que provee amplios recursos a un grupo guerrillero de Sierra Leona.<sup>17</sup> Estas economías de guerra están con frecuencia sujetas a la globalización y tienen tendencia a cruzar fronteras nacionales. En el sur de Sudan, noroeste de Kenya y nordeste de Uganda, grupos rebeldes armados controlan la minería de oro y rubís, que son conducidos ilegalmente hacia la India.<sup>18</sup>

## El incremento del secuestro mundial

*Aparte de este tipo de saqueo, chantaje tributario y tráfico ilegal de recursos naturales, el secuestro y la extorsión son otras dos fuentes, aún más importantes, de ingresos de los grupos irregulares armados de Colombia y otras partes del mundo. Durante la década de los noventa el delito del secuestro se incrementó – o surgió - en países caracterizados por el caos interno, por las transiciones políticas y la guerra civil, la debilidad y la corrupción de los aparatos judiciales adosados por las autoridades estatales, y la brecha creciente entre pobres y ricos.*

La periodista Señora Ann Hagedorn Auerbach, autora de la obra estándar 'Ransom. The untold story of international kidnapping'<sup>19</sup>, explica el auge del secuestro a nivel mundial bajo la luz de lo que la autora llama **"el fenómeno del desplazamiento"**.<sup>20</sup> El fin de la guerra fría desembocó, en numerosos países, en la disolución de grupos insurgentes y la desmovilización de ejércitos y fuerzas policiales oficiales, debido a la falta de presupuestos o a procesos de paz. Antiguos soldados oficiales así como insurgentes, con gran entrenamiento y experiencia pasaron a engrosar las filas de desempleados. Estas personas se convirtieron en un atractivo para grupos de criminales, bandas de secuestradores y grupos insurgentes que lograron sobrevivir al desmoronamiento del antiguo orden mundial gracias a sus actividades criminales.<sup>21</sup> La misma experiencia de la guerrilla contribuiría significativamente a la realización de secuestros por ex-guerrilleros.

Además de los anteriores motivos, el espectacular aumento del número de secuestros durante la pasada década puede ser explicado por **la creciente globalización**, que provocó un crecimiento de la industria eco-turística en países en desarrollo y en las regiones en conflicto, así como la expansión de las inversiones y las actividades empresariales por todo el mundo.

*Hoy, las víctimas del secuestro son sencillos empresarios, turistas, trabajadores empleados de compañías multinacionales y de organi-*

*zaciones no gubernamentales, pero también miembros de las clases altas y medias de las mismas poblaciones nacionales. Estas víctimas ya no ocupan los titulares de la prensa como en épocas anteriores, pasando a engrosar las estadísticas de víctimas anónimas.*

### **Desplazamiento tras el derrumbe de la Unión Soviética**

Tras el colapso del imperio soviético, la mafia rusa y las bandas de secuestradores reclutaron entonces a antiguos agentes del servicio de inteligencia KGB, así como a ex policías y a militares desempleados para ampliar sus actividades. En la provincia rusa Chechenia, en especial, el número de casos de secuestro se elevó relativamente. A causa del hecho de que los extranjeros en Chechenia comenzaron a ser raptados por bandas de secuestradores y la probabilidad de morir durante un secuestro se convirtió en la más alta del mundo, la compañía aseguradora Hiscox Insurance Group decidió en 1988 no asegurar más a ciudadanos de países occidentales que operen en Chechenia.<sup>22</sup>

Después de la invasión rusa en Chechenia en septiembre de 1999 se detuvo, prácticamente, el secuestro de extranjeros. No obstante, el número de raptos creció porque tanto oficiales como soldados de las fuerzas rusas empezaron a detener rutinariamente civiles chechenos, para liberarlos sólo tras el pago de rescate. Debido a que los efectivos de las fuerzas rusas son considerados actores oficiales, los crímenes cometidos son registrados como 'detención arbitraria y extorsión'. En realidad, se trata de un tipo de secuestro extorsivo. Según la organización Human Right Watch el ejército ruso en Chechenia puede ser señalado como el responsable de miles de dichos delitos desde el inicio de la guerra.<sup>23</sup>

El derrumbe de la Unión Soviética también provocó el desplazamiento de rebeldes musulmanes de Afganistán a Kashmir, en 1994. Tras el retiro del ejército soviético de Afganistán, unos cientos de combatientes afganos se adhirieron a los musulmanes de Kashmir en su lucha separatista contra la India, dominado por los Hindúes. Con la llegada de los guerreros afganos creció el número de secuestros, sobre todo de extranjeros, en la India.<sup>24</sup>

## **1.3 El secuestro en América Latina**

Tras la guerra fría, las fuerzas de seguridad nacional de varios países latinoamericanos fueron desarmadas y desmovilizadas. El Salvador, Honduras y Guatemala redujeron sus fuerzas armadas a la mitad. En Nicaragua el número de fuerzas armadas sandinistas fue recortado de 90.000 a 11.250 efectivos. Igualmente, grupos de rebeldes y contra-rebeldes en Guatemala, El Salvador y Nicaragua fueron desarmados.<sup>25</sup> Los efectos del fin de la guerra fría también se hicieron notar en las estadísticas de secuestro en América Latina. En Guatemala, la desmovilización proporcionó a las pandillas criminales y de secuestradores, experiencia, y especialización criminal. Esta es una de las razones por las cuales Guatemala apareció en 1997 a la cabeza de las estadís-

ticas con 1.739 secuestros.<sup>26</sup> Entre los años 1991 y 1998 Guatemala llegó a ocupar el sexto puesto entre los 10 países con más casos de secuestros.<sup>27</sup>

México, por su parte, ocupó, durante ese mismo lapso de tiempo el segundo lugar con 656 secuestros registrados. Una cifra, sin embargo, considerada como conservadora. Según la oficina del Fiscal General mexicano, sólo en el año 1994 el número de secuestros alcanzó los 1.400 casos.<sup>28</sup> Cálculos de analistas independientes arrojan cifras entre los 1.200 y los 2.000 secuestros durante el año 1995.<sup>29</sup> La mayoría de los secuestros en México se atribuyen a la delincuencia común. Una de las razones del crecimiento de los secuestros en México después de 1994 se hizo evidente 2 años más tarde. En 1994 se instituyó el grupo guerrillero Ejército Popular de la Revolución (EPR).<sup>30</sup> Los miembros del EPR han sido entrenados en Colombia y ha habido rumores de que operan como una sucursal de la guerrilla colombiana.<sup>31</sup> Los rebeldes se habían financiado en buena parte con los dividendos del secuestro.

### **Venezuela**

Los países limítrofes con Colombia también experimentaron crecientes casos de secuestros durante la década de los noventa, entrando igualmente a figurar en la lista de 'los 10 lugares más peligrosos del mundo'. En Venezuela, el grupo guerrillero colombiano FARC se involucró en la industria del secuestro. El ministro venezolano de Asuntos Interiores y Justicia condenó, públicamente, las actividades del secuestro y la extorsión de las FARC en Venezuela. El ministro anunció en mayo de 2001 severas medidas contra lo que calificó "la perversa conducta" de la guerrilla.<sup>32</sup> La actitud del funcionario venezolano es notable si se considera que la política oficial del Gobierno de Chávez es de 'neutralidad' hacia los guerrilleros y cuando, además, se presume que Chávez mantiene estrechos contactos con los mismos.

### **Ecuador**

Las actividades delictivas de las bandas de secuestradores en Ecuador se dirigen contra los ciudadanos extranjeros que trabajan en las remotas zonas petroleras de perforación en la región amazónica del norte del país. En octubre del 2000 diez empleados extranjeros fueron raptados. Tras la huida de dos rehenes franceses y el asesinato de un ciudadano estadounidense en enero del 2001, el resto de los secuestrados fueron dejados en libertad tras el pago de 13 millones de dólares en marzo del 2001.<sup>33</sup> En junio del 2001, la policía colombiana, en coordinación con la embajada de los EE.UU., desarticuló una red de 50 colombianos sindicados de los secuestros selectivos contra los trabajadores de empresas multinacionales en Ecuador, incluido el caso arriba mencionado. A juzgar por sus hábitos, algunos expertos creen que los secuestradores eran (antiguos) guerrilleros colombianos. Las autoridades colombianas aún investigan dicha conexión.<sup>34</sup> Sin embargo, es un hecho que las actividades extorsivas de los grupos armados colombianos en el norte de Ecuador han crecido bastante. Los testimonios de ciudadanos ecuatorianos, en su mayoría ganaderos de la provincia de Carchi, indican esto claramente.<sup>35</sup>



## 1.4 **El secuestro como combustible de conflictos armados**

*El siguiente caso en Filipinas demuestra, que el secuestro y la extorsión se han convertido en importantes fuentes de ingresos de grupos irregulares armados como paramilitares, guerrilleros, separatistas y rebeldes religiosos. Dentro del contexto de los conflictos internos esto significa, literalmente, que los pagos por rescate alimentan los conflictos violentos.*

### **Filipinas**

En el sur de Filipinas, por ejemplo, los grupos separatistas islamistas Abu Sayyaf, Frente Moro Islámico de Liberación (MILF), y el Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF) son los responsables de la mayoría de los secuestros en ese país. Según informes de la compañía aseguradora Hiscox Insurance Group entre los años 1991 y 1998 fueron secuestradas unas 460 personas.<sup>36</sup> Las víctimas favoritas de los criminales son los extranjeros que trabajan en Filipinas o los turistas visitantes de quienes esperan altas sumas por el rescate.

En abril del 2000 los musulmanes extremistas del grupo rebelde Abu Sayyab pasaron al primer plano de las noticias mundiales tras el secuestro de un grupo de turistas compuesto por tres alemanes, dos franceses, dos sudafricanos y dos finlandeses raptados en un centro vacacional de una isla malaya. Dicho grupo de turistas fue llevado por sus secuestradores a la isla filipina de Jolo. Libia, en el medio oriente, que ha sido tratada por el mundo occidental como un paria diplomático desde los actos terroristas de los años ochenta, se ofreció como mediador.<sup>37</sup> Pero, tres meses más tarde sólo un pequeño grupo de rehenes malayos había sido liberado. Entre tanto, crecía la presión del Gobierno alemán sobre los negociadores filipinos.

Según el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, el negociador filipino sin consultar a su homólogo libio reunió un millón de dólares provenientes de fuentes de negocios del presidente filipino y pagó el rescate de la rehén alemana Renate Wallerts, liberada el 17 de julio del 2000. El Gobierno alemán le reembolsó luego el dinero al Gobierno filipino a través de una cuenta bancaria exclusiva en un banco de Hong Kong y pagó así, de hecho, dinero por el rescate de la señora Wallert.<sup>38</sup> Los rehenes restantes fueron rescatados por el Estado libio y fueron liberados en pequeños grupos en agosto y septiembre. El negociador libio aseguró que su país no pagó el rescate en dinero efectivo, pero que Libia financió algunos 'proyectos de desarrollo estructural' en el sur de Filipinas por un monto aproximado entre 11- 18 millones de dólares.<sup>39</sup> Dicho 'dinero para el desarrollo' iría a ser administrado por la Fundación Humanitaria Khadafi, dirigida por el hijo del coronel Khadafi.

Otras fuentes sin embargo, contradicen la versión oficial del Gobierno libio dando a conocer que Libia pagó un millón de dólares en efectivo por cada uno de los veinte rehenes restantes.<sup>40</sup> Según el ejército filipino, Abu Sayyaf recibió además 5.5 millones de dólares por la liberación de los rehenes en julio del 2000.<sup>41</sup> En una semana los rebeldes secuestraron a más personas.

*El resultado de este secuestro fue darle fruto a las ambiciones de varios grupos involucrados, como son los rebeldes, los políticos filipinos y el señor Kadhafi.*

Los grupos rebeldes pudieron realizar un crecimiento militar sustancial. Ellos no sólo compraron más armamento y munición sino que reclutaron a más miembros. Abu Sayyaf era un grupo de unas cuantas centenas de miembros; tras los pagos de rescate, su número subió a más de mil.<sup>42</sup> Pero no todo el dinero fue a dar a los bolsillos de los guerrilleros. Una buena parte del dinero fue desviado hacia políticos filipinos, y entre ellos a su principal negociador.<sup>43</sup> El señor Kadhafi, por su lado, compró una mejor imagen de Libia ante los ojos del mundo occidental y dio los primeros pasos hacia un restablecimiento de las relaciones con Europa. Poco tiempo después de la liberación de los rehenes, Kadhafi fue invitado por Francia, que durante ese semestre presidía la Unión Europea, a participar en una reunión informal de la Unión Europea en noviembre del 2000.<sup>44</sup> La familia alemana Wallert tuvo menos suerte. El ministerio alemán de Relaciones Exteriores les pasó una cuenta por 13.000 marcos, unos 6.500 dólares, por 'cobertura de gastos'.

La industria del secuestro en Filipinas funciona como una máquina que mantiene en marcha el conflicto e incluso lo intensifica. No obstante, el más destacado ejemplo de tal fenómeno no se encuentra en Asia sino en América Latina. Desde hace ya una década Colombia lidera todas las estadísticas del secuestro. El secuestro extorsivo se ha convertido en Colombia en una fuente importante de ingresos de diversos grupos armados e incluso evitó la desintegración de uno de los grupos guerrilleros que estaba a punto de desaparecer.

2 Oppenheimer, A., "Colombia's elite remains on war's sidelines", en: *Miami Herald*, 8 de julio 2001.

3 Información obtenida de la Fundación País Libre.

4 Sandoz, Y., Stwinarski, C. y Zimmermann, B., (ed) *Comentario de los Protocolos del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949*, (Ginebra 1987).

5 Información obtenida de la Fundación País Libre.

6 Hagedorn Auerbach, A., *Ransom: The untold story of international kidnapping*, (New York 1998) 23.

7 Cowe, R., "Kidnapping: the world's top growth industry", en: *The Guardian*, 9 de octubre de 1998; "Kidnapping on increase, says Hiscox", en: *Daily Mail*, 9 de octubre de 1998; "Kidnapping at record level", en: *Financial Times*, 9 de octubre de 1998; Farrelly, P., "Danger zones", en: *The Observer*, 11 de octubre de 1998.

8 Wilson, J., "Kidnaps for ransom reach worldwide high", en: *The Guardian*, 21 de abril de 2000.

9 Treaster, J.B., "Kidnapping with money as the only object", en: *The New York Times*, 30 de junio de 2001.

- 10 Esto es un desarrollo generalizado que no se puede aplicar a todos los casos. Varios conflictos intraestatales disminuyeron con el fin de la guerra fría, por ejemplo en América Latina. Pero uno de los factores que llevaron a los rebeldes a entrar en un acuerdo de paz fue el hecho que estaban militarmente muy débiles después del periodo de la guerra fría, una observación que aparentemente apoya el desarrollo generalizado de la Guerra Fría.
- 11 Holsti, K.J., *The state, war and the state of war* (Cambridge 1996) 37
- 12 Kaldor, M., *New & Old Wars. Organized violence in a global era*, (Cambridge 1999) 30.
- 13 Ibídem, 70.
- 14 Ibídem, 96.
- 15 Collier, P., *Economic Causes of Civil Conflict and their Implications for Policy*, El Banco Mundial, (Washington, junio del 2000).
- 16 Duffield, M., The political economy of internal war: Asset transfer, complex emergencies and international aid, en: J. Macrae, y A. Zwi (ed), *War and Hunger: Rethinking International responses* (London, 1994).
- 17 McDonald, G., *Exploring Natural Resources as a Fuel for Conflict*, Internal SCIAF document, draft One, June 2001, 3.
- 18 Información obtenido de Señor A.J. Dietz, profesor de la Universidad de Amsterdam (UVA).
- 19 Traducción del título: Rescate. La historia no narrada del secuestro internacional
- 20 Hagedorn Auerbach, A., *Ransom*, 23-26.
- 21 Con frecuencia estos combatientes también formaron sus propias pandillas de secuestro.
- 22 Cowe, R., "Kidnapping; the world's top growth industry", en: *The Guardian*, 9 octubre de 1998.
- 23 Información obtenida de la oficina de Human Rights Watch en Chechenia, julio de 2001.
- 24 Hagedorn Auerbach, A., *Ransom*, 25-26.
- 25 Stevens, W.J., *Uitdagingen voor Latijns-Amerika op de drempel van het derde millennium*, (Leuven – Apeldoorn 1997) 16.
- 26 Fundación País Libre, *Programa Nacional de Asistencia Integral al Secuestrado*, Proyecto (Santafé de Bogotá, julio de 1998) 18.
- 27 Farrelly, P., "Danger zones", en: *The Observer*, 11 de octubre de 1998. Estadísticas basadas en información del Grupo de Seguros Hiscox.
- 28 Bamrud, J., "Kidnapping Inc.", en: *U.S./ Latin Trade*, febrero de 1996.
- 29 Hagedorn Auerbach, A., *Ransom*, 26-27.
- 30 Debe de ser tomado en cuanto que el ERP solo puede ser considerado responsable por parte de los secuestros que toman lugar en México. Muchos de los secuestros en México son llevados a cabo por delincuentes comunes.
- 31 Hagedorn Auerbach, A., *Ransom*, 26-27.
- 32 Reyes, M., "Duras palabras de Miquilena a la guerrilla", en: *El Tiempo*, 18 de mayo de 2001.
- 33 Treaster, J.B., "Kidnapping with money as the only object", en: *The New York Times*, junio 20 de 2001.
- 34 "Cae poderosa red de secuestradores de extranjeros", en: *El Tiempo*, junio 23 de 2001.
- 35 Koopman, E., "Rebellen zijn alles behalve voorbeeldige burens", en: *Trouw*, 30 de julio de 2001.
- 36 Cowe, R., "Kidnapping; the world's top growth industry", en: *The Guardian*, 9 de octubre de 1998 y Farrelly, P., "Danger zones", en: *The Observer*, 11 de octubre de 1998.
- 37 El coronel Gadafi envió a su emisario Azzarouq en mayo de 2000 quien medió al lado del negociador filipino Aventajado.
- 38 "Hat die Bundesregierung eine Million Dollar für die Freilassung Renate Wallerts gezahlt?", en: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 21 de octubre de 2000.
- 39 Kremb, J., "Eine Bühne für die Politiker", en: *Der Spiegel*, no. 37/2000, 188-189.
- 40 Boissevain, M., "Vrijgelaten gijzelaars zijn blij, maar wie volgt?", en: *De Volkskrant*, 12 de septiembre de 2000 y "Hat die Bundesregierung eine Million Dollar für die Freilassung Renate Wallerts gezahlt?", en: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 21 de octubre de 2000.
- 41 Reuters, AP/ AFP, "Vijf westerse gijzelaars vrijgelaten", en: *De Volkskrant*, 28 de agosto de 2000.
- 42 Boissevain, M., "Vrijgelaten gijzelaars zijn blij, maar wie volgt?", en: *De Volkskrant*, 12 de septiembre de 2000.
- 43 Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Hat die Bundesregierung eine Million Dollar für die Freilassung Renate Wallerts gezahlt?", 21 de octubre de 2000.
- 44 Brouwer, A., "Woestijnorakel", en: *De Groene Amsterdammer*, 9 de septiembre de 2000.



## 2. Colombia: del secuestro político a las pescas milagrosas

### LA INDUSTRIA DEL SECUESTRO COMO UN INCENTIVO PARA LA GUERRA

En el punto culminante del período de la guerra fría, el presidente estadounidense Nixon utilizó la expresión: “el dinero es el motor de la guerra”.<sup>45</sup> A pesar de que el equilibrio del poder en el mundo ha cambiado dramáticamente desde entonces, su aseveración todavía se puede aplicar al crecimiento del conflicto colombiano en la posguerra fría.

Este capítulo pretende demostrar que los ingresos cada vez mayores por medio del secuestro, combinados con el incremento en las utilidades por el tráfico de drogas y la extorsión, llevaron al fortalecimiento militar de las partes enfrentadas e intensificaron el conflicto interno. Un conflicto que provocó un miedo y unas penurias indescriptibles, causó el desplazamiento de más de 1.5 millones de colombianos durante los últimos diez años, y agravó considerablemente los problemas económicos de Colombia. Con razón se dice que la industria del secuestro y de la extorsión y el conflicto interno se nutren mutuamente. Tanto, que una disminución significativa o el cese completo de las prácticas de secuestro y extorsión implicarían un gran avance hacia la paz, o viceversa, un acuerdo de paz significaría una reducción definitiva del secuestro y la extorsión.

#### 2.1 *El conflicto colombiano durante el período de la Guerra Fría*

La historia de Colombia se caracteriza, prácticamente desde su creación en 1810, por guerras civiles y conflictos internos. Los dos partidos políticos opuestos, los liberales y los conservadores, se enfrentaron en una guerra sangrienta hasta que sellaron un pacto político a comienzos del siglo veinte. Esta reconciliación permitió cuarenta años de ‘convivencia política’ en relativa paz. Después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, un líder de linaje popular y candidato presidencial de los liberales en 1948, el partido conservador en el poder empezó a utilizar la violencia estatal contra los liberales. La incapacidad del partido liberal para frenar la violencia gubernamental en contra de la población civil condujo, espontáneamente y en muchas regiones, a la resistencia armada de los campesinos. Esta guerra civil, que pasó a la historia como ‘*La Gran Violencia*’, desembocó en la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Los dos grupos guerrilleros más grandes de Colombia, los cuales surgieron en la década de los años sesenta, se afianzaron firmemente en estos grupos liberales de la resistencia campesina.

El grupo de base de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se formó en mayo de 1964. Desde su fundación, las FARC contaron con el apoyo económico, político y militar de la Unión Soviética. El segundo grupo guerrillero más grande de Colombia, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) recibió ayuda de la revolución cubana para su fundación. Durante el período de la guerra fría, La Habana ayudó al ELN en la capacitación, organización y entrenamiento de sus soldados. A pesar de los problemas internos que erosionaron su cohesión interna, el ELN vivió una época de crecimiento relativo hasta 1973. En ese año recibió un golpe militar que casi lo elimina por completo. Además de estos dos grupos, surgió uno más pequeño llamado EPL (Ejército Popular de Liberación) y se crearon otros grupos rebeldes mucho más pequeños como el JEGA (Jorge Eliécer Gaitán), el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), el M-19 (Movimiento 19 de Abril) y el grupo Jaime Bateman Cayón, el cual se separó del M-19.<sup>46</sup>

Los grupos guerrilleros de Colombia, al contrario de los movimientos guerrilleros de América Central, se concentraron más en la parte interna durante el período de la guerra fría. Aparte de la ayuda dada por el gobierno cubano al ELN y del soviético a las FARC, la guerrilla trató de desarrollar estrategias en Colombia, con el fin de generar ingresos sin agobiar demasiado a los de bajos recursos. De esta manera esperaban obtener el apoyo moral de las clases más bajas, en cuyo nombre hacían la guerra en primer lugar. En las guerras cortas es a menudo relativamente fácil obtener el apoyo de los ricos y de la clase media. Sin embargo, la guerra en Colombia se estaba prolongando demasiado, y, fuera del M-19 que obtuvo algún apoyo de la clase media, la guerrilla colombiana no pudo asegurar el apoyo de grandes sectores de la población.<sup>47</sup>

*Con el fin de solucionar sus problemas financieros, la guerrilla Colombiana optó por cobrar lo que denominaron 'impuestos revolucionarios' a las empresas grandes y medianas y a los hacendados durante el período de la guerra fría.<sup>48</sup> En los años setenta, Colombia solamente supo de una docena de secuestros, por mucho, uno por año. El motivo de los grupos guerrilleros para secuestrar era principalmente de tipo político, y sus objetivos usualmente eran los políticos y los burócratas.<sup>49</sup> Algunos secuestros eran de naturaleza extorsiva. El ELN empezó a recibir el pago de sumas considerables por la liberación de secuestrados alrededor de 1985.*

## **2.2 El conflicto colombiano después de la Guerra Fría**

A finales de la década de los ochenta, el desempleo entre los combatientes y los rebeldes mejor entrenados del mundo, que habían luchado por los superpoderes o por sus sustitutos, aumentó rápidamente. Como disponían de una



amplia selección de armas y de gran conocimiento especializado, se unieron a las bandas criminales o crearon sus propias bandas y comenzaron operaciones para la comercialización de la droga y el secuestro. Este fenómeno también dejó sus huellas en Colombia. Por ejemplo, los infames barones colombianos de la droga que controlaban la mayor parte del comercio colombiano de drogas durante los años ochenta disponían de tropas especiales, entrenadas y armadas por combatientes de la guerra fría, quienes se convirtieron en mercenarios.<sup>50</sup> Después de la campaña ofensiva contra algunos carteles de la droga en los años noventa, Colombia vivió una segunda afluencia de expertos en el uso de armamento altamente tecnificados y del secuestro. Muchos de ellos recurrieron al secuestro y a la extorsión como formas de conseguir dinero para crear un nuevo negocio de drogas o para encontrar trabajo en grupos criminales o rebeldes.<sup>51</sup>

*La guerrilla colombiana se aprovechó de la afluencia de estos desempleados, expertos en la guerra y el crimen, para solucionar su falta estructural de ingresos. Los grupos rebeldes, uno tras otro, establecieron sus reservas ideológicas de forma separada y se involucraron en actividades delictivas, tales como la producción y el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro extorsivo.*

### **El surgimiento de los paramilitares**

La industria de la extorsión y del secuestro que surgió en Colombia, desafortunadamente originó la aparición de anticuerpos brutales: los grupos paramilitares. En los ochenta, la unión de grupos locales dio origen a la coalición paramilitar conocida como ACCU (Autodefensas Colombianas de Córdoba y Urabá). Este grupo junto con otros paramilitares se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La ofensiva guerrillera no es el único factor que determinó el auge de las autodefensas pero, sin duda alguna, fue el motivo por el cual muchos terratenientes y empresarios apoyaron financiera y logísticamente a estos ejércitos privados. Sin embargo, el remedio que se suponía estas tropas paramilitares podrían ofrecer, causó algo mucho peor que la enfermedad. Los grupos paramilitares, apoyados y protegidos por algunas unidades del ejército nacional, se convirtieron en los responsables de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos en Colombia.<sup>52</sup>

*Tal y como la guerrilla, los grupos paramilitares también buscaron nuevas formas de ingreso con el fin de financiar su guerra sangrienta y devastadora y se involucraron cada vez más en el tráfico de droga y las prácticas de la extorsión. Algunos de los expertos en los operativos de las drogas en los años ochenta encontraron trabajo en los grupos paramilitares de las AUC que protegen algunas de las propiedades más grandes de la nueva mafia de la droga.<sup>53</sup>*

## 2.3 **Nuevas fuentes de financiación de la guerra: las drogas**

Las FARC empezaron a depender de los ingresos de la droga en 1985, cuando el barón de la droga Carlos Lehder les solicitó su protección a cambio de introducirlas en el negocio. Después de que la producción de la coca de Perú y Bolivia pasó a Colombia en los años noventa, Colombia se convirtió en el productor de casi el 75% de la producción mundial.[54] Las FARC se aprovecharon en particular de este cambio. Hoy en día, tanto la guerrilla como los paramilitares de las AUC reciben gran parte de sus ingresos bien por los impuestos que le cobran a los narcos o bien por su participación activa en los cultivos ilícitos y en el comercio de la droga.<sup>55</sup>

### **Los paramilitares y las drogas**

Los paramilitares controlan vastas áreas de cultivo de coca y amapola, con el propósito no sólo de taxar a los dueños de los cultivos sino también de garantizarles a los barones de la droga (que financian gran parte de las actividades de los paramilitares) el suministro permanente de materia prima.

Las investigaciones realizadas por el Fiscal General de la Nación mostraron que en Córdoba y en un departamento vecino, los terratenientes y los comerciantes, en colaboración con los barones de la droga, utilizaron compañías fachadas para canalizar las donaciones a los grupos paramilitares. No se conoce la cifra exacta que los paramilitares han recibido por proteger a la mafia de las drogas, pero se estima que oscila entre US \$ 200 millones y US \$ 1 mil de millones depositados en algunas cuentas bancarias en el extranjero.<sup>56</sup> Según fuentes oficiales, el ingreso neto de las AUC por concepto de la droga fue de US \$ 21 millones en el 2000, suma que les permitió crear 10 nuevos frentes.

*El líder de las autodefensas, Carlos Castaño, declaró a la prensa en mayo de 2001 que el 70% de los ingresos de las AUC provienen del narcotráfico. Pax Christi no tuvo acceso a información más detallada sobre los ingresos de los paramilitares por concepto de narcotráfico.<sup>57</sup>*

### **La guerrilla y las drogas**

En un informe compilado por funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se afirma que la mayor fuente de ingresos de la guerrilla es el narcotráfico. Se estima que dichos ingresos fueron del orden de los US \$ 3,2 miles de millones para el período comprendido entre 1991 y 1999.<sup>58</sup>

El PNUD estima que el ingreso anual por concepto del tráfico de drogas de los grupos rebeldes de Colombia es aproximadamente US \$ 600 millones, que equivale a una tercera parte del volumen total de la comercialización de la droga en Colombia.<sup>59</sup> El DAS estima que la comercialización de la droga le



produjo a la guerrilla colombiana US \$ 980 millones en 1999.<sup>60</sup> La mayor parte de esta cantidad cae en las manos de las FARC, por cuanto el ELN y otros grupos rebeldes solamente controlan una pequeña parte del negocio de las drogas. El grupo guerrillero FARC se involucró en todos los niveles de la producción y comercio de las drogas, hasta convertirse sin dudas en el principal productor de pasta de coca (la materia prima de la cocaína). En las regiones dominadas por las FARC, el monopolio del mercado de las drogas les pertenece. Estas cifras se citan con el único propósito de dar una idea general de la magnitud del ingreso por concepto de las drogas de varios de los grupos armados ilegales en Colombia. Sin embargo, un estudio más profundo de este tema está fuera del alcance de este informe.

## 2.4 **Nuevas fuentes de financiación de la guerra: la extorsión**

Entre las nuevas fuentes de ingresos que han contribuido a la escalada del conflicto armado interno en Colombia después del período de la guerra fría, la extorsión ocupa el segundo lugar.

### **Los grupos paramilitares**

*Desafortunadamente, no existen cifras confiables disponibles respecto a los ingresos anuales por concepto de extorsión de las autodefensas. Sin embargo, a partir de los casos que se dan a conocer a la luz pública anualmente, se puede concluir que los ingresos por extorsión son una fuente de financiación importante para los paramilitares. En Urabá, por ejemplo, los bananeros deben pagar 50 centavos de dólar por cada caja de bananos que exportan, y en La Guajira, se paga un dólar a los paramilitares por cada tonelada de carbón que se exporta.*

### **Las guerrillas y la extorsión**

Durante las primeras décadas de su existencia, los movimientos guerrilleros trataron de obtener el apoyo voluntario del pueblo colombiano. Sin embargo, durante los años ochenta, cuando no hubo más contribuciones voluntarias, este elemento moral se convirtió en algo que podía perder su validez. El líder del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, admitió públicamente en una entrevista televisada en el año 2000 que este grupo obtiene sus ingresos de la extorsión y el secuestro.<sup>61</sup>

*El grupo FARC incluso formalizó la (mala) práctica de la extorsión en el 2000, con la emisión de una 'ley revolucionaria', Ley 002. De acuerdo con esta Ley 002, Las FARC pueden imponer un impuesto del 10% a todas las personas en Colombia que tengan activos por más de un millón de dólares.*

Algunas compañías del Departamento de Santander ya recibieron las ‘evaluaciones’ concretas de las FARC, con respecto a la *Ley 002*.<sup>62</sup> De acuerdo con la Revista Cambio, las FARC enviaron cartas a más de 2000 compañías en el sur de Colombia. Este grupo extorsionó a cada una de estas compañías con una cantidad mínima de US \$ 100.000.

Para presionar el pago de la extorsión, las guerrillas amenazan a las compañías con actos de sabotaje y hostigamiento, tales como el bombardeo de sus instalaciones, convocatoria a huelgas o secuestro de empleados. También se amenaza a las personas particulares con un secuestro potencial. No obstante la ‘cláusula de un millón de dólares’ de la *ley 002*, los grupos de medianos e incluso de más bajos ingresos de la sociedad colombiana también se vieron cada vez más afectados por las prácticas de extorsión de las FARC. A esta forma de forzar a las personas para que paguen el dinero, la guerrilla la llama ‘imposición para la revolución’. En cambio, la sociedad colombiana la llama, de manera coloquial, ‘vacuna’ (contra el secuestro) o ‘boleteo’ (extorsión).

Algunas compañías como Bavaria, Leona, Postobón y varias compañías de petróleo tuvieron la fortaleza y el valor de rebelarse contra esta extorsión. A partir de ese momento, un comandante en jefe de las FARC, ‘el Mono Jojoy’, ordenó a sus frentes paralizar la distribución de las bebidas (gaseosas y cerveza) y obstruir la producción de petróleo. Las respectivas compañías informaron que la distribución de sus productos había sido gravemente obstruida.<sup>63</sup>

El DAS estimó que la extorsión y el robo le produjeron a la guerrilla colombiana aproximadamente US \$ 1,8 mil de millones entre 1991 y 1998.<sup>64</sup> Esta cantidad concuerda exactamente con la cantidad mencionada en la publicación conjunta del ejército colombiano y del Departamento Nacional de Planeación.<sup>65</sup> La diferencia en cuanto a ingresos por extorsión entre las FARC y el ELN es mucho menor que la diferencia en cuanto al ingreso derivado del tráfico de drogas. En otras palabras, la extorsión es un negocio muy importante para el ELN. Como fuente de ingresos, la extorsión le produce al ELN cinco veces más que la comercialización de la droga.

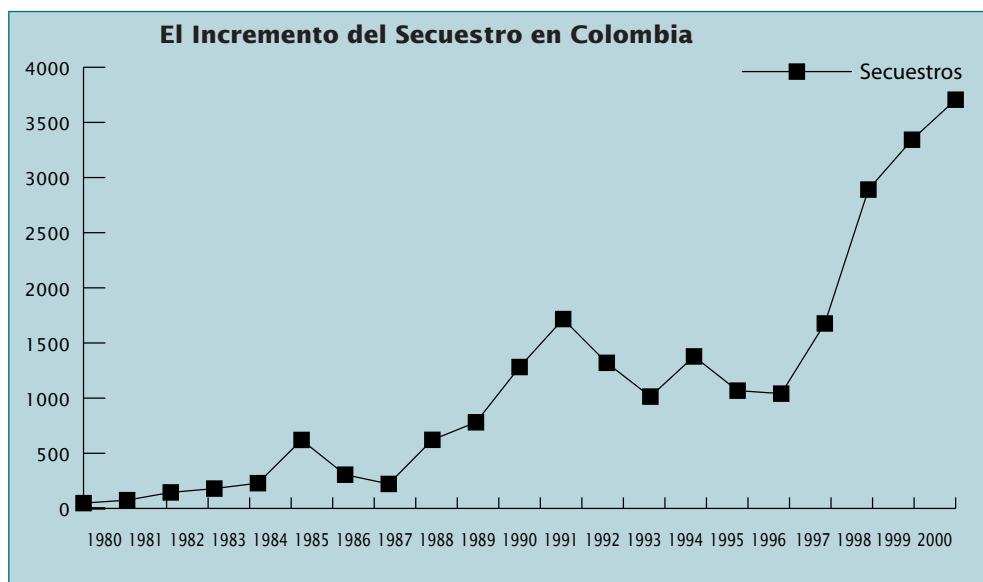
## **2.5 Nuevas fuentes de financiación de la guerra: el secuestro**

A mediados de los años ochenta, la guerrilla colombiana empezó a secuestrar básicamente por motivos económicos. En su búsqueda de financiación para su guerra, los principios ideológicos y morales de su lucha perdieron importancia.<sup>66</sup>

El primero en entender el apalancamiento y en aplicar la práctica del secuestro en toda su extensión fue Jaime Bateman Cayón, Comandante en Jefe del M-19.

El M-19 (se acogió al proceso de amnistía en 1991) refinó y llevó el método de la ‘retención revolucionaria’ a dimensiones desconocidas para los grupos guerrilleros en ese entonces. Sus objetivos eran políticos, propagandísticos y económicos.<sup>67</sup> Otros grupos guerrilleros adoptaron rápidamente esta práctica, y, el secuestro se convirtió en una epidemia incontrolable para las autoridades colombianas en los años noventa. Aunque la guerrilla insiste en utilizar la expresión ‘retención de personas’, el motivo detrás de la gran mayoría de secuestros es económico. De acuerdo con la organización gubernamental, CONASE, el 64% de los secuestros en 1999 fueron de naturaleza extorsiva. El porcentaje real es probablemente más elevado, si se tiene cuenta que en esa época se desconocía el motivo detrás del 11% de los secuestros.<sup>68</sup>

La gráfica a continuación indica claramente el incremento progresivo de la cantidad anual de secuestros en las últimas dos décadas. Esta gráfica se hizo con base a las cifras y estimaciones del abogado Eduardo Delgadillo Bravo para el período 1981-1989<sup>69</sup>, y a las cifras de la Fundación País Libre para el período 1989-2000.<sup>70</sup>



La línea mágica de 1.000 plagios por año se rebasó en 1990, pero esto resultó ser un récord temporal. El número total de secuestros en Colombia en 1998 pasó los 2.000 casos y, solamente dos años después, la Fundación País Libre registró 3.706 casos de secuestros.<sup>71</sup>

*Esto significa que Colombia tiene realmente un promedio de ocho secuestros por día. En otras palabras, cada tres horas se secuestra una persona en Colombia.*

Las consecuencias económicas del secuestro son marcas profundas en la sociedad civil colombiana. La suma de la extorsión depende de los ingresos y bienes de la víctima, sobre los cuales los secuestradores se encuentran muchas veces bien informados. La extorsión de un ciudadano colombiano oscila entre US \$ 1.000 y 400.000.<sup>72</sup>

*Normalmente, esto significa que después de que la tragedia del secuestro ha terminado, las víctimas no solamente sufren las consecuencias prolongadas de los traumas, sino que también terminan encontrándose en medio de deudas cuantiosas. Para la mayoría de las víctimas colombianas, el pago de la extorsión significa la quiebra económica de su empresa (personal o familiar) o el endeudamiento con los bancos a largo plazo y a tasas de interés extremadamente elevadas. Después de haber sido secuestrado, un hombre de 76 años se lamentaba amargamente de que las víctimas del secuestro “le pagan una vez a la guerrilla y dos veces al banco”.<sup>73</sup>*

## 2.6 Cifras del secuestro en Colombia

### ¿Por qué hay discrepancias entre las fuentes?

Las diferentes estadísticas sobre el secuestro en Colombia muestran muchas discrepancias e inconsistencias. Hay tres factores que pueden explicar esta característica de las estadísticas del secuestro. Primero que todo, muchos secuestros en Colombia no se denuncian a las autoridades y se resuelven en privado. Además, las víctimas de un secuestro reportado rara vez revelan el monto que pagaron por el rescate.<sup>74</sup> Las personas involucradas en un caso de estos le tienen miedo a la retribución o a la venganza, temen que las fuerzas corruptas o incompetentes de la policía estén involucradas, o tratan de proteger la imagen corporativa de sus compañías de asociaciones negativas por parte de la opinión pública. Por lo tanto, las estadísticas basadas en la información oficial, así como las cifras divulgadas, están condenadas a permanecer incompletas.

En segundo lugar, el secreto de la guerrilla es incluso mayor. Los grupos rebeldes niegan los secuestros, por cuanto son conscientes de que el secuestro es un delito que viola el Derecho Internacional Humanitario. Por consiguiente, su práctica provoca mala publicidad así como la pérdida de legitimidad en el plano internacional. Esta es la razón por la cual el comandante militar de las FARC, Jorge Briceño, dijo a principios de 1999 que: “las FARC no secuestran gente”<sup>75</sup>, aunque ese año realizaron muchos secuestros que contradijeron sus palabras.

Las discrepancias entre las estadísticas del secuestro también se puede explicar por el hecho de que toda organización tiene sus propias fuentes, su propia forma de investigar y unos intereses y metas específicos.

### **Fuentes: las instituciones estatales colombianas**

Las instituciones estatales colombianas obviamente son la fuente más importante de información sobre las cifras del secuestro. Hace cerca de diez años, las autoridades colombianas (como por ejemplo la policía) casi nunca divulgaban las estadísticas sobre este flagelo, con el fin de desviar la atención de la opinión pública sobre la ineffectividad y la incapacidad operativa de estas instituciones. Actualmente, el Estado tiende a distribuir las cifras sobre el secuestro, con un sentido refinado de la publicidad, a través de diferentes canales nacionales e internacionales con el propósito de mostrar la falta de respeto de la guerrilla por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Cuatro instituciones estatales manejan las estadísticas sobre este fenómeno con regularidad: La Fiscalía General de la Nación, el DAS, las fuerzas de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares (estas dos fuerzas cooperan en el GAULA). Las publicaciones sobre el secuestro de otras instituciones estatales se basan sobre una de estas cuatro fuentes o en su propia recopilación de los datos de estas instituciones estatales.

La única institución estatal con autoridad para calificar un caso de secuestro es la Fiscalía que es la entidad que conoce el caso específico. Las fuerzas de la policía solamente registran el informe de los secuestros, pero es la Fiscalía que, después de haber terminado la investigación legal, decide si los cargos se harán por 'secuestro' o, por ejemplo, por 'homicidio' o 'desaparición'. Esto explica por qué las estadísticas de la policía son siempre más elevadas que las de la Fiscalía. Por otra parte, los comandantes del GAULA (las fuerzas militares y de la policía) tienen algún tipo de interés en mantener las cifras sobre el secuestro en su distrito por debajo, por cuanto un incremento de este fenómeno en su distrito puede tener un efecto negativo en su evaluación anual. Desafortunadamente, estas cuatro fuentes gubernamentales no se comunican entre sí, y desde el cierre de la oficina del Zar Anti-Secuestro en el 2000, no existe una institución estatal que verifique, corrija y reconcilie las inconsistencias entre estas cuatro fuentes.

### **Fuentes: las ONG**

Las ONG colombianas, tales como Fundación País Libre, son la segunda fuente de información sobre las cifras del secuestro. Usualmente estas ONG hacen sus estimaciones con base a la información oficial y en sus propias investigaciones. La Fundación País Libre nombró a un empleado que recoge la información sobre los cargos por secuestro en la Fiscalía, el DAS y el GAULA y averigua los eventuales cargos dobles. Estas cifras oficiales se complementan con algunos casos sobre los cuales las autoridades no tienen información. En consecuencia, podemos considerar la organización Fundación País Libre como una fuente medianamente confiable de información.

### **Fuentes: las compañías de seguros**

Podemos considerar a las diferentes compañías privadas de seguridad y a los agentes de seguros como la tercera fuente de información. Estas compañías proporcionan a sus clientes una estimación de riesgos y publican los estima-

dos con el fin de informar al público en general. Sin embargo, se ha comprobado que no toda esta información es exacta. Por ejemplo, la compañía privada de seguridad Kroll estimó que el número total de secuestros en 1995 fue de más de 4.000 casos.<sup>76</sup> Esta cifra parece desproporcionadamente elevada en comparación con los 1.068 casos reportados por País Libre.<sup>77</sup> Probablemente Kroll conscientemente exageró estas cifras con el fin de elevar la prima de seguros que depende del factor de riesgo. Las autoridades colombianas expulsaron oficialmente a esta compañía del país en 1997 por haber divulgado estas cifras. Este hecho puede explicar el por qué las compañías de seguros y las compañías privadas de seguridad se inclinan a hacer lo contrario. Por ejemplo, el Grupo Hiscox (de Lloyd's) coloca estimados muy conservadores en su web corporativa, añadiendo que estas cifras “están basadas en información razonablemente confiable y que no representa la extensión total del problema”.<sup>78</sup>

### **Fuentes: la prensa**

La prensa colombiana y extranjera a menudo recopila la información de estos tres tipos de fuentes. Algunas veces, utiliza sus propias fuentes. Por ejemplo, el periódico colombiano El Tiempo usaba las estadísticas del abogado colombiano Eduardo Delgadillo Bravo quien afirma que estas cifras están basadas en “información verdadera, recolectada honestamente durante varios años de investigación”.<sup>79</sup>

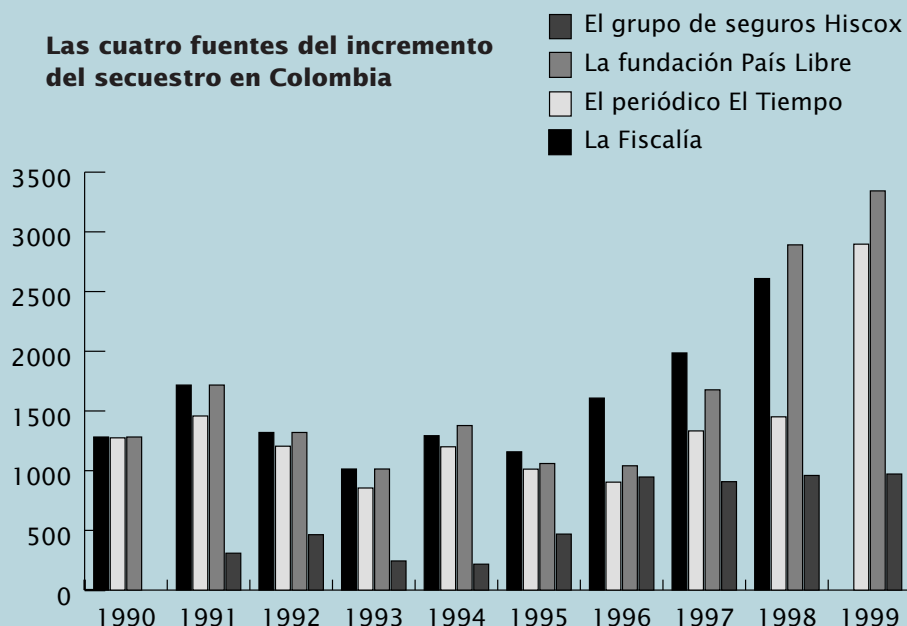
## **2.7 El incremento del secuestro en los años noventa**

Teniendo en cuenta las discrepancias y las inconsistencias de las estadísticas, es, sin embargo, muy posible sacar algunas conclusiones generales significativas. Primero que todo, las diferentes estadísticas muestran un crecimiento espectacular del número de secuestros durante la década de los noventa. En la siguiente gráfica, hacemos una comparación entre los cuatro tipos de fuentes de información mencionados anteriormente. Aunque las fuentes difieren considerablemente en cuanto a las cifras exactas, la tendencia general del incremento durante los años 90 se ve claramente.

### **Las ‘pescas milagrosas’**

El número anual de secuestros se incrementó dramáticamente durante el período 1997-2000. De hecho, el número total de secuestros por año se aumentó en más del doble, de 1.677 casos en 1997 a cerca de 3.706 casos en el 2000. Esto se puede explicar en parte gracias al nuevo fenómeno del secuestro conocido como ‘pescas milagrosas’. Esta expresión se refiere a una práctica infame de la guerrilla en las autopistas y las carreteras más transitadas, donde las fuerzas rebeldes obligan a los conductores y a sus acompañantes a bajarse de los vehículos. A cada una de las personas le piden un documento de identidad y las obligan a hablar: una persona que parezca extranjera o que tenga un acento raro equivale a un secuestro inmediato. Se

### Las cuatro fuentes del incremento del secuestro en Colombia



ha informado que algunas veces la guerrilla revisa los nombres de las personas detenidas en un computador portátil con el fin de verificar si valen la pena y si tienen un seguro contra secuestro.<sup>80</sup> Después de esta primera selección, se llevan al grupo de víctimas a la selva donde la guerrilla confirma su identidad e investiga su situación laboral, económica y familiar. Después de un par de días, liberan a aquellas personas que viven en condiciones económicas precarias. Los demás permanecen en cautiverio y deben pagar el rescate para recobrar su libertad.

El fenómeno de la pesca milagrosa surgió por varias razones. La razón más obvia es que las fuerzas militares y de la policía no tienen la capacidad logística para vigilar toda la infraestructura de transporte de un país con 1'140.000 kilómetros cuadrados. La mayor parte de las carreteras pasan por regiones inhóspitas, en donde no hay ningún tipo de autoridad militar o policía. La segunda razón para el surgimiento de este nuevo tipo de delito es que el mercado potencial del secuestro se redujo durante los años 90.

*Desde 1996, cerca de 1 millón de colombianos han abandonado el país, principalmente porque consideran que los insurgentes los tienen en la mira para extorsionarlos o secuestrarlos.<sup>81</sup> Debido a esta situación, los extranjeros han adoptado medidas extremas de seguridad. Los secuestros en masa aumentan las utilidades de este delito e incrementan las posibilidades de coger algunos 'peces gordos' entre todo ese revuelto.*

Otro criterio en cuanto mayor rentabilidad es que se necesitan menos guerrilleros, proporcionalmente hablando, para secuestrar un grupo en un retén. Finalmente, la pesca milagrosa le permite a la guerrilla ejercer un control territorial en las regiones en donde la hacen. Los medios de comunicación y las autoridades constantemente informan sobre los puntos críticos donde pueden ocurrir los secuestros y dan sugerencias sobre cómo evitar estas zonas. Indirectamente, este tipo de noticias implican que la guerrilla tiene el control.

### **Plagios masivos**

Los plagios masivos en lugares públicos y privados, los cuales comenzaron hace dos años, también explican el número cada vez mayor de secuestros. Algunos de estos secuestros masivos en Colombia se convirtieron en titulares de primera plana de los periódicos (inter)nacionales. El ELN secuestró un avión de Avianca con 46 personas a bordo el 12 de Abril de 1999, con el fin de presionar al gobierno a la desmilitarización de una gran extensión de territorio en Bolívar. El 30 de mayo de 1999, el ELN secuestró a 150 personas en la iglesia de la María en Cali.<sup>82</sup> Los familiares de algunos de los rehenes dijeron que les habían exigido grandes sumas por el rescate para su liberación. El 23 de marzo de 1999, las FARC retuvieron a varias docenas de personas, incluyendo algunos extranjeros, en la vía al Llano y, en septiembre del 2000, el ELN secuestró a un gran grupo de personas en un restaurante de Cali (conocido como el caso del kilómetro 18).

Las FARC realizaron un asalto tipo comando en un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad de Neiva en julio del 2000. La guerrilla hizo una selección de las personas que se encontraban presentes. Se llevó a las personas, cuyos nombres aparecían en la lista de la guerrilla, a la zona de despeje en el Caguán (la zona desmilitarizada a favor de las negociaciones de paz con las FARC). Se da por entendido que esta acción es el preludio de una nueva estrategia urbana de las FARC que afectará a muchos más ciudadanos.<sup>83</sup>

En el año 2000, la Policía colombiana detectó 354 casos de plagios masivos.

### **El plagio de menores**

Las columnas 32 y 40 de las FARC y los delincuentes comunes descubrieron que el secuestro de menores es otra forma de aumentar sus utilidades. Los padres, ante la angustia por la detención de sus hijos, se muestran menos renuentes a negociar y más dispuestos a pagar grandes sumas por los rescates con el fin de evitar que sus hijos sufran. Además, los padres tienden a no denunciar el delito a las autoridades debido a las amenazas de muerte que les hacen los secuestradores y porque buscan proteger a sus hijos del tratamiento desconsiderado de los medios de comunicación y de la curiosidad del público en general.



*Durante el período entre 1994 y 1996, 966 menores fueron secuestrados, de los cuales 667 eran menores de doce años.<sup>84</sup> Durante los últimos años, el fenómeno se aumentó alarmantemente, de 31 casos en 1998 a cerca de 206 casos en 1999.<sup>85</sup>*

En julio del 2000, se hizo público que las FARC se habían llevado a los niños plagiados a la zona de despeje en el Caguán, donde estas jóvenes víctimas permanecieron en cautiverio hasta que sus padres pagaron el rescate para su liberación.<sup>86</sup> Las organizaciones de derechos humanos, tales como Human Rights Watch, la prensa (colombiana) y el ACDHNU, condenaron duramente esta práctica. Este último dijo que los niños secuestrados eran convertidos en objetos de un comercio cruel.<sup>87</sup> Raúl Reyes, el vocero de las FARC, a pesar de haber negado el secuestro de niños, prometió dar una respuesta pública sobre el tema. Hasta la fecha, no ha habido respuesta y las FARC continúan utilizando la zona de despeje como un refugio seguro para los rehenes. En 1999, el ejército colombiano contó 21 rehenes, entre menores y adultos, a quienes este grupo insurgente llevó a la zona de despeje.<sup>88</sup>

## **2.8    *Los principales autores del secuestro***

Las distintas estadísticas también dan una idea general de la imagen unívoca de la responsabilidad de los diferentes autores del secuestro durante los años 90.

La mayoría de las fuentes indican claramente que la guerrilla colombiana es culpable del incremento del secuestro después de la década de los 80. Las FARC cometieron casi la tercera parte de los secuestros en 1999 (28%) y ELN fue el responsable del 24% de estos delitos. Los grupos guerrilleros EPL (6%), el ERP y el Jaime Bateman tienen una cuota menor en la industria del secuestro.<sup>89</sup> La cuota de la guerrilla en el número total de secuestros parece que se está elevando porque, de acuerdo con País Libre, el ELN y las FARC fueron los responsables del 70% de los secuestros que se llevaron a cabo durante el primer semestre del 2001.<sup>90</sup>

Los delinquentes comunes ocupan el tercer lugar en las estadísticas, con una cuota del 10% en los casos de secuestro en Colombia en 1999. A veces es difícil distinguir entre la delincuencia común y la guerrilla: se conoce el fenómeno en que los criminales llevan a cabo un secuestro – tanto por iniciativa propia como por encargo de la guerrilla – y luego venden a sus víctimas a precios menores a la guerrilla, que tiene mayor experiencia en el ‘arte’ de negociar extorsiones.

Los grupos paramilitares, algunos provenientes de la organización de derecha Muerte a Secuestradores (MAS), también pueden responsabilizarse de cometer el mismo delito que antes solían combatir. El número de secuestros realizado por los paramilitares se incrementa cada año: fueron responsables

de entre 4% y 5% de los secuestros en 1999 y, según cifras gubernamentales, realizaron 203 plagios extorsivos en el 2000.<sup>91</sup> Sus motivos son tanto económicos como políticos.<sup>92</sup> Sus víctimas se encuentran con frecuencia dentro de sus mismas filas, como por ejemplo terratenientes que no cumplieron con sus demandas extorsivas.

*En octubre de 2001, la prensa colombiana reveló lo que parecería ser una nueva modalidad de secuestro: en Norte de Santander, por lo menos 70 personas fueron secuestradas por las AUC para forzarlas a trabajar en la producción de coca.<sup>93</sup>*

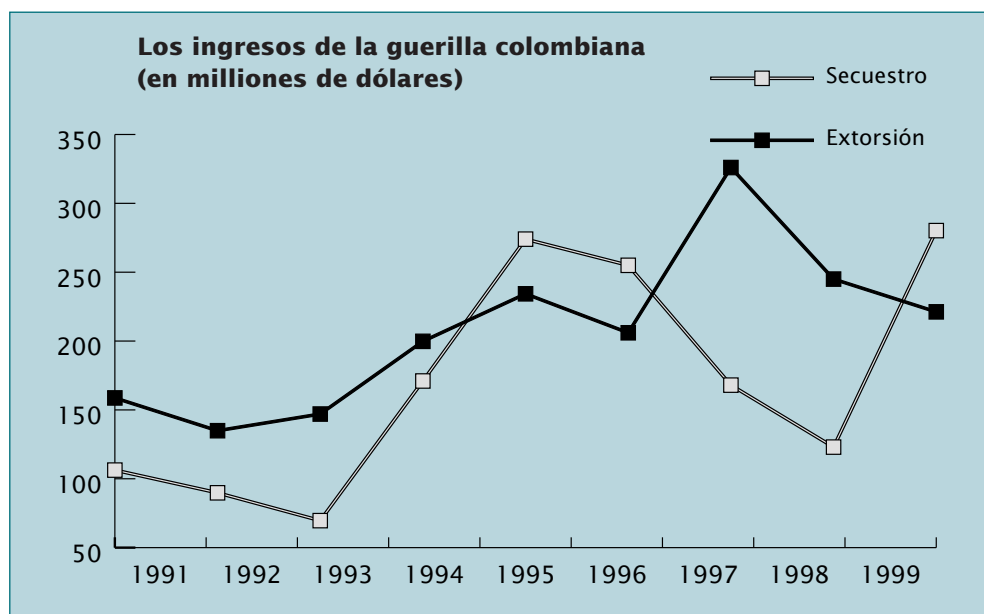
## 2.9 **El secuestro alimenta la maquinaria de la guerra**

El secuestro se convirtió en la tercera fuente de ingresos más importante del ELN y de las FARC en la década de los 90. El DAS estima que este fenómeno le produjo a la guerrilla aproximadamente US \$ 1.5 mil de millones entre 1991 y 1999.<sup>94</sup> El ejército colombiano y el Departamento de Planificación Nacional estiman que los ingresos de la guerrilla por concepto de los rescates fueron US \$ 1.2 mil de millones entre 1991 y 1998 (un año menos).<sup>95</sup>

Infortunadamente, no existen cifras disponibles para los paramilitares. Pero considerando que el número de secuestros realizados por paramilitares es relativamente bajo, los ingresos por este concepto son probablemente mucho menores que los obtenidos por la droga y la extorsión. Sin embargo, el secuestro como fuente de ingresos está ganando importancia rápidamente también entre estos grupos.

*La siguiente gráfica muestra el incremento de los ingresos de la guerrilla por concepto del secuestro y la extorsión.<sup>96</sup> Independientemente de algunas reducciones temporales entre 1996 y 1998, la imagen general es la de un crecimiento espectacular de los ingresos del ELN y de las FARC por concepto de estos dos tipos de delitos. Entre 1995 y 1998, los ingresos por extorsión adquirieron más importancia que las utilidades por concepto del secuestro. Este hecho se explica porque la extorsión demanda menos horas de trabajo y esfuerzo que el secuestro. También contribuye el factor de que la víctima potencial del secuestro es más propensa a ceder a la extorsión en lugar de exponerse a pagar una suma mucho mayor en caso de ser secuestrada.*

En 1999, los ingresos por el secuestro del ELN y de las FARC juntos aumentan notoriamente y superan a los de la extorsión. Esta fluctuación tiene que ver principalmente con el hecho de que los ingresos de las FARC por concepto del secuestro se redujeron de US \$ 137 millones en 1996 a US \$ 60 millones en 1997 y disminuyeron a US \$ 39 millones en 1998.<sup>97</sup>



Los ingresos de las FARC por concepto de la extorsión aumentaron durante este mismo período. Aunque los ingresos de las FARC por concepto del secuestro fueron relativamente bajos en 1998, el número de secuestros perpetrados por este grupo alcanzó la cifra de 1.135 casos en 1998 y fue la más alta de todos los tiempos. Hay dos posibles explicaciones para esta discrepancia. El número de rehenes en 1998 incluyó casi 400 miembros de las fuerzas públicas a quienes no se les exigió un pago por su rescate. Debido a las elecciones locales en 1999, los grupos armados secuestraron un número considerable de políticos (locales) con el fin de forzar un 'arreglo político'. En estos casos rara vez se exige el pago por el rescate.

Los ingresos del ELN provenientes del secuestro se redujeron un poco, de US \$ 118 millones en 1996 a US \$ 122 millones en 1997 y a US \$ 84 millones en 1998.<sup>98</sup> Sin embargo, este descenso tiene que ver principalmente con la devaluación del peso colombiano durante el período de 1997 a 1998. Cuando los ingresos del ELN por concepto de los rescates se expresan en pesos colombianos, estos prácticamente permanecen estables. El incremento de los ingresos de la guerrilla por concepto del secuestro en 1999 se puede explicar por el aumento repentino del número de secuestros perpetrados por la guerrilla por motivos económicos. Las pescas milagrosas también inciden considerablemente en este incremento.

### **El desarrollo militar de los grupos armados ilegales**

Con toda la razón se dice que el conflicto armado en Colombia surgió por la desigualdad socio-económica y política entre la élite colombiana y la gran mayoría de personas marginadas. Otros factores que contribuyeron al incre-

mento de este conflicto son la incapacidad de las fuerzas de seguridad nacional para mantener el orden público y para obtener el monopolio de la fuerza en el país, así como la incapacidad del sistema judicial para juzgar y sancionar a todos aquellos que infringen la ley. No podemos negar que estos factores son la raíz del conflicto, así como también en muchos otros países afligidos en América Latina. Sin embargo, también es indudable que el aumento en los ingresos de los grupos en guerra fue un factor decisivo para su desarrollo militar sin precedentes en la década de los 90.

Los nuevos ingresos de los grupos armados ilegales en Colombia rápidamente produjeron un aumento en el número de columnas. El incremento de los grupos paramilitares es alarmante. En 1987, cuando el gobierno colombiano denunció por primera vez la existencia de los grupos paramilitares en el país, estos solamente tenían 650 hombres. Diez años más tarde, se convirtieron en un importante factor del equilibrio militar del poder en Colombia. Entre 1998 y el 2000, las tropas de los paramilitares crecieron cinco veces más que las de la guerrilla y se estima que actualmente cuentan con 8.000 combatientes.<sup>99</sup>

El desarrollo militar de las FARC se produjo lentamente, ya que el número de frentes pasó de 18 a 40 entre 1984 y 1994. Sin embargo, durante los siguientes años, el incremento fue mucho más persistente y se cree que actualmente tienen 74 columnas nacionales (más de 15.000 combatientes).<sup>100</sup> El renacimiento militar del ELN se produjo después del secuestro de un ingeniero alemán y de dos empleados colombianos de la multinacional alemana Mannesmann en enero de 1985. Gracias a su profunda reorganización y a su 'acción revolucionaria',<sup>101</sup> el ELN entró en un período ascendente en el cual pasó de 3 a 11 frentes en menos de dos años.<sup>102</sup> (Para un análisis detallado de estudio de caso, refiérase al 'caso Mannesmann' en el capítulo 5.) Este crecimiento continuo le permitió llegar a tener cerca de 63 columnas en los siguientes años.

Sin embargo, no solamente el número de combatientes indica el desarrollo del movimiento guerrillero, sino también el comercio y la utilización de un armamento más sofisticado como las bombas collar y las versiones modernas de los misiles tierra-aire. Además, el armamento de la guerrilla es ahora más ligero y más pequeño, por cuanto este equipo es más apropiado para el número creciente de menores en los frentes. Algunas veces, la relación entre la adquisición del armamento y el pago de un rescate es muy clara. Una víctima europea del secuestro en Colombia escuchó durante su cautiverio una conversación de los secuestradores (miembros de las FARC) por radio en la cual negociaron la compra de armamento en Ecuador (armas robadas al ejército), previendo el pago de su rescate.<sup>103</sup>

*Gracias a su poder militar, los grupos armados ilegales de Colombia pueden influir y actuar como la autoridad de facto en muchas regiones. Las actividades en las regiones bajo su control van desde resol-*

*ver conflictos personales hasta actuar plenamente como autoridades políticas y administrativas, así como cobrar impuestos a las personas particulares a las compañías nacionales y a las empresas multinacionales. Este desarrollo militar permite mantener el círculo vicioso del secuestro, a la vez que la maquinaria de guerra exige una mayor cantidad de recursos. Además el efecto desestabilizador de los grupos armados ilegales cada vez más numerosos crea un ambiente favorable para otros jugadores, tales como los delincuentes comunes o los grupos de narcotraficantes, lo cual produce más secuestros.*

- 45 Nixon R., *Le mythe de la paix* (París, 1984).
- 46 Meluk, E., *El Secuestro en Colombia y las Multinacionales Europeas*, Encuesta para Pax Christi Holanda (Santafé de Bogotá, 2000).
- 47 Valencia, M., *Secuestro, Extorsión y Guerra en Colombia*, Encuesta para Pax Christi Holanda (Santafé de Bogotá, 2000).
- 48 Peñate, A., "El Sendero Estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado", en: M. Deas y M.V. Llorente (ed.), *Reconocer la guerra para hacer la paz* (Bogotá, 1999) 53-98 y Peñate, A., *Arauca: Politics and Oil in a Colombian Province* (Tesis para la maestría) (Oxford, 1991).
- 49 Hagedorn Auerbach, A., *Ransom*, 25.
- 50 Adams, J., *Secret armies* (Nueva York, 1987). Wood, B., y Peleman, J., *The Arms Fixers – Controlling the Brokers and Shipping Agents* (Oslo, 1999). Musa, A., y Koyode Fayemi, J., *Mercenaries* (Londres, 2000).
- 51 Hagedorn Auerbach, A., *Ransom*, 25.
- 52 Human Rights Watch, "Colombia. Human Rights Developments", en: *World Report*, 2001.
- 53 Human Rights Watch, *The Ties that bind: Colombia and military-paramilitary links* (Nueva York, 2000) y Kline, H.F., *State building and conflict resolution in Colombia 1986-1999* (Tuscaloosa, 1999) 26.
- 54 Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos (GAO), *Drug Control. Narcotics threat from Colombia continues to grow* (junio de 1999) 1-5.
- 55 González, C., "Police finds weapons, rightist uniforms with 1.5 tons of cocaine", en: *Associated Press*, 4 de julio de 2000.
- 56 Forero, J., "Ranchers in Colombia Bankroll their own Militia", en: *New York Times*, 8 de agosto de 2001.
- 57 La Embajada estadounidense en Bogotá adelanta una investigación al respecto. Se espera su publicación a finales de 2001.
- 58 DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) *Temática Cuestionario Pax Christi* (Bogotá 2000). Las tasas de cambio empleadas en este informe corresponden al promedio anual: 1 dólar equivalía a 502 pesos en 1990; a 633 en 1991; a 759 en 1992; a 863 en 1993; a 845 en 1994; a 913 en 1995; a 1.037 en 1996; a 1.141 en 1997; a 1.426 en 1998; a 1.756 en 1999; a 2.088 en 2000. La cifra citada se corresponde con la información suministrada por el Ejército colombiano y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), según la cual los ingresos por concepto de narcotráfico de la guerrilla fueron de 2.3 mil millones de dólares entre 1991 y 1998. Esta cifra sería considerablemente mayor si se hubiese aplicado la tasa de cambio correspondiente a cada año, puesto que el peso colombiano era 2.5 veces superior en 1991 comparado con finales de 1998. En 1999 (cifras no incluidas en los cálculos del DNP), la guerrilla obtuvo enormes ganancias por el narcotráfico.
- 59 Rocha, R., *The Colombian economy after 25 years of drug trafficking*. Informe de UNDCP.
- 60 DAS, *Temática Cuestionario Pax Christi*, 3.
- 61 "El ELN tiene recursos en el exterior", en: *El Espectador*, 29 de septiembre de 2000.
- 62 "Rebelión contra la extorsión", en: *El Tiempo*, 14 de julio de 2000.
- 63 "La ley del monte", en: *Revista Cambio*, 18 de junio de 2001.
- 64 DAS, *Temática Cuestionario Pax Christi*, 3.
- 65 Reuters, comunicado de prensa del 11 de mayo de 1999 (sin título).
- 66 Peñate, Andrés, "El sendero estratégico del ELN:", en: *Reconocer la Guerra para Hacer la Paz*, 53-98.
- 67 Santos, E., "El flaco del eme", en: *Lecturas Dominicales de El Tiempo*, 1 de agosto de 1999, 9.

- 68 Ver la página de web Conase (Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y Demás Atentados contra la Libertad Personal): [www.antisecuestro.gov.co/](http://www.antisecuestro.gov.co/)
- 69 "Secuestro: 18.291 víctimas en 67 años", en: *El Tiempo*, 6 de enero de 2000.
- 70 Fundación País Libre, *Programa Nacional de Asistencia Integral al Secuestrado. Proyecto*. (Santafé de Bogotá, 1998) 9.
- 71 Fundación País Libre, página de web: [www.paislibre.org.co](http://www.paislibre.org.co).
- 72 DAS, *Temática Cuestionario Pax Christi*, 9-10.
- 73 Lozano, P., "La industria del secuestro", en: *El País Semanal*, agosto de 2001.
- 74 Presidencia de la Republica de Colombia, *Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal. El Secuestro en Colombia*. (Bogotá, Julio 2000).
- 75 "El Cese al fuego con las FARC está lejano", en: *El Espectador*, 10 de enero de 1999, 5.
- 76 Bamrud, J., "Kidnapping, Inc.", en: *Latin Trade*, febrero de 1996.
- 77 Ver la página de web de Fundación País Libre: [www.paislibre.org.co](http://www.paislibre.org.co).
- 78 Ver la página de web del Grupo Hiscox: [www.hiscox.com/frames\\_corp.htm](http://www.hiscox.com/frames_corp.htm).
- 79 "Secuestro: 18.291 víctimas en 67 años", en: *El Tiempo*, 6 de enero de 2000.
- 80 Burnham Finney, P., "Business Travel", en: *New York Times*, 26 de noviembre de 1997.
- 81 Forero, J., "Prosperous Colombians fleeing, Many to the U.S.", en: *El New York Times*, 10 de abril de 2001.
- 82 "International Humanitarian law and the armed conflict in Colombia", en: *Cidec* (Centro de Información sobre el Desarrollo de la Democracia), junio de 1999.
- 83 Rangel Suárez, A., "La Fase Urbana", en: *El Tiempo*, 3 de agosto de 2001 y "Repudio y temor por el plagio masivo en edificio de Neiva", en: *El Tiempo*, 28 de julio de 2001.
- 84 "Los Niños del Secuestro", en: *Semana*, 11 de abril del 2000.
- 85 "Secuestro de Menores, Delito Mayor", en: *El Tiempo*, 6 de marzo de 2000.
- 86 "Despeje no es para consumir delitos", en: *El Tiempo*, 8 de julio de 2000.
- 87 UNHCR, *Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in Colombia*, E/CN.4/2001/15, E/CN.4/2001/15, 8 de febrero de 2001.
- 88 *El Espectador*, 10 de enero de 2000.
- 89 El DAS y la institución gubernamental Conase tenían diferentes estimados con respecto al número total de secuestros por tipo de autor en 1999 ( 2.937 y 3.342 respectivamente), pero su información concuerda con respecto a la orden de los autores intelectuales. DAS, *Temática Cuestionario Pax Christi*, y la página de web de Conase: [www.antisecuestro.gov.co/](http://www.antisecuestro.gov.co/).
- 90 Ver la página de web de Fundación País Libre: [www.paislibre.org.co](http://www.paislibre.org.co).
- 91 "La guerra de los paras", en: *Semana*, 26 de marzo - 1 de abril del 2001.
- 92 En junio de 2000, las AUC trataron de presionar a los negociadores oficiales mediante el secuestro del hermano de uno de ellos. "Castaño se atribuye el secuestro de Valencia Cossio", en: *El Tiempo*, 22 de junio de 2000.
- 93 "AUC estarían secuestrando personas para procesar coca", en: *El Espectador*, 3 de octubre de 2001.
- 94 DAS, *Temática Cuestionario Pax Christi*, 3.
- 95 Reuters, comunicado de prensa del 11 de mayo de 1999 (sin título).
- 96 Estas cifras están basadas en la información del DAS (para los años 1991-1995 y 1999) y en las del Comité Interinstitucional de Lucha contra las Finanzas de la Subversión (para los años 1996-1998). Cifras en la gráfica: Ingresos de secuestro en los años 1991 –1999 (USD x 1 millón); 106; 90; 70; 171; 274; 255; 168; 123; 280;. Cifras de ingresos de extorsión en los años 1991-1999; 159; 135; 147; 199; 234; 206; 326; 245; 221.
- 97 Valencia, L., *Secuestro, Extorsión y Guerra en Colombia*. Cifras basadas en los estimados del Comité Interinstitucional de Lucha Contra las Finanzas de la Subversión.
- 98 Ibidem.
- 99 "La guerra de los paras", en: *Semana*, 26 de marzo - 1 de abril de 2001.
- 100 DAS, *Temática Cuestionario Pax Christi*, 1.
- 101 Medina, C., *ELN: una historia contada a dos voces*, 150.
- 102 Valencia, L., *Secuestro, Extorsión y Guerra en Colombia*.
- 103 Entrevista con una víctima europea del secuestro en Colombia, realizada por Pax Christi Holanda, el 9 de febrero de 2001.









### 3. *Cinco estrategias colombianas para contrarrestar el secuestro*

#### 3.1 *El marco legal colombiano contra el secuestro*

##### **La Ley antisequestro 1993: se prohíbe el pago**

El proceso legislativo contra la extorsión y el secuestro en Colombia se inició con el Decreto 1680 de 1991, pero la Ley 40 de 1993, conocida en Colombia como la ‘Ley antisequestro’, fue la que estableció el punto de referencia más importante. La población civil fue la que promovió esta Ley, la cual está basada en la legislación italiana contra el secuestro de 1991.<sup>104</sup> Tal y como la Ley antisequestro de Italia, la Ley 40 de Colombia autorizó la congelación de los activos de las familias de las víctimas con el fin de evitar el pago del rescate, declaró la venta de pólizas de seguros contra secuestro y rescate ilegales y prohibió el apoyo de negociadores externos (negociadores profesionales del secuestro).

##### **La Corte Constitucional noviembre 1993: permite el pago por razones humanitarias**

Muchos colombianos consideraron que la Ley 40 era excesivamente severa y, por ello, demandaron varios de sus artículos ante la Corte Constitucional.<sup>105</sup> Esta Corte determinó que algunos de los artículos eran inconstitucionales y condicionó la constitucionalidad de otros en términos expresados en las sentencias respectivas.<sup>106</sup> De acuerdo con esta Corte, el derecho de la familia de las víctimas a tratar de salvar la vida de un familiar es un derecho constitucional y, por ende, se autorizan los pagos y las negociaciones (sin objetivos económicos) con dicho fin. Por lo tanto, la anulación permitió el pago del rescate por razones humanitarias y le prohibió al gobierno congelar los activos. La sentencia de 1993 de la Corte Constitucional dice literalmente:

“El pago por el rescate es en sí un acto neutral, ni bueno ni malo. La intención es la que determina la justificación moral. Por la presente, quien interviene en el pago de un rescate con el fin de salvar la vida o de recuperar la libertad personal, ya sea la suya propia o la de alguien más, actúa por razones altruistas reconocidas universalmente como tales por esta ley. Por el contrario, quien actúa sin necesidad y por razones exclusivamente vulgares o motivos bajos, para su propio enriquecimiento o con el propósito de enriquecer a los delincuentes o de proporcionarles recursos económicos, está cometiendo un delito. Por lo tanto, no puede alegar o justificar sus actos. El Artículo 13 de la Ley 40 de 1993 y las normas que se desprenden de él solamente se pueden aplicar bajo estas circunstancias”.<sup>107</sup>

*En resumen, la ley antisequestro permaneció vigente, pero se tolera el pago del rescate por razones humanitarias. Que sepamos, nadie ha sido condenado por pagar un rescate desde noviembre de 1993.*

### **1996: Prohibición de la venta de pólizas de seguros contra el secuestro**

La Ley 282 de 1996 incluyó la Ley 40 de 1993 (excepto las partes que la Corte Constitucional declaró nulas). Así, la nueva Ley simplemente clarifica la Ley antisequestro de 1993 y la amplifica con una prohibición de venta de pólizas de secuestro, por cuanto esta actividad implica un beneficio comercial derivado del secuestro.

### **La Ley antisequestro: ¿Una ilusión?**

Los defensores de una legislación antisequestros estricta mantuvieron vivo el debate sobre una posible restitución de esta ley. Tampoco el poder legislativo dejó de pensar totalmente en la restitución de la estricta Ley 40. En julio del 2000, el Presidente Pastrana anunció que su gobierno quería discutir el restablecimiento de esta legislación estricta, a pesar de la anulación de la Corte Constitucional.<sup>108</sup> Sin embargo, la nueva legislación del 2000 no incluyó ninguna enmienda significativa en este sentido.<sup>109</sup> La Ley antisequestro no produjo el efecto esperado. El aparato judicial no estaba ni está suficientemente equipado para combatir eficientemente este crimen.

La cuestión es si una Ley antisequestro más estricta podría realmente ser más efectiva. La cifra oficial de secuestros en Italia disminuyó después de la promulgación de la legislación antisequestro, pero probablemente tuvo muy poco que ver con el cumplimiento de la ley en sí. De hecho, los italianos aprendieron a eludir la ley y a menudo se abstendían de denunciar los secuestros. Hicieron arreglos encubiertos para pagar el rescate en el exterior o lo pagaban después de la liberación de la víctima a través de transacciones fraudulentas. Probablemente, el número de plagios también disminuyó debido al desmantelamiento de la organización política terrorista de las Brigadas Rojas.

## **3.2 El marco institucional colombiano contra el secuestro**

A pesar de que la Corte Constitucional anuló varios artículos de la Ley 40 de 1993, el espíritu de la ley antisequestro se preservó parcialmente en los decretos y leyes que se hicieron después. Primero que todo, las sentencias por el delito de secuestro siguieron siendo elevadas. Pueden llegar a 40 años y, en caso de circunstancias agravadas relacionadas, pueden llegar a 60 años. Como éste es un delito de lesa humanidad, estas sentencias están exentas de acuerdos previos o libertad condicional. Sin embargo, la práctica diaria de la justicia colombiana a menudo no coincide con la teoría de estas leyes. En segundo lugar, en virtud de la Ley 282 de 1996, se creó un marco institucional para luchar contra el secuestro. Esta ley consolidó las disposiciones lega-

les, investigativas y policivas, por ejemplo a través de la creación del instituto gubernamental CONASE.<sup>110</sup>

### **El Zar antisequestro**

En 1996, también se creó el Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal (PPDLP), que se conoce en Colombia como la Oficina del Zar antisequestro.<sup>111</sup> Los Grupos de Acción Unificada por la Libertad (GAULA) fueron diseñados para ser el brazo operativo del Zar antisequestro. El objetivo más importante de estas dos instituciones era mejorar la coordinación entre las distintas instituciones estatales que luchan contra el secuestro.<sup>112</sup> Sin embargo, esto no llegó a funcionar, en parte por la corrupción del GAULA, que incluía peticiones de rescate y la organización de falsos secuestros.

Debido a estas múltiples tareas de coordinación, el Zar antisequestro desempeñaba un rol vital como intermediario dentro del mundo oscuro e inescrutable del secuestro en Colombia, con todas sus consecuencias positivas y negativas. Se rumora que este Zar antisequestro fue susceptible de sobornos, malos oficios y de dar preferencia a unos casos sobre otros.

El 28 de junio de 1999, el Presidente Andrés Pastrana anunció que el Ministro de Justicia se haría cargo de las funciones del Zar antisequestro, de acuerdo con el marco para la reestructuración del Estado promovida por su gobierno. Esta decisión disminuyó clara y severamente la autonomía y la capacidad de influencia de la Oficina del Zar antisequestro. Después de haber sido una institución que coordinaba sus políticas y decisiones directamente con el Presidente de la República, se convirtió en una oficina ministerial con todas las implicaciones en términos de autonomía, presupuesto e independencia operativa.

*La oficina del Zar antisequestro, o lo que quedaba de ella, se acabó casi completamente en el 2000. Solamente el fondo económico y algunos psicólogos pasaron al Ministerio de Defensa. Algunos sectores de la sociedad colombiana consideran esta decisión realmente lamentable porque la oficina del Zar antisequestro, hizo un gran trabajo como institución coordinadora. De todos modos, la jerarquía militar considera que el secuestro es responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad Nacional ya que el tema atañe al cumplimiento de la ley.*

### **3.3 Negociaciones nacionales de paz**

Varios gobiernos colombianos anteriores a éste también negociaron con los grupos guerrilleros la aplicación del derecho internacional humanitario en todos los aspectos relacionados con el secuestro. A primera vista parece que se hubieran hecho avances significativos por cuanto tanto las FARC como el ELN prometieron en el pasado acabar con sus prácticas de secuestro. Sin

embargo, una investigación más profunda muestra que estos acuerdos sobre el secuestro que, a menudo hacen parte de un acuerdo humanitario o de paz más amplio, resultaron ser falsas promesas y socavaron el carácter absoluto del derecho internacional humanitario<sup>113</sup>.

En los acuerdos que se lograron entre la Comisión Nacional de Paz del gobierno de Betancurt y las FARC en Mesetas (Meta) el 28 de marzo de 1984, este grupo guerrillero se comprometió a no tomar rehenes. Sin embargo, no cumplió con sus promesas. Por el contrario, incrementó el número de secuestros desde entonces e institucionalizó las prácticas de extorsión con la emisión de la antes mencionada ley 002.

En julio de 1998, a finales del período del Presidente Samper, la Comisión Nacional de Paz logró un acuerdo provisional con el ELN en Alemania, que se conoce como los Acuerdos de la Puerta del Cielo. La oferta era simple: el ELN debía acabar con el secuestro y la extorsión económica para avanzar en el proceso de la paz. Por su parte, el gobierno alemán le ofrecería una oficina con estatus diplomático en Alemania y una cantidad sustancial de dinero con el fin de financiar las actividades encaminadas a lograr un acuerdo negociado para terminar con el conflicto armado. En el artículo 9 de estos acuerdos, las partes acordaron que: “El ELN no retendría o privaría de la libertad a las personas por razones económicas, con la condición de que se buscarán otras fuentes de financiación, de tal forma que el ELN no utilizase - hasta la culminación del proceso de paz con esta organización - ninguna estrategia de debilitamiento”. Poco tiempo después, Andrés Pastrana fue elegido como presidente de Colombia y, durante su mandato, prorrogó estos acuerdos a favor del ELN y dejó en el aire el acuerdo contra el secuestro. Pero incluso el ELN rompió la promesa incondicional de no secuestrar a niños, ancianos y mujeres embarazadas, justo después de haber logrado el acuerdo.

El actual gobierno de Pastrana también cree que la mejor forma de luchar contra el secuestro y la extorsión es a través de las negociaciones de paz a nivel nacional, las cuales pueden conducir a un acuerdo sobre el secuestro, como un elemento adicional al acuerdo total de paz. El gobierno de Pastrana comenzó el diálogo con los insurgentes apenas llegó al poder e inmediatamente empezó el proceso formal de paz con las FARC.

*Haciendo uso de todos sus poderes constitucionales,<sup>114</sup> el presidente centralizó todos los aspectos relacionados con el manejo del secuestro y la extorsión de carácter subversivo en el comisionado de paz del gobierno. Esta decisión reafirma la actual preferencia del gobierno por las negociaciones de paz con las fuerzas insurgentes a las actuaciones de la oficina del Zar antisequestro.*

## **¿Cuáles son los resultados de los diálogos de paz hasta el momento?**

El gobierno hizo una concesión considerable al desmilitarizar una parte del territorio colombiano con el fin de entregárselo a las FARC. Sin embargo, después de casi tres años de agotadores diálogos de paz, se tiene que admitir que estas conversaciones permanecen estancadas. Las FARC se rehúsan a cumplir su primer compromiso con respecto al secuestro, y los negociadores de paz no han sido capaces de lograr un nuevo acuerdo sobre este flagelo. La liberación de 363 soldados enfermos de las fuerzas de seguridad nacional a cambio de algunos guerrilleros en prisión que las FARC hizo en junio y julio del 2001, no fue tanto un gesto humanitario como un movimiento estratégico para disponer de un número estimado entre 1.000 y 1.500 combatientes y así poder lanzar su ofensiva urbana.<sup>115</sup> Poco tiempo después del intercambio de prisioneros, las FARC continuaron secuestrando gente.

Las negociaciones con el ELN nunca despegaron. Durante los diálogos sobre las posibles conversaciones de paz, El ELN continuó secuestrando gente. Los comentarios que algunos de los miembros del ELN hicieron en la reunión con el CICR reflejan su forma de pensar con respecto a este tema. Uno de los combatientes formuló la siguiente hipótesis: “Si la clase media financiara nuestra revolución, nosotros dejaríamos de tomar rehenes”<sup>116</sup>. El 7 de agosto del 2001, los esfuerzos llegaron a un punto muerto porque el presidente anunció la suspensión de los diálogos con el ELN. Y también por la fuerte oposición de los paramilitares a una nueva zona desmilitarizada para el ELN en el norte de Colombia.

## **El debate público sobre un acuerdo negociado con respecto al secuestro**

El público colombiano, sin embargo, nunca ha dejado de presionar por la humanización de la guerra a través del cese de las hostilidades, incluyendo la suspensión del secuestro y de la extorsión. Tampoco se ha podido silenciar el debate público con respecto a la posible creación de un fondo para que la guerrilla garantizara los ingresos de los insurgentes durante el cese de las hostilidades. El Obispo de la Iglesia Católica de Barrancabermeja, Jaime Prieto, anunció públicamente en septiembre del 2000 que estaba a favor de dicho fondo e incluso el enviado presidencial de paz, Camilo Gómez, declaró que era posible que su gobierno considerara la creación de dicho fondo si los insurgentes dejaban de secuestrar por un rescate y acordaban un cese al fuego.<sup>117</sup>

A pesar de algunas limitaciones legales a nivel internacional,<sup>118</sup> en el pasado se han creado fondos para grupos guerrilleros como el CRS de Colombia (y también para el FMLN en San Salvador) con el fin de facilitar el proceso de paz. Sin embargo, las FARC y el ELN no han dado ninguna muestra de su voluntad de participar en unas negociaciones de paz serias. Crear un fondo antisequestro para la guerrilla bajo estas circunstancias probablemente no facilitaría el proceso de paz, sino que simplemente implicaría la financiación oficial para continuar con el conflicto armado.

### 3.4 *El compromiso de no pago: ¿una opción realista?*

Después de cuarenta años de guerra civil en Colombia, la gran mayoría de los colombianos reconocen que ninguno de los litigantes armados tiene la capacidad para ganar la guerra militarmente hablando. Esta guerra se está alargando a su costa. Generalmente también se da cuenta de que el pago por los secuestros y por las extorsiones tienen unos efectos colaterales perversos. Se fortalecen la capacidad militar de los grupos armados ilegales y se garantiza la continuidad del conflicto armado y de las prácticas del secuestro en Colombia.

Según la prensa colombiana, la junta directiva de la Federación de Ganaderos concluyó oficialmente a comienzos de la década de los 90 que si uno de sus miembros era secuestrado, no se pagaría el rescate. Los miembros de esta Federación cumplieron estrictamente con este acuerdo, incluso cuando su presidente, José Raimundo Sojo pagó con su vida esta postura fundamental.<sup>119</sup> Algunos miembros de la Federación creían que si la estrategia de no pago se practicaba consistentemente, se mostrarían resultados positivos. Al implicar las operaciones de secuestro grandes inversiones en términos de dinero, tiempo y mano de obra, los secuestradores potenciales se lo pensarían dos veces antes de secuestrar empleados de una compañía que ha demostrado no ceder a las amenazas. Unos años después se supo que la Federación había abandonado su posición de no pago.

En 1997, el fundador de la Fundación País Libre, Francisco Santos, a quien el barón de la droga, Pablo Escobar, secuestró por muchos meses, le pidió a los inversionistas europeos en Colombia no pagar por el rescate de sus empleados, con el fin de darle el golpe de gracia a la industria del secuestro.<sup>120</sup> De hecho, algunas de las multinacionales europeas pusieron en práctica esta estrategia.

Cuando el ELN secuestró a 150 personas en la iglesia de la María en el sur de Cali el 30 de mayo de 1999, se reavivó el debate público sobre la política de no pago. Las 39 familias decidieron, por su propia cuenta y sin ningún tipo de presión legal, no ceder a las exigencias económicas de este grupo guerrillero para liberar a sus familiares. La mayoría de ellas firmaron un ‘compromiso oficial de no pago’.<sup>121</sup> Cuando ocurrió el siguiente plagio masivo en un restaurante en julio del 2000, el cual se conoce en Colombia como ‘el secuestro del kilómetro 18’, la idea surgió de nuevo. La prensa le prestó mucha atención a esta política con el fin de crear un clima favorable para el movimiento de no pago. Hizo una encuesta entre la población colombiana que mostró que el 43% consideraba la política de no pago como una medida efectiva para luchar contra el secuestro.<sup>122</sup> Pero como se describe en el párrafo siguiente, la guerrilla ha conseguido dividir a las familias de los rehenes.

La fundación País Libre se anticipó a esta atención pública y comenzó a mencionar el lanzamiento de una campaña nacional para congregar a todas las fuerzas de las distintas iniciativas aisladas de las familias y de las compañías. Esta entidad aconsejó a los colombianos dar a conocer su deseo oficialmente a través de un documento debidamente autenticado. Además, los colombianos que habían asumido este compromiso de no pago debían divulgar ampliamente su posición, por ejemplo, colocando calcomanías en la parte de atrás de sus carros. El director de País Libre aceptó que el estricto cumplimiento de esta política podía costarle la vida a muchas personas, pero está convencido de que ésta es la única manera de romper el círculo vicioso del secuestro, el pago por el rescate, la intensificación del conflicto y el aumento de los secuestros.

### **El dilema humano**

El movimiento de no pago tiene un gran valor social en el sentido de que permite expresar la repugnancia indescriptible que producen las prácticas del secuestro. Este movimiento también elevó el nivel de conciencia con respecto a las posibilidades de la resistencia civil contra el secuestro, aunque los civiles a menudo se sienten impotentes en relación con su propia seguridad.

Sin embargo, el plagio masivo de la iglesia de la María demuestra claramente lo difícil que es mantener una posición dura contra los secuestradores cuando la cuestión se convierte en algo personal, incluso para aquellos que en principio se oponen al pago por el rescate. Después de la liberación de los rehenes de la iglesia de la María, el comandante del ELN, Antonio García, dijo públicamente que los rehenes habían pagado el rescate. Esto significa que a pesar de sus primeros pronunciamientos, muchas familias negociaron con el ELN, en secreto e independientemente. Esta situación también muestra la vulnerabilidad de las familias de las víctimas a la manipulación de los secuestradores. La ley del silencio siempre está vigente, incluso entre las familias cuyos seres queridos fueron víctimas del mismo secuestro masivo.

*Un secuestro usualmente genera en los familiares de la víctima una necesidad predominante de proteger al ser querido. Esto implica que en tiempos de gran desesperación los fuertes sentimientos personales casi siempre priman sobre la noción de que el no pago por el rescate beneficia el interés común. Todo el mundo sabe que el número de secuestros disminuirá si las familias no pagaran el rescate. Sin embargo, ¿quién podría estar preparado para pagar este precio? y ¿Cuántos rehenes tendrían que sacrificarse antes de que esta política produjera los efectos esperados?*

### **Otras iniciativas civiles**

El movimiento social 'Mandato por la Paz, la Vida y la Libertad' de 1996 fue la expresión democrática más dolorosa de la protesta civil centrada en el Derecho Humanitario Internacional, por cuanto llevó a casi diez millones de colombianos a votar en contra del secuestro y de la violencia. En 1999 se

hicieron varias marchas en 15 ciudades con más de un millón y medio de personas y, en octubre del mismo año, la gran marcha nacional llamada “¡No Más!” contó con la participación de más de 12 millones de personas. Este tipo de protesta civil también es peligrosa para aquellos que la convocan. Los defensores del movimiento No Más temieron por sus vidas y algunos tuvieron que irse del país después de las protestas públicas.

### 3.5 ***El Derecho Internacional Humanitario y la Corte Penal Internacional***

Durante los años 90, el poder legislativo de Colombia se dio cuenta de que el secuestro y la extorsión fomentaban el conflicto armado interno. Como el derecho internacional humanitario prescribe el respeto por la población no combatiente dentro de la guerra de un conflicto armado, el poder legislativo colombiano decidió concentrarse aún más en esta petición. El Artículo 3, común a las Convenciones de Ginebra de 1949 y el Protocolo II de 1997, adicional a dichas Convenciones, son los dos acuerdos internacionales dentro del derecho internacional humanitario que prohíben la toma de rehenes por parte de los bandos enfrentados. Colombia ratificó tanto el Artículo 3 como el Protocolo II.

Cuando la Corte Penal Internacional empiece a funcionar como tal en un futuro cercano, podrá ofrecer nuevas perspectivas con respecto al enjuiciamiento y a la adjudicación de los delitos de secuestro a los grupos insurgentes. Colombia firmó el Estatuto de la Corte Penal Internacional en diciembre de 1998, pero el congreso colombiano todavía no ha ratificado dicho Estatuto. Sin embargo, el gobierno colombiano argumentó que algunas de sus cláusulas son inconstitucionales. En efecto, se necesita una reforma constitucional para ratificar este Estatuto. Esperamos que el congreso colombiano sea capaz de contrarrestar la presión de los opositores de la ratificación. Este grupo de opositores incluye a: las FARC que se declararon en contra de la extradición y que pueden presionar al gobierno suspendiendo los ‘diálogos de paz’, la mafia de la droga que siempre ha estado en contra de la extradición y el gobierno estadounidense que se negó a firmar el Estatuto.

El siguiente capítulo analiza las posibilidades con respecto a la adjudicación de la responsabilidad y el enjuiciamiento de (los miembros de) los grupos armados de la oposición en Colombia por el delito del secuestro, dentro del contexto del derecho internacional humanitario.

---

104 Uno de los principales promotores de esta ley fue la Fundación País Libre. Por esta razón, los colombianos se refieren coloquialmente a ella como la ‘ley Pacho’ en honor del fundador de la Fundación País Libre, Francisco Santos.

105 La Corte Constitucional se puede comparar con lo que en muchos países se conoce como Corte Suprema. Sin embargo, no podemos confundir esta Corte con la Corte Suprema colombiana.

106 Ver las sentencias C-542/93 (24 de noviembre de 1993), C-069/94 (23 de febrero de 1994) y C-213/94 (28 de abril de 1994) proferidas por la Corte Constitucional.



- 107 Sentencia C-542/93 del 24 de noviembre de 1993.
- 108 "Cuestión de Honor", en: *Semana*, 3 de julio de 2000.
- 109 El Nuevo Código Penal Colombiano, Ley 599 del 2000 (promulgada en el 2001).
- 110 Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal, El Secuestro en Colombia (Santafé de Bogotá, julio de 1993) 43. CONASE crea grupos especiales encargados de las acciones contra los autores y cómplices del secuestro y la extorsión, confiere poderes especiales a los abogados y al GAULA y regula todos los demás aspectos relacionados con su trabajo.
- 111 En virtud del Decreto 67 de 1996.
- 112 El Zar antisequestro tenía a su disposición un fondo que canalizaba los recursos financieros de otras instituciones diferentes a las fuerzas de seguridad nacional. El fondo se llama FONDELIBERTAD. Además, tanto el Zar antisequestro como el GAULA debían realizar actividades de inteligencia técnica y operaciones de rescate y también debían entablar demandas contra los autores en la corte correspondiente. Pero las víctimas y sus familias también podían apelar al Zar antisequestro para que éste negociara el rescate en su nombre o para que les otorgara ayuda psicológica.
- 113 Para conocer más detalles sobre el Derecho Humanitario Internacional ver el capítulo 4.
- 114 De acuerdo con los poderes otorgados por la Ley 418 de 1998.
- 115 "Colombia's wars; don't celebrate yet", en: *The Economist*, 5 de julio de 2001.
- 116 Gordon-Bates, K., *Testimonios sobre la guerra: Los guerrilleros hablan sobre el enfoque que el movimiento insurreccional tiene acerca del derecho internacional humanitario*, en el site de internet del Comité Internacional de la Cruz Roja: [www.icrc.org/icrcspa.nsf](http://www.icrc.org/icrcspa.nsf)
- 117 Associated Press, *Colombia is considers Fund for rebels*, comunicado de prensa del 21 de septiembre del 2000.
- 118 "El dedo en la llaga del secuestro", en: *El Tiempo*, 3 de octubre del 2000. La Ley 40 de 1993 estipula que no es posible perdonar el delito del secuestro bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, los acuerdos con la guerrilla que incluyen una amnistía con respecto al secuestro estarían en contra de la legislación nacional. Además, las posibilidades de negociación del Estado colombiano también están limitadas por el derecho internacional humanitario.
- 119 "Portada", en: *Cambio*, 5 de julio de 1999, 16-17.
- 120 Koning, de P., "Francisco Santos: Niet langer betalen", en: *Vrij Nederland*, 7 de junio de 1997, 27.
- 121 Ibidem, 16-17.
- 122 Ibidem, 22.



## 4. El secuestro por parte de los grupos armados de la oposición desde una perspectiva legal

### RESUMEN EJECUTIVO

#### Dilemas:

- ¿Se puede aplicar el Derecho Internacional Humanitario a los grupos armados de la oposición en Colombia?
- ¿Se puede responsabilizar a los grupos armados de la oposición en Colombia o a sus miembros a nivel individual?
- ¿Es posible procesarlos en una corte internacional?

Hasta el momento, el conflicto armado en Colombia lleva 35 años. Durante las últimas décadas, los grupos armados de la oposición, es decir, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han creado grandes bastiones en el territorio colombiano. En noviembre de 1998, el gobierno colombiano concedió a las FARC el control efectivo de 40.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional.

Una de las principales fuentes de ingresos de estos grupos es el secuestro. La pregunta que se debe analizar en este documento es: ¿cómo se puede aplicar el derecho internacional humanitario con respecto a este problema? ¿Se puede aplicar? y, si se puede, ¿quién podría aplicarlo?

El Artículo 3 de las Convenciones de Ginebra y los Artículos del 4 al 6 del Protocolo Adicional II de las Convenciones de Ginebra, de los cuales Colombia es parte, obligan a los estados a tratar humanitariamente a todas las personas que no son parte del conflicto y que caen en sus manos y a protegerlos del abuso del poder. Esto incluye la prohibición de tomar rehenes. Como las FARC y el ELN operan autónomamente en el territorio colombiano y como son las contrapartes políticas en los diálogos oficiales de paz con el Estado colombiano, se afirma que también están obligados a cumplir estas normas. Por lo tanto, el hecho de que los grupos armados de la oposición estén obligados por el derecho humanitario en sí, no es suficiente. El problema es cómo aplicarlo en la práctica. Los grupos son abstracciones, incapaces de actuar por ellos mismos, físicamente hablando. Los individuos son los únicos que pueden actuar. Entonces, el problema se convierte en un problema de atribución. ¿Cómo y bajo qué circunstancias se pueden atribuir los actos de los individuos a los grupos? Precisamente aquí es donde radica el problema de la responsabilidad del grupo: ¿Cuándo deberíamos atribuir el

acto de un individuo a un grupo armado? El derecho internacional humanitario no proporciona parámetros claros sobre este punto.

El estado rudimentario del derecho con respecto a este tema se debe en parte al hecho de que no existe un organismo internacional, judicial o de otra índole, competente para supervisar que los grupos armados cumplan con el derecho internacional humanitario.

Parece que la responsabilidad de los individuos, más que la del grupo, ofrece mayores posibilidades. Los Estatutos y la experiencia de los Tribunales de Ruanda y Yugoslavia y el Estatuto de la Corte Penal Internacional indican que se puede responsabilizar a un individuo que no hace parte del Estado por sus propias acciones. Es posible responsabilizar a los líderes por los actos que ordenaron o por su incapacidad para prevenir o castigar por las violaciones al derecho internacional humanitario. Existen dos tipos de delitos que dan origen a la responsabilidad individual: *los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad*.

Los crímenes de guerra son delitos contra las normas particulares del Derecho Internacional Humanitario, tales como el Artículo 3 de las Convenciones de Ginebra y los Artículos 4/6 del Protocolo Adicional II, mencionados anteriormente. Aunque estos Artículos se redactaron para aplicárselos a los grupos armados de la oposición y no se refieren específicamente a los individuos, la jurisprudencia de los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda demuestra que es posible responsabilizar a los individuos por las violaciones a estos Artículos. La noción de la responsabilidad penal individual por los crímenes de guerra se ha ampliado a tal grado que no es necesario demostrar que se tienen vínculos con una de las partes del conflicto. La única condición para responsabilizar a un individuo personalmente es que el delito se cometa en el contexto del conflicto armado.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional define los crímenes de lesa humanidad como ataques en contra de cualquier población civil, de conformidad con una *política* para llevar a cabo dichos ataques. Mientras que es posible aislar los crímenes de guerra incidentalmente, los crímenes de lesa humanidad tienen que hacer parte de un plan más grande. El Estatuto de la Corte Penal Internacional califica como crímenes de lesa humanidad, entre otros, a 'la desaparición forzada de personas' que también incluye el secuestro.

Como ya se ha establecido que sí se puede responsabilizar a los individuos por las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, la pregunta final es ¿quién, qué organismo o agencia debería procesar a los miembros de las FARC y del ELN que han cometido estos delitos?

Ante todo esta es una responsabilidad del Estado Colombiano. Los tratados de derechos humanos de los cuales hace parte, lo obligan a procesar y casti-

gar por las violaciones de los derechos humanos incluso cuando las cometen los ciudadanos que no hacen parte del Estado. En vista del porcentaje real de impunidad de más del 90%, parece poco probable que el Estado colombiano sea capaz de enjuiciar a los miembros de los grupos armados por el delito de secuestro.

Otra posibilidad podría ser que otros países lleven a cabo los procesos, con base en el principio de la jurisdicción universal. Actualmente, ésta es una posibilidad remota por cuanto este principio solamente se puede aplicar a las llamadas disposiciones para las ‘infracciones graves’ de las Convenciones de Ginebra, las cuales solamente se pueden aplicar en conflictos internacionales. Sin embargo, esta norma no está grabada en piedra y hay posibilidades de que se la pueda cambiar en un futuro no muy lejano. Otra alternativa es la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Cuando esta Corte empiece a funcionar como tal, tendrá la jurisdicción sobre la toma de rehenes por parte de los miembros de las FARC y del ELN, siempre y cuando Colombia ratifique el Estatuto o acepte la jurisdicción de esta Corte.

## 4.1 *Introducción*

### **LIESBETH ZEGVELD<sup>123</sup>**

1. A pesar de varios acuerdos de cese al fuego, el conflicto armado en Colombia lleva 35 años. Esta es una situación compleja y difusa, con múltiples guerras a la vez. No existe un frente real. El mayor grupo armado de la oposición en Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el segundo grupo armado de la oposición más grande, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han creado grandes bastiones en muchas áreas del país durante la última década. En noviembre de 1998, el gobierno colombiano decidió despejar 40.000 kilómetros cuadrados del territorio colombiano, retirar la policía y a las fuerzas de seguridad, incluyendo el poder judicial a favor de las FARC para poder llevar a cabo las negociaciones de paz. El gobierno transfirió temporalmente parte de su autoridad a las FARC en las llamadas ‘zonas de despeje’.<sup>124</sup> Las deliberaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y el grupo guerrillero del ELN fueron suspendidas en septiembre 2001.

2. Desde la década de los años ochenta, la financiación de las actividades de guerra de los grupos armados de la oposición en Colombia se ha concentrado en tres fuentes principales de ingresos: la comercialización de la droga, la extorsión y el secuestro. Aunque la extorsión y el secuestro a menudo están directa o indirectamente interrelacionados, este documento sólo analizará los aspectos legales del secuestro a nivel internacional. Tal como lo mencionamos en los capítulos anteriores, el número de plagios en Colombia se extendió como una epidemia durante los últimos diez años. En 1990, el

número de plagios sobrepasaba los mil casos por año y, solamente diez años después, es decir, en el 2000, se reportaron más de 3000 casos de plagio. Actualmente, Colombia tiene un promedio dramático de 8 plagios por día. Los grupos armados de la oposición en Colombia generalmente niegan su participación en el secuestro o tienden a justificar el delito describiendo los ingresos provenientes del secuestro como un ‘impuesto de guerra’ o un ‘impuesto revolucionario’. Existe una necesidad clara para restricciones legales y la aplicación de responsabilidad internacional sobre los grupos subversivos armados de Colombia.<sup>125</sup> El ‘cobro de un impuesto’ a los colombianos y a los extranjeros que no hacen parte del conflicto armado, solamente se podrá manejar si se responsabiliza a estos grupos y a sus líderes por estas acciones, de acuerdo con el derecho internacional.

3. Los grupos paramilitares vienen desarrollando sus actividades estructuralmente en Colombia desde los años ochenta. Debido a los nexos entre los grupos paramilitares y algunos regimientos del ejército, los paramilitares no pueden tomar parte en las mesas de negociación. Está documentado que los grupos paramilitares, los cuales surgieron como una reacción a la extorsión y al secuestro por parte de los grupos armados de la oposición, también secuestran cada vez más colombianos con el fin de financiar su guerra. Sin embargo, aunque es posible responsabilizar a los miembros de este grupo por estos delitos de acuerdo con el derecho internacional, esto no es viable cuando se trata del paramilitarismo como una entidad. Esto se debe a que los paramilitares mantienen nexos directos con algunos regimientos locales del ejército colombiano.<sup>126</sup> La responsabilidad de sus actos recae sobre el gobierno colombiano. Si los paramilitares comienzan a operar autónomamente en el futuro, entonces también se les podrá aplicar directamente el derecho internacional. Esta investigación no incluye a los paramilitares por cuanto este grupo se debe analizar en otro documento.

4. En esta investigación trataré las preguntas más importantes sobre el conflicto colombiano que están relacionadas con la responsabilidad, de acuerdo con el derecho internacional, por los actos cometidos por los grupos armados de la oposición en Colombia, o por la incapacidad para prevenir o reprimir dichos actos. Analizaré dos niveles de responsabilidad: la responsabilidad de los grupos armados de la oposición en Colombia como colectividad y la responsabilidad de los miembros y de los líderes de estos grupos a nivel individual. Pero primero que todo, analizaré el derecho sustantivo que se puede aplicar a estos grupos.

#### **4.2 Restricciones legales para los grupos armados de la oposición en Colombia**

5. El conflicto en Colombia indudablemente se considera como un conflicto armado interno de acuerdo con su significado en el *derecho internacional*

*humanitario*. La Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos y otras agencias internacionales consideran que el Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados internos también puede cubrir el conflicto colombiano.<sup>127</sup> El gobierno colombiano siempre ha estado de acuerdo con esta clasificación.<sup>128</sup>

6. Las partes del Derecho Humanitario que se aplican a este tipo de conflicto e imponen obligaciones a la oposición armada en Colombia son el Artículo común 3 de las Convenciones de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional II a las Convenciones de Ginebra de 1977.

7. Como las Convenciones de Ginebra y el Protocolo Adicional II son acuerdos internacionales firmados por los Estados, la pregunta tiene que ver con el origen de las obligaciones de los grupos armados de acuerdo con estos instrumentos. Los grupos armados de la oposición en Colombia no han ratificado ni se han adherido a estos tratados, así como tampoco pueden convertirse en partes de las Convenciones de Ginebra o del Protocolo Adicional.<sup>129</sup> Sin embargo, la aplicación del artículo común 3 y del Protocolo Adicional II a los grupos armados no depende de la declaración expresa de dichos grupos de respetar y acatar dichas normas. Los grupos armados de la oposición en Colombia derivan sus derechos y obligaciones contenidas en el Artículo común 3 y en el Protocolo Adicional II a través del Estado Colombiano en cuyo territorio operan.<sup>130</sup>

Como Colombia ratificó las Convenciones de Ginebra y el Protocolo Adicional II<sup>131</sup>, los grupos armados de Colombia que operan en su territorio automáticamente están obligados a cumplir las normas relevantes establecidas allí. Sin embargo, claramente, en vista de que el Derecho Humanitario tiene muchas dificultades para regular el comportamiento de los grupos armados de la oposición, la falta de consentimiento de estos grupos con las normas relevantes constituye un serio problema.<sup>132</sup> Parece que el gobierno colombiano reconoce el problema del origen de las obligaciones de los grupos armados de la oposición en Colombia de acuerdo con los tratados multilaterales en cuestión. El gobierno ha apoyado la conclusión de los acuerdos *ad hoc* con las FARC y el ELN, en los cuales estos grupos consienten expresamente que se les aplique las normas internacionales relevantes.<sup>133</sup>

8. El Artículo común 3 y los artículos del 4 al 6 del Protocolo Adicional II obligan a los grupos armados de la oposición en Colombia a tratar humanitariamente a todas las personas que no son parte del conflicto y que caen en sus manos y a protegerlos del abuso del poder. La prohibición general del tratamiento inhumano contiene varias prohibiciones específicas, incluyendo la toma de rehenes.<sup>134</sup> La Comisión Inter-Americana aplicó esta norma a los grupos armados de la oposición en Colombia en su Informe Anual de 1996. La Comisión dijo:



*Las condiciones extremadamente difíciles creadas por varios movimientos guerrilleros en Colombia continuaron en 1996. Estos grupos cometieron una gran cantidad de actos violentos, muchos de los cuales constituyen violaciones al Derecho Humanitario aplicable al conflicto armado interno en Colombia. Estos actos incluían los asesinatos por fuera del conflicto armado y los secuestros para exigir un rescate.*<sup>135</sup>

De igual manera, en un caso en el cual un rehén tomado por un grupo armado de la oposición en Colombia fue amenazado de muerte por dicho grupo, la Comisión Inter-Americana consideró que las ‘violaciones al derecho a la vida no tienen justificación alguna, incluso cuando se trata de una represalia por violaciones de cualquier tipo cometidas por el otro bando en conflicto’.<sup>136</sup>

9. La obligación de garantizar el tratamiento humanitario protege a todas las personas que no participan activamente en las hostilidades.<sup>137</sup> En consecuencia, los grupos armados de la oposición en Colombia no pueden tomar como rehenes a las personas que no están involucradas en las hostilidades y que caen bajo su control. El Tribunal de Yugoslavia confirma esta norma, la cual determinó en el caso Tadic (Méritos) que la prueba que se debe aplicar para establecer si una persona está protegida por el Artículo común 3 es:

*preguntar si en el momento del presunto delito, la presunta víctima de los actos proscritos estaba participando activamente en las hostilidades, y si dichas hostilidades ocurrieron en el contexto en el cual se dice que se cometieron los presuntos delitos. Si la respuesta a esta pregunta es negativa, la víctima disfrutará de la protección de las procripciones incluidas en el Artículo Común 3.*<sup>138</sup>

En Consecuencia, la Comisión Inter-Americana dice en su Tercer Informe sobre Colombia:

*La Comisión está extremadamente preocupada porque ... la selección de civiles como objetivo se ha convertido en una táctica, que si no es sistemática, sí es aplicada en diferentes grados por todas las partes del conflicto en Colombia... Las FARC, el ELN y sus grupos aliados han atacado, ejecutado y plagiado o tomado como rehenes a funcionarios del gobierno, incluyendo a los alcaldes locales, los miembros de los consejos y a otros civiles que estos grupos creen son parte del aparato ‘represivo’ del Estado o que son peligrosos para la seguridad de sus combatientes y simpatizantes. Por lo tanto, por ejemplo, el ELN admite que ha hecho ‘detenciones políticas a personas implicadas en actos de corrupción administrativa o que participan en la guerra sucia como promotores de grupos políticos relacionados con los paramilitares’. Con base en esta práctica del ELN, se puede deducir que la organización utiliza una definición extremadamente amplia del término ‘promo-*



*tores de los paramilitares', la cual incluye a todos aquellos individuos que se cree tienen conexiones con los grupos paramilitares, incluyendo a los familiares de los miembros de los grupos paramilitares. El ELN dice que las personas que detiene son sometidas a 'juicios populares revolucionarios' en los cuales se los condena o se los exonera. En cada uno de estos casos, las partes responsables han equiparado erróneamente las vocaciones y/o las actividades no hostiles de sus víctimas con la participación real en las hostilidades, justificando así los ataques en su contra. La aceptación de estas afirmaciones para atacar a estos y a otros civiles no solamente desdibuja cualquier distinción significativa entre los civiles y los combatientes, sino que también puede conducir a una guerra total y caótica. Por lo tanto, la Comisión cree que es necesario clarificar la distinción entre participación 'directa' o 'activa' e 'indirecta' de los civiles en las hostilidades, con el fin de identificar aquellas situaciones limitadas en las cuales no es ilegal atacar a los civiles.<sup>139</sup>*

Además, la prohibición de tomar rehenes por parte de los grupos armados de Colombia se aplica en todo el territorio colombiano, independientemente de si la guerra real ocurre en un sitio o en período de tiempo particulares. En su Tercer Informe sobre Colombia, La Comisión Inter-Americana dice:

*La Comisión ... desea hacer énfasis en el hecho de que durante los conflictos armados internos, el derecho humanitario se aplica en todo el territorio nacional y no solamente dentro del área geográfica específica donde hay hostilidades. Por lo tanto, cuando el Derecho Humanitario prohíbe a las partes en conflicto dirigir ataques contra los civiles o tomar rehenes en todas las circunstancias, prohíbe estos actos ilícitos en todas partes. Por lo tanto, los actos violentos cometidos por las partes en las áreas donde no hay hostilidades no violan menos el derecho internacional humanitario que si se los cometiera en la zona más conflictiva del país.<sup>140</sup>*

10. Finalmente, debo decir unas cuantas palabras sobre la aplicabilidad de las *normas de derechos humanos* a los grupos armados de la oposición en Colombia. De acuerdo con sus términos, los tratados multilaterales de derechos humanos imponen obligaciones solamente al Estado. El Artículo 2 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula: 'Cada *Estado Parte* de la actual Convención se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos dentro de su territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en la actual Convención'. Por consiguiente, [énfasis agregado] la Convención, tal y como la Convención Americana de derechos humanos, no puede obligar a los grupos armados de la oposición en Colombia. Sin embargo, tiene algún tipo de autoridad para proponer que estos instrumentos también puedan regular a los grupos armados de la oposición que ejercen funciones gubernamentales en una parte del territorio o

de la población de Colombia. Dichos grupos, por ejemplo las FARC, se pueden equipar con el gobierno colombiano. En estos casos no tiene sentido exigir que los grupos armados de la oposición sean reconocidos como el gobierno del Estado o, incluso, que funcionen como el único gobierno *de facto* en el territorio del Estado, con el fin de responsabilizarlos de acuerdo con los tratados de derechos humanos.

11. Como ya expuse las obligaciones sustantivas que recaen sobre los grupos armados de la oposición en Colombia, ahora paso a analizar la responsabilidad que se debe atribuir por la violación de estas normas.

### 4.3 **Atribución de la responsabilidad**

#### **Responsabilidad de los grupos armados de la oposición en Colombia como colectividad**

12. La experiencia internacional generalizada demuestra que se puede responsabilizar a los grupos armados de la oposición por las violaciones al Derecho Internacional Humanitario.<sup>141</sup> La experiencia de los organismos internacionales también demuestra que es posible monitorear a los grupos armados de la oposición, de acuerdo con los estándares de los tratados internacionales y del derecho consuetudinario.

13. Para poder responsabilizar a los grupos armados de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, estos deben al menos estar organizados e involucrados realmente en operaciones militares. Los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda, así como la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos exigen que los grupos armados de la oposición tengan una organización mínima y un poder militar efectivo para poder responsabilizarlos de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario. Existen muy pocas dudas con respecto a que los grupos armados de Colombia cumplen con estos requisitos.<sup>142</sup>

14. Aunque el principio de responsabilidad de los grupos armados por la acciones ilegales que cometen ha sido reconocido<sup>143</sup>, hacer cumplir esta responsabilidad genera una gran cantidad de problemas. La responsabilidad internacional en el derecho con respecto a grupos armados de la oposición es primitiva. Por un lado, los organismos internacionales no han sido capaces de definir las normas sobre la atribución de los actos y las omisiones de los miembros de los grupos armados de la oposición. Estos grupos son abstracciones, incapaces de actuar por ellos mismos, físicamente hablando. Tal y como los Estados, actúan solamente a través de los seres humanos. Responsabilizar a un grupo presupone que la acción de un ser humano se puede atribuir al grupo. Sin embargo, con base en la experiencia internacional, es muy difícil identificar las conductas que se pueden atribuir a los grupos armados de la oposición. Aunque el Anteproyecto de los Artículos sobre

la Responsabilidad del Estado se puede aplicar por analogía a los gobiernos *de facto* o a otros grandes grupos armados bien organizados que parecen un Estado, esto no es viable cuando se trata de grupos armados pequeños que no tienen una estructura organizativa clara. Para poder responsabilizar a esta última categoría por las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, es necesario redactar otras normas que se puedan adaptar a las características especiales de estos grupos. Dichas normas se pueden basar en un control efectivo más que en las presunciones sobre la organización interna de estos grupos. Por ejemplo, la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, en su Tercer Informe sobre Colombia, estableció que los grupos armados de la oposición en Colombia habían cometido una gran cantidad de violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Por ello, recomendó que estos grupos, a través de sus comandantes y de sus estructuras de control, respeten, implementen y cumplan las normas que rigen las hostilidades, de acuerdo con lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario<sup>144</sup>. Esta declaración sugiere que la atribución de las acciones o de las omisiones a los grupos armados de Colombia está basada en el control real de estos grupos sobre los individuos más que sobre una prescripción definida de la autoridad del grupo.

15. Otra pregunta abierta con respecto a la responsabilidad del grupo es: ¿En qué tipo de foro se podría procesar a los grupos armados de Colombia? Ciertamente no se podrían procesar en la Corte Internacional de Justicia por cuanto ésta está reservada para los Estados. De hecho, no existe un organismo internacional con el mandato expreso de monitorear el cumplimiento del derecho aplicable por parte de los grupos armados.<sup>145</sup> Los Estados se han mostrado renuentes a complementar las normas relevantes con los medios para inspeccionar el cumplimiento. Temen que esta supervisión proporcione una base para la interferencia internacional.<sup>146</sup> Aunque no hay un mandato explícito, muchos organismos internacionales, por iniciativa propia, han ampliado sus mandatos a las acciones de los grupos armados de la oposición. Estos organismos son la Comisión Inter-Americana, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, la inexistencia de organismos internacionales con la competencia debida para supervisar el cumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de los grupos armados de la oposición explica en parte el estado primitivo para atribuir la responsabilidad a estos grupos de acuerdo con el derecho internacional.

### **Responsabilidad de los miembros y de los líderes del grupo**

16. Responsabilizar a los miembros individuales y a los líderes militares y civiles de los grupos armados de la oposición y de los grupos paramilitares en Colombia por los actos que cometen es más prometedor que responsabilizar al grupo. El derecho internacional ha ignorado por mucho tiempo la responsabilidad penal de los individuos que no hacen parte del Estado. Los tribunales internacionales de Nuremberg y Tokio solamente consideraron a los

líderes de los países del Eje derrotados como responsables por todos los crímenes cometidos durante o en relación con un conflicto armado a nivel internacional, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Los acusados eran funcionarios del Estado o individuos que actuaron en connivencia con el Estado.<sup>147</sup> El establecimiento de los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda ha cambiado la situación legal. Los Estatutos y la jurisprudencia de estos Tribunales aceptan la responsabilidad de los individuos y de los líderes que no forman parte del Estado, ya sea en un contexto puramente militar o no. De acuerdo con la experiencia de estos Tribunales, es posible responsabilizar a los miembros ordinarios de los grupos armados de la oposición por sus propios actos. La responsabilidad de los líderes que no hacen parte del Estado puede provenir del hecho de haber ordenado las violaciones al derecho penal internacional cometidas por sus subordinados, así como de la incapacidad para prevenir o castigar dichas violaciones. El Estatuto de la Corte Especial para Sierra Leona (del 4 de octubre de 2000, que todavía no está vigente)<sup>148</sup> refleja una tendencia similar. De hecho, la Corte de Sierra Leona se establecerá con el objetivo específico de enjuiciar a los líderes del Frente Unido Revolucionario (FUR), que es el grupo armado de la oposición involucrado en el conflicto en Sierra Leona desde 1991. Finalmente, el Estatuto de la Corte Penal Internacional (firmado el 18 de julio de 1998, que todavía no está vigente) es el primer tratado general de derecho penal que incorpora la responsabilidad individual de los miembros y de los líderes de los grupos armados de la oposición.

17. Los delitos por los cuales se responsabiliza a los miembros ordinarios y a los líderes militares y civiles de los grupos armados de Colombia son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. **Los crímenes de guerra** son delitos contra las normas particulares del Derecho Internacional Humanitario. Hasta hace muy poco, se creía que las personas que no hacían parte del Estado no podían cometer crímenes de guerra en los conflictos armados internos. El Artículo Común 3 y el Protocolo Adicional II que se redactaron específicamente para aplicarlos a los grupos armados de la oposición, no se refieren expresamente a los individuos. Estas disposiciones solamente se refieren a las partes involucradas en el conflicto.<sup>149</sup> Sin embargo, actualmente, aunque algunos instrumentos internacionales son ocasionalmente inconsistentes, podemos decir sin temor a equivocarnos que las graves violaciones al Artículo Común 3 y a una parte del Protocolo Adicional II implican, como parte de un tratado y como parte del derecho consuetudinario, una responsabilidad penal de cada uno de los miembros y de los líderes de los grupos armados de Colombia. Por ejemplo, en el caso *Furundzija*, el Tribunal de Yugoslavia consideró:

*El tratado y las normas consuetudinarias mencionadas anteriormente [inter alia Artículo Común 3 y Protocolo Adicional II] imponen obligaciones a los Estados y a otras entidades involucradas en un conflicto, pero ante todo se refieren a los actos de los individuos, particularmente a aquellos perpetrados por los funcionarios del Estado o, en términos*

*generales, a los funcionarios de una de las partes del conflicto o a los individuos que actúan por instigación o con el consentimiento o aquiescencia de una de las partes del conflicto. Tanto las normas consuetudinarias como las disposiciones del tratado aplicables durante el conflicto armado prohíben cualquier tipo de tortura. Todos aquellos que participan en actos de tortura son personalmente responsables de dichos actos a nivel penal.*<sup>150</sup>

Como el Artículo Común 3 y el Protocolo Adicional II prohíben la toma de rehenes, la violación de estas normas es un crimen de guerra por el cual se puede responsabilizar penal e individualmente a los miembros y a los líderes de los grupos armados de la oposición en Colombia. Que la toma de rehenes en los conflictos internos es un crimen de guerra por el cual se puede responsabilizar individualmente a las personas que no hacen parte del Estado también se desprende del Artículo 3 del Estatuto de la Corte de Sierra Leona, el cual penaliza este acto. Además, el Artículo 8(2)(c) del Estatuto de la Corte Penal Internacional explícitamente clasifica la toma de rehenes como un crimen de guerra.<sup>151</sup>

18. Parece que para condenar a una persona por crímenes de guerra, es necesario que ésta demuestre que no tiene nexos con una de las partes o con un Estado parte del conflicto, por ejemplo, con un grupo armado de la oposición. Todo lo que se necesita es cometer el crimen en el contexto de un conflicto armado. La experiencia del Tribunal de Yugoslavia confirma que el concepto de las partes de un conflicto no tiene mayor relevancia para imputar la responsabilidad penal a nivel individual y general. De igual manera, el juez Rodríguez anotó en su opinión discrepante sobre el caso *Aleksovski*: ‘El Derecho Internacional Humanitario se ha ampliado en gran medida por encima de sus principios centrados en el Estado ... El principio es enjuiciar a las personas naturales que son responsables individualmente por las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, independientemente de su pertenencia a un grupo’.<sup>152</sup>

19. En la medida en que los crímenes de guerra no se cometen aisladamente sino que son el resultado de un intento intencional de atacar a la población civil, se puede responsabilizar individualmente a los miembros y a los líderes de los grupos armados de la oposición en Colombia por los **crímenes de lesa humanidad**. El punto de vista predominante en el pasado era que los crímenes de lesa humanidad exigían la participación del Estado.<sup>153</sup> Sin embargo, los recientes instrumentos internacionales reconocen que los miembros y los líderes de los grupos armados de la oposición pueden tener una responsabilidad penal por haber cometido estos crímenes o, en el caso de los líderes, por haberlos ordenado o por haber sido incapaces de prevenirlos o reprimirlos.<sup>154</sup> Con la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad se incluyeron por primera vez en un tratado con una amplia cobertura. El Artículo 7 del Estatuto concede a

la Corte Penal Internacional la jurisdicción para interponer acciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los conflictos internos. A diferencia de los Estatutos de los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda, el Estatuto de la Corte Penal Internacional estipula explícitamente que los miembros de las entidades que no pertenecen al Estado pueden cometer este tipo de crímenes. Este Estatuto define los crímenes de lesa humanidad como los ataques en contra de cualquier población civil, de conformidad con o con el respaldo de un estado o *de una política organizacional* para llevar a cabo dicho ataque'. Se pretende que la 'política organizacional' incluya a los grupos armados de la oposición.<sup>155</sup> El Estatuto de la Corte Penal Internacional enumera como crímenes de lesa humanidad el 'encarcelamiento o cualquier otra forma de privación de la libertad física, que violen las normas fundamentales del derecho internacional'. Parece que este tipo de delito incluye la toma de rehenes. La toma de rehenes también se menciona en el Artículo 7 (I-i) del Estatuto, el cual califica 'la desaparición forzada de personas' como un crimen de lesa humanidad. Este artículo define la desaparición, entre otras cosas, como el 'plagio o secuestro de personas' en el cual además se niegan 'a dar información sobre la suerte y paradero de dichas personas, con la intención de que la ley no las pueda proteger durante un período de tiempo prolongado'.<sup>156</sup>

#### 4.4 **¿Quien debería llevar a juicio a estos infractores?**

20. Como ya he explicado la responsabilidad individual de los miembros y de los líderes de los grupos armados de Colombia por las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, ahora quiero analizar otra pregunta: ¿Quién debería interponer las acciones judiciales en contra de estos infractores? Una primera opción podría ser un juicio realizado por los mismos grupos armados de la oposición en Colombia. El Artículo Común 3 y el Protocolo Adicional II no obligan expresamente a los grupos armados de la oposición a entablar juicios por las violaciones a estas normas cometidas por los miembros de estos grupos o por otras personas bajo su control. Esta obligación se puede deducir del Artículo 1 común a las Convenciones de Ginebra que obliga a los Estados Partes a 'garantizar el respeto' a las Convenciones 'en todas las circunstancias'. Como este artículo también se puede aplicar en los conflictos armados internos, entonces podríamos inferir que se puede aplicar igualmente a los grupos armados de la oposición involucrados en estos conflictos. Sin embargo, los instrumentos internacionales brindan poco apoyo a la obligación de los grupos armados de la oposición de enjuiciar a los transgresores de los estándares humanitarios. Plattner expresa el sentimiento general de que 'es difícil pensar que el Derecho Internacional Humanitario conceda a los insurgentes la autoridad para enjuiciar y procesar a los autores de las violaciones', por cuanto esto implicaría otorgarles un reconocimiento en los instrumentos internacionales.<sup>157</sup>

21. Un estudio de la práctica internacional muestra que el deber de enjuiciar a los miembros y a los líderes de los grupos armados de la oposición en Colombia por los delitos que cometen es ante todo del **estado colombiano**. Los tratados de derechos humanos, tales como el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, obligan a Colombia a investigar, enjuiciar y, si es oportuno, castigar efectivamente por las violaciones a los derechos humanos incluso cuando los individuos que las cometen no hacen parte del Estado.<sup>158</sup>

22. **El enjuiciamiento por parte de otros estados** plantea preguntas más difíciles. Este exigiría a las cortes internacionales ejercer la jurisdicción con base en el principio de la universalidad, el cual se refiere a los delitos cometidos por ciudadanos extranjeros fuera del territorio del estado. De acuerdo con las Convenciones de Ginebra solamente las disposiciones para las infracciones graves, aplicables en los conflictos internacionales, implican una jurisdicción penal, mandatoria y universal para las cortes nacionales.<sup>159</sup> El Tribunal de Yugoslavia, de acuerdo con las instrucciones del Secretario General de NU, consideró que las infracciones graves no se pueden aplicar en los conflictos internos, por cuanto el principio de la jurisdicción universal no cubre estas situaciones.<sup>160</sup> Aunque actualmente las cortes nacionales y extranjeras no están obligadas a enjuiciar a los miembros o a los líderes de los grupos armados de Colombia, se puede decir, con base en algunas prácticas internacionales, que el derecho para hacerlo está evolucionando. Primero, el Tribunal de Yugoslavia no excluyó totalmente la ampliación, en el futuro, de las disposiciones para las infracciones graves a los conflictos internos.<sup>161</sup> Segundo, la Comisión de Derechos Humanos de NU aceptó la aplicabilidad de las disposiciones para las graves infracciones en los conflictos internos. En 1999, adoptó una resolución que califica los actos de tortura y los asesinatos premeditados cometidos en el conflicto de Sierra Leona, que la Comisión calificó como un conflicto interno, como infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, obligando así a todos los Estados a enjuiciar a dichas personas ante sus propias cortes, independientemente de su nacionalidad.<sup>162</sup> Finalmente, el 11 de noviembre de 1997, el *Hoge Raad* (Corte Suprema) de Holanda, en el caso Knešević, reglamentó que una corte holandesa podía procesar por crímenes de guerra cometidos en los conflictos internos, con base en la jurisdicción universal.<sup>163</sup>

23. Otra posibilidad es que **los tribunales internacionales** enjuicien a los miembros y a los líderes de los grupos armados de la oposición en Colombia. La jurisdicción de los Tribunales para la Antigua Yugoslavia y Ruanda está restringida a los conflictos en dichos Estados. Sin embargo, cuando la Corte Penal Internacional empiece a funcionar como tal, tendrá la jurisdicción sobre la toma de rehenes por parte de los miembros o de los líderes de los grupos armados de la oposición en Colombia, realizada después de que su Estatuto entre en vigencia y siempre y cuando Colombia ratifique este Estatuto o acepte la jurisdicción de esta Corte.<sup>164</sup>

## 4.5 Conclusiones

24. En este documento, muestro, con base en la práctica de los organismos internacionales que, cuando los grupos armados de la oposición en Colombia involucrados en el conflicto interno en Colombia, toman rehenes, violando el Derecho Internacional Humanitario y, en menor grado, la legislación sobre los derechos humanos, es posible responsabilizarlos como colectividad, así como responsabilizar a sus miembros y a sus líderes por estas violaciones, de acuerdo con el derecho internacional.

25. La práctica internacional que responsabiliza a los grupos armados de la oposición en Colombia es significativa cuando uno se da cuenta de que no existen mecanismos para la supervisión con el poder explícito de monitorear el comportamiento de estos grupos. A pesar de que no tienen una competencia formal, dos organismos internacionales, la Comisión Inter-Americana y la Comisión de Derechos Humanos de NU, asumieron la responsabilidad de supervisar las acciones de los grupos armados de la oposición en Colombia.

26. De igual manera, la falta de un mecanismo con mandato formal para aplicar el derecho internacional y la legislación sobre derechos humanos a los grupos colombianos se debe en parte al estado primitivo de la responsabilidad de estos grupos bajo el derecho internacional. Un ejemplo de esto es el problema de la atribución. La atribución de las acciones o de las omisiones por los individuos o los organismos a los grupos armados de la oposición es un aspecto difícil pero vital para poder imputar la responsabilidad a estos grupos. Estos grupos son entidades ficticias, es decir, que solamente pueden actuar por medio de los individuos. Sin embargo, los organismos internacionales han sido casi completamente incapaces de manejar el tema de la atribución.

27. La falta de mecanismos efectivos para hacer cumplir las leyes representa un gran obstáculo para avanzar en el desarrollo de la responsabilidad internacional de los grupos armados de la oposición en Colombia. Lo que se podría hacer en el futuro es crear un procedimiento para demandas individuales por las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por los grupos armados de la oposición, incluyendo a los grupos colombianos.

28. En este documento también demuestro que el derecho internacional está cada vez más preocupado por responsabilizar individualmente a los miembros y a los superiores de los grupos armados de la oposición por los delitos que cometen. Esta posibilidad tiene un gran potencial para hacer cumplir el derecho internacional aplicable a los grupos armados de la oposición en Colombia.

29. Sin embargo, las posibilidades de un juicio real son limitadas. La conclusión con respecto a la responsabilidad de los líderes de los grupos armados de la oposición recae esencialmente en los Estatutos y la jurisprudencia de



los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda. Estos tribunales son *ad hoc* en cuanto a su naturaleza y solamente tienen que ver con dos conflictos internos, es decir, los conflictos de Yugoslavia y Ruanda. Además, hasta ahora ha habido muy pocos procesos que acusen a los líderes de los grupos armados de la oposición por delitos internacionales. El establecimiento de la Corte Penal Internacional y de la Corte Especial para Sierra Leona son ciertamente instrumentos bienvenidos en este sentido, por cuanto impulsan las posibilidades para enjuiciar a los miembros y a los líderes de los grupos armados de la oposición en Colombia.

30. En cualquier caso, los enjuiciamientos por parte de los tribunales internacionales serán escasos. Por lo tanto, la pregunta de si existen otras posibilidades para procesar a los líderes de los grupos armados de la oposición es legítima. El Derecho Internacional Humanitario, tal y como está concebido en la actualidad, no obliga explícitamente a los grupos colombianos a enjuiciar a los transgresores de este derecho. Una solución alternativa puede ser que el Estado Colombiano proceda a enjuiciar a estos transgresores. Sin embargo, es posible que el gobierno colombiano prefiera enjuiciar a los líderes de los grupos armados de Colombia como simples criminales más que como transgresores del Derecho Internacional Humanitario.

31. Me pregunto qué tan satisfactoria es la situación que he presentado en este documento y si existe alguna otra posibilidad de que surjan otras alternativas. Por ejemplo, ¿qué posibilidad existe de que otros Estados enjuicien a los líderes de los grupos armados de la oposición por las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, con base en la jurisdicción universal? Esto implicaría la ampliación del sistema para hacer cumplir las disposiciones relacionadas con las infracciones graves bajo el derecho consuetudinario, con el fin de incluir los conflictos internos. Como ya expliqué, actualmente, el Tribunal de Yugoslavia todavía considera que el sistema de las disposiciones para las infracciones graves no se puede aplicar a los conflictos armados internos. Sin embargo, el Tribunal de Yugoslavia y la Comisión de Derechos Humanos de NU han dicho claramente que la posibilidad de que otros Estados entablen juicios por las violaciones cometidas en los conflictos internos, con base en la jurisdicción universal, no es del todo inconcebible en el futuro.

---

123 Liesbeth Zegveld, PhD de la Universidad Erasmo de Rotterdam en Holanda. Ejerce como abogada penal e internacional en Amsterdam, Holanda.

124 M. van Royen. 'Guerrilla tart geduld regering Colombia', en: *NRC Handelsblad*. 6 (Rotterdam, 10 de noviembre de 1998).

125 Más que todo, no queda claro si el gobierno sea capaz de poner en práctica sus aseveraciones que si las FARC no respetan los derechos humanos en las áreas despejadas, el gobierno invertirá el proceso y retomará su autoridad real en dichas zonas. K. De Young. 'El Atolladero de Colombia se Profundiza' *International Herald Tribune*, 2 (7 de julio de 1999): S. Alonso, 'In Noord-Ierland gaat het nog veel trager', en: *NRC Handelsblad*, 6 (Rotterdam, 26 de octubre de 1999) (entrevista con Andrés Pastrana, Presidente de Colombia).

- 126 'Nexos que obligan: Colombia y los Nexos entre los Militares y los Paramilitares'. *Human Rights Watch* (febrero del 2000).
- 127 Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. OEA/Ser.L/V/II.102. Doc. 9 rev 1. en 77, párrafo 20 (26 de febrero de 1999).
- 128 Kalshoven, F., 'Protocolo II. CDDH y Colombia', en: *Derecho Internacional: Teoría y Práctica*, 597-622 (K. Wellens, ed., Kluwer Law International, Holanda, 1998).
- 129 Las Convenciones de Ginebra solamente admiten como 'Altas Partes Pactantes' a los Estados en el sentido tradicional. El Artículo 1 común a las Convenciones de Ginebra estipula que las 'Altas Partes Pactantes se comprometen a respetar y a garantizar el respeto de la actual Convención en todas las circunstancias'. La noción 'Altas Partes Pactantes' se refiere a los Estados en los cuales las Convenciones están vigentes. Lo mismo podemos decir del Protocolo Adicional II, por cuanto solamente los Estados Partes de las Convenciones de Ginebra pueden ser partes de dicho Protocolo. Los artículos 20 y 22 del Protocolo Adicional II, S-S, Junod, *Comentario sobre los Protocolos Adicionales del 8 de junio de 1977 a las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949* en 1338 (Sandoz, Y. et al. (eds.) Martinus Nijhoff, Ginebra, 1987); ver también: M. Takemoto, 'Los Protocolos Adicionales de 1977 y el Derecho de los Tratados'. en: *Estudios y Ensayos sobre el Derecho Internacional Humanitario y los Principios de la Cruz Roja en Honor a Jean Pictet*. 249-260 (C. Swinarski, (ed), Comité Internacional de la Cruz Roja, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1984).
- 130 A/7720, párrafo 171 (Informe del Secretario General de NU, 'Con Respecto a los Derechos Humanos en los Conflictos Armados', (20 de noviembre de 1969); ver también S-S Junod. *Comentario sobre Los Protocolos Adicionales*, *supra* no. 8 en 1345.
- 131 Colombia ratificó las Convenciones de Ginebra el 8 de noviembre de 1961: Se adhirió al Protocolo Adicional II el 14 de agosto de 1995.
- 132 L. Zegveld, *Grupos Armados de la Oposición en el Derecho Internacional: En Busca de la Responsabilidad*, 107-111 (tesis doctoral, 2000, que publicará Cambridge University Press en el verano del 2001).
- 133 F. Kalshoven, *supra* no. 7, en 605 y 609.
- 134 Artículo común 3 (1-b) y artículo 4 (2-c) del Protocolo Adicional II.
- 135 Informe Anual de 1996. OEA/Ser.L/V/II.95. Doc. 7 rev., en 662, párrafo 53 (14 de marzo de 1977); ver también Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos. Segundo Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.84, en 219 (4 de octubre de 1993).
- 136 Informe Anual de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos en 1996, *supra* No. 14, en 818.
- 137 El Artículo común 3 estipula que protege a las 'Personas que no participan activamente en las hostilidades, incluyendo a los miembros de las fuerzas armadas que han dejado a un lado sus armas y a aquellos fuera de combate por enfermedad, heridas, detención o por cualquier otra causa'. El artículo 2 del Protocolo Adicional II provee que se aplica a "todas las personas afectadas por un conflicto armado, tal y como está definido en el Artículo 1'.
- 138 *Fiscal vs. Dusko Tadic*, No. IT-94-1-T, párrafo 615 (7 de mayo de 1997); ver también Tribunal de Yugoslavia, *Fiscal vs. Kupreskic et al.*, No. IT-95-16-T, párrafos 522-524 (14 de enero del 2000). La Comisión InterAmericana aplicó una prueba similar en el caso *Tablada*. Rep. No. 55/97. Caso No. 11.137 (Argentina), párrafo 189 (30 de octubre de 1997).
- 139 Tercer Informe sobre Colombia, *supra*, No. 6, en 84-86, párrafos 47, 51-53.
- 140 *Supra* No. 6, en 95, párrafo 83.
- 141 En las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia observó que las acciones de los Contras, los cuales luchaban en contra del gobierno de Nicaragua, se regían por el derecho aplicable al conflicto armado de carácter nacional, es decir, por el artículo común 3, (Nicaragua vs. U.S.), en 114, párrafo 119) (Sentencia del 27 de junio de 1986) (Méritos) 1986 CJJ, Rep. 14. De igual manera, en el caso *Tablada*, La Comisión Inter-Americana consideró: 'Las disposiciones mandatorias del Artículo Común 3 obligan expresamente y se aplican equitativamente a las dos partes involucradas en los conflictos internos, es decir, al gobierno y a las fuerzas disidentes. Además, la obligación de aplicar el Artículo Común 3 es absoluta para las dos partes e independiente de las obligaciones de la otra parte. Por lo tanto, los agresores del MTP [grupo armado de la oposición que participó en el conflicto en Argentina en ese entonces] y las fuerzas armadas de Argentina tenían los mismos deberes de acuerdo con el derecho humanitario, *supra* No. 17, párrafo 174; ver también el Informe No. 26/97 Caso No. 11.142 (Colombia), párrafo 131 (30 de septiembre de 1997). Más aún, el Consejo de Seguridad de NU y la Comisión de Derechos Humanos de NU, teniendo en cuenta el con-

texto de diferentes conflictos internos, invitó a todas las partes involucradas en las hostilidades, es decir, a las fuerzas armadas del gobierno y a los grupos armados de la oposición, a respetar totalmente las disposiciones del derecho internacional humanitario aplicables a estas situaciones, incluyendo el Artículo Común 3, la Resolución 1193 (1998), párrafo 12 (28 de agosto de 1998) (sobre Afganistán) del Consejo de Seguridad de NU; la Resolución 812 (1993), párrafo 8 (12 de marzo de 1993) (sobre Ruanda) del Consejo de Seguridad de NU; la Resolución 794 (1992), párrafo 4 (diciembre de 1992) (sobre Somalia) del Consejo de Seguridad de NU; la Resolución 1999/18, párrafo 17 (23 de abril de 1999) en la cual la Comisión de Derechos Humanos de NU (condena los abusos de los miembros del Ejército de Liberación de Kosovo, específicamente las violaciones al derecho internacional humanitario); la Resolución 1997/59, párrafo 7 (15 de abril de 1997) (sobre Sudán) de la Comisión de Derechos Humanos de NU; la Resolución 1998/67, párrafo 6 (21 de abril de 1998) (sobre Sudán) de la Comisión de Derechos Humanos de NU.

- 142 Informe Conjunto de los Relatores Especiales sobre el Problema de la Tortura, N.S. Rodley, y el Relator Especial en el caso extrajudicial, sumario o arbitrario de Bacre Waly Ndiaye, E/CN.4/1995/111, párrafo 35 (16 de enero de 1995). (Informan con respecto a los grupos armados de Colombia: 'se dice que los grupos guerrilleros han reemplazado la administración estatal y ejercen un control absoluto en ciertas áreas').
- 143 Artículo 14 (3) del Anteproyecto de los Artículos de la CDI sobre la Responsabilidad del Estado, adoptado provisionalmente por la Comisión en su primer debate, A/51/10 (1996) dispone: "De igual manera, el primer párrafo es aplicable, sin perjuicio de la atribución de la conducta del organismo del movimiento insurreccional, a ese movimiento en cualquier caso en que se pueda hacer dicha atribución de acuerdo con el derecho internacional". Este párrafo se borró del Anteproyecto de los Artículos adoptados provisionalmente por el Comité de Redacción en el segundo debate en 1998, Doc. A/CN.4/L.569 de NU (4 de agosto de 1998). La razón es que, de acuerdo con el informe del Relator Especial, esta disposición está relacionada con los movimientos que no son Estados, '*ex hypothesi*'. Por lo tanto, está fuera del alcance del Anteproyecto de los Artículos. El Relator observó que como es posible prever la responsabilidad de los movimientos insurgentes, por ejemplo, por violaciones al derecho internacional humanitario, este aspecto se puede tratar en el comentario al Anteproyecto de los Artículos. Primer Informe sobre la Responsabilidad del Estado, presentado por James Crawford, Relator Especial A/CN.4/490 (1998).
- 144 Supra No. 6, en 158, recomendación No. 1.
- 145 La competencia *ratione materiae* de los organismos internacionales para aplicar el derecho internacional humanitario no afecta su competencia *ratione personae*. Por ejemplo, aunque la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos se considera competente para aplicar el derecho internacional humanitario en los procedimientos para las demandas individuales, también es consciente de que la evaluación del comportamiento de los grupos armados de la oposición de acuerdo con el derecho internacional humanitario no hace parte de su mandato. Segundo Informe sobre Colombia, *supra* No. 14, en 3; Tercer Informe sobre Colombia, *supra* No. 6, en 72, párrafo 5.
- 146 Durante las negociaciones del Protocolo Adicional II, se dijo que era posible que los grupos armados de la oposición utilizaran las disposiciones sobre la supervisión para solicitar ayuda a los organismos internacionales, incluso en contra de la objeción de las autoridades establecidas. Según los Estados esto podría internacionalizar el conflicto. A. Eide, 'El Nuevo Derecho Internacional Humanitario en los Conflictos Armados Internos', en: *El Nuevo Derecho Internacional Humanitario de los Conflictos Armados*, 277, en 297 (A. Cassese, ed., Editoriale Scientifica S.r.l., Nápoles, 1979). La inclusión en el Protocolo Adicional II de la disposición sobre que 'no se puede utilizar ninguna de las partes del Protocolo como una justificación para intervenir directa o indirectamente, bajo ninguna circunstancia (...)' (Artículo 3 (2) Protocolo Adicional II), no disminuyó el miedo a esta situación.
- 147 El Artículo 6 de la Carta de Constitución del Tribunal de Nuremberg, *re-impresa* en Schindler & Toman, *Legislación de los Conflictos Armados*, 826 (Acuerdo para el Juicio y el Castigo de los Principales Criminales de Guerra del Eje Europeo) (el cual otorgó al tribunal internacional la autoridad para castigar a las personas que 'actuaron en favor de los países del Eje Europeo, ya fuera como individuos o como miembros de organizaciones'); Artículo 5 de la Carta de Constitución del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, Proclamación Especial del Comandante Supremo de los Países Aliados el 19 de enero de 1946, *reimpresa* en el Boletín del Departamento de Estado. Vol. XIV, No. 349 (10 de marzo de 1946).
- 148 La Resolución 1315 del Consejo de Seguridad de NU sobre el Establecimiento de Una Corte Especial

para Sierra Leona (14 de agosto del 2000). *Refiérase* a los anexos del Informe del Secretario General de NU, S/2000/915 (4 de octubre del 2000) (Informe del Secretario General sobre el Establecimiento de una Corte Especial para Sierra Leona) para ver los textos del Estatuto de la Corte Especial y del Acuerdo entre NU y Sierra Leona.

- 149 Los comentarios al Artículo Común 3 y al Protocolo Adicional II no mencionan el carácter penal de estas disposiciones; *ver también* D. Plattner, 'La Represión Penal de las Violaciones al Derecho Internacional Humanitario Aplicables a los Conflictos Armados Internos', 30 IRRC, 409, en 414-417 (1990).
- 150 *Fiscal vs. Furundzija*, caso No. IT-95-17/1-T, párrafo 140 (10 de diciembre de 1998); *ver también* Decisión sobre la Moción de la Defensa para la Apelación contra el Auto Interlocutorio sobre la Jurisdicción, No. IT-94-1-AR72, párrafo 134 (2 de octubre de 1995); Tribunal de Yugoslavia, caso *Celebici*, *Fiscal vs. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic, Esad Landzo*, No. IT-96-21-T, párrafo 308 (16 de noviembre de 1998). Es posible encontrar evidencias similares en el Estatuto y la jurisprudencia del Tribunal de Ruanda y en el documento de la Comisión de Derecho Internacional. El Artículo 4 del Estatuto del Tribunal de Ruanda concede al Tribunal la jurisdicción para enjuiciar por las violaciones al Artículo Común 3 y al Protocolo Adicional II; *ver también* *Fiscal vs. Akayesu*, caso No. ICTR-96-4-T, párrafos 613-615 (2 de septiembre de 1998); *Fiscal vs. Rutaganda*, No. ICTR-96-3, párrafo 88 (6 de diciembre de 1999); Anteproyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Código de los Delitos en contra de la Paz y de la Seguridad de la Humanidad, A/51/10, Supp. No. 10, Artículo 20 (f) y Comentario (Crímenes de Guerra) (1996); *ver también* T. Meron, 'Penalización Internacional de las Atrocidades Internas', 89 AJIL 554, en 561-562 (1995); S.R. Ratner, J.S. Abrams, *Responsabilidad por las Atrocidades contra los Derechos Humanos en el Derecho Internacional*, en 94-99 (Claredon Press, Oxford, 1997). A pesar de la experiencia de los dos tribunales *ad hoc* y de la Comisión de Derecho Internacional para mantener la aplicabilidad del principio de responsabilidad penal e individual a las personas que violan el Artículo Común 3 y el Protocolo Adicional II como parte del tratado y del derecho consuetudinario, también existe evidencia en su contra. La Comisión de Expertos para la Antigua Yugoslavia y el Secretario General en su Informe sobre el Estatuto del Tribunal de Ruanda, adoptaron un enfoque restrictivo con respecto al derecho consuetudinario aplicable a los conflictos armados internos. Estos organismos se dieron cuenta de que todavía era necesario distinguir entre el derecho consuetudinario aplicable a los conflictos internacionales y el aplicable a los conflictos internos. También consideraron que el derecho consuetudinario para los conflictos internos era 'debatible' y que no incluía la penalización a nivel individual. El Informe final de la Comisión de Expertos S/1994/674, Anexo, en 13, párrafo 42, y en 16, párrafo 52 (27 de mayo de 1994); Informe del Secretario General de NU, S/1995/134, párrafo 12, incluyendo la nota de pie de página No. 8 (1995); *ver también* D. Shraga, R. Zacklin, 'Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia', 5 EJIL 360, en 366, pie de página No. 22 (1994). Sin embargo, a pesar de estos elementos en contra, parecería que la experiencia de los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda y el documento de la Comisión de Derecho Internacional se pueden considerar como una reflexión exacta del estado de derecho aplicable a los conflictos internos. La evidencia en contra data de antes de las decisiones de los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda que determinaron la responsabilidad de acuerdo con el Artículo Común 3 y el Protocolo Adicional II. Es importante decir que la Comisión de Derecho Internacional cambió su posición al negar el carácter penal de estas disposiciones del derecho consuetudinario, de conformidad con la adopción del Estatuto del Tribunal de Ruanda y de la sentencia del Tribunal de Yugoslavia en el caso *Tadic* (1995, Apelación contra Auto Interlocutorio sobre la Jurisdicción, *supra*); compare con B. Simma, A.L. Paulus, 'La Responsabilidad de los Individuos por los Abusos de los Derechos Humanos en los Conflictos Internos: Una Visión Positivista', 93 AJIL 310-313 (1999) (análisis del estatus del derecho penal relativo a las violaciones del derecho internacional humanitario en los conflictos internos).
- 151 El Artículo 8(2)(c) sub i, vii, viii se copió del Protocolo Adicional II; *ver* M.H. Arsanjani, 'El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional', 93 AJIL, 22, 32 (1999).
- 152 *Fiscal vs. Aleksovski*, No. IT-95-14/1-T. Opinión discrepante del juez Rodríguez, párrafo 31 (25 de junio de 1999).
- 153 La Carta de Constitución de Nuremberg, la cual marcó el nacimiento de la noción moderna de los crímenes de lesa humanidad, se refiere a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante un conflicto armado a nivel internacional. Aún más, la Carta de Nuremberg exigía que las personas procesadas y castigadas estuvieran relacionadas con el Estado. El Artículo 6 de la Carta confirió al tribunal internacional la autoridad para castigar a las personas que 'actuaban en favor de los países del Eje Europeo, ya fuera como individuos o como miembros de organizaciones'.

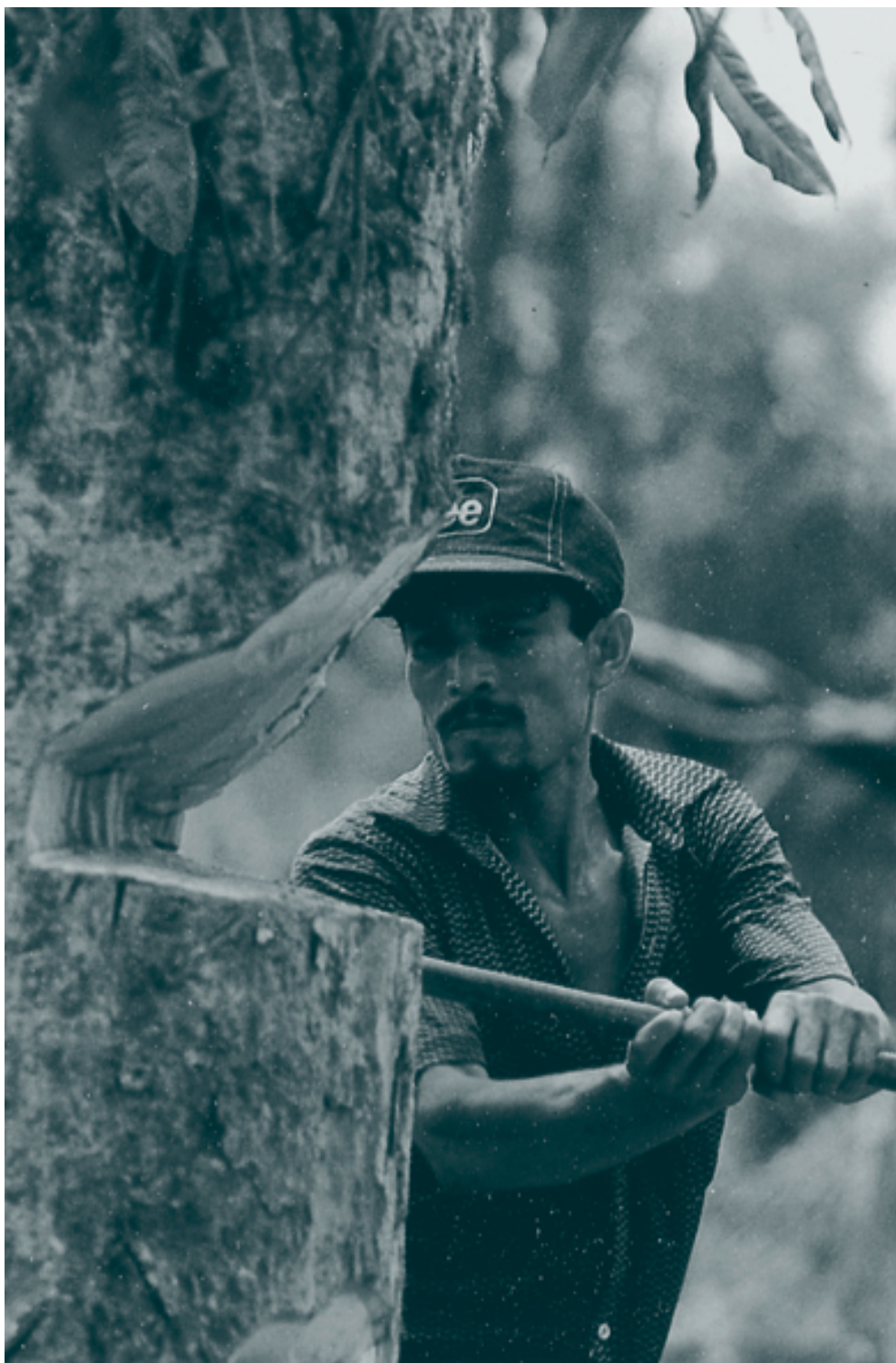
- 154 En su informe final, la Comisión de Expertos para Ruanda sugirió que el RPF (el grupo armado involucrado en el conflicto interno de Ruanda en 1994) era legalmente capaz de cometer crímenes de lesa humanidad, *supra* No. 29, Anexo párrafo 98; *compare* con J.C. O'Brien, 'El Tribunal Internacional para las Violaciones al Derecho Internacional Humanitario en la Antigua Yugoslavia', 87 *AJIL* 639, 648-649 (1993). Los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda han establecido claramente que los crímenes de lesa humanidad, definidos como tal en sus Estatutos y como cuestión de derecho consuetudinario, pueden cometerse en los conflictos armados internos. *Apelación contra Auto Interlocutorio del caso Tadic*, *supra* No. 29, párrafo 141; Tribunal de Ruanda, caso *Akayesu*, *supra* No. 29, párrafo 565. El Artículo 2 del Estatuto de la Corte de Sierra Leona concede a la Corte la jurisdicción sobre los crímenes de lesa humanidad. Debido a que esta Corte se establecerá con el propósito específico de enjuiciar a los líderes del FUR, que es el grupo armado de la oposición en el conflicto en Sierra Leona, no cabe la menor duda de que los individuos que no hacen parte del Estado pueden cometer crímenes de lesa humanidad.
- 155 M.H. Arsanjani, 'El Estatuto de Roma', *supra* No. 30, en 31.
- 156 Artículo 7 (1-i) junto con el art. 7 (2-i) del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
- 157 D. Plattner, 'Represión Penal', *supra* No. 28, en 415. Ver La Resolución 1325, párrafos 10 y 11 del Consejo de Seguridad de NU (13 de octubre del 2000) (que invita 'a todas las partes involucradas en el conflicto armado' a tomar medidas especiales para proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia basada en el género (...)' y que hace énfasis en 'la responsabilidad de todos los Estados de acabar con la impunidad y de enjuiciar a los responsables de los genocidios, los cuales están considerados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra' [énfasis especial]. Además, refiérase a L. Zegveld, *Los Grupos Armados de la Oposición en el Derecho Internacional: En Busca de la Responsabilidad*, *supra* No. 11, en 183-184.
- 158 Ver, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos, *Yasa v. Turquía* (Sentencia del 2 de septiembre de 1998) 88 Informes (1998-VI) en 2411, párrafos 98-100, en los cuales la Corte Europea señala la obligación de Turquía de realizar investigaciones penales efectivas del asalto armado al demandante. Asalto que, de acuerdo con el gobierno turco, fue cometido por el PKK.
- 159 Las Convenciones de Ginebra de 1949 califican como infracciones graves a un número de acciones cometidas en contra de las personas o de la propiedad protegidas por estas Convenciones, incluyendo los asesinatos premeditados, la tortura, la privación deliberada de los derechos a un juicio justo, ver e.g., Artículo 147 de la Cuarta Convención de Ginebra. Estas normas se superponen en gran medida al Artículo Común 3 y al Protocolo Adicional II. Sin embargo, una diferencia importante entre las infracciones graves y las serias violaciones al Artículo Común 3 y al Protocolo Adicional II es que las disposiciones para las infracciones graves implican una jurisdicción penal, mandatoria y universal para las cortes nacionales. Esta diferencia fue la que hizo que el Tribunal de Yugoslavia, de acuerdo con las instrucciones del Secretario General de NU, decidiera que las infracciones graves no son aplicables en los conflictos internos.
- 160 *Apelación contra Auto Interlocutorio en el caso Tadic*, *supra* No. 29, párrafo 80; Informe del Secretario General de conformidad con el párrafo 2 de la Resolución 808 (1993), S/25704, párrafo 37 del Consejo de Seguridad (3 de mayo de 1993). El Tribunal reforzó este punto de vista en muchos otros casos, ver e.g., *Fiscal vs. Dusko Tadic*, Caso No. IT-94-1-A, párrafo 80 (15 de julio de 1999) (*Apelación en Méritos*); caso *Celebici*, *supra* No. 29, párrafo 317.
- 161 *Apelación contra Auto Interlocutorio en el Caso Tadic*, *supra* No. 29, párrafo 83; ver también el caso *Aleksovski*, *supra* No. 31, Opinión discrepante del juez Rodríguez, párrafo 44 ('Considero que el desarrollo de las normas del derecho consuetudinario desde 1949 tiende a abogar por la ampliación del sistema de infracciones graves a los conflictos internos y, por consiguiente, a reforzar la autonomía del Artículo 2 del Estatuto en relación con las Convenciones de Ginebra'); *Fiscal vs. Dario Kordic, Mario Cerkez*, Decisión sobre La Moción de Defensa Conjunta contra la Acusación Modificada por falta de jurisdicción, con base en el limitado alcance jurisdiccional de los Artículos 2 y 3, Caso No. IT-95-14/2-PT, párrafo 15 (2 de marzo de 1999); ver también la Resolución 1193 (1998), párrafo 12 (28 de agosto de 1998) del Consejo de Seguridad de NU (la cual confirma que 'todas las partes involucradas en el conflicto [en Afganistán] deben cumplir con sus obligaciones, de acuerdo con el derecho internacional humanitario y, particularmente, con las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y que las personas que ordenan o cometen las infracciones graves a las Convenciones son responsables individualmente de dichas infracciones'); *Apelación contra Auto Interlocutorio en el Caso Tadic*, *supra* No. 29. Salvamento de voto del juez Abi-Saab, en 5-6; T. Meron, 'Penalización Internacional de las

Atrocidades Internas', *supra* No. 29, en 569-70 (la cual sugiere que es necesario revisar el tema de la jurisdicción universal en los conflictos internos. Desde su punto de vista, el Artículo 1 de las Convenciones de Ginebra que obliga a los Estados a respetar y a garantizar el respeto podría convertirse en una base legal apropiada); T. Meron, 'Delitos bajo la Jurisdicción de la Corte Penal Internacional', en: *Reflexiones sobre la Corte Penal Internacional*, 47, en 48 (H.A.M. von Hebel et al., eds. T.M.C. Asser Press, La Haya, 1999), (en la cual se dice que los Artículos 6 a 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional 'se pueden convertir en el modelo para hacer cumplir las leyes nacionales bajo el principio de la universalidad de la jurisdicción'). Como de acuerdo con el Artículo común 3, las partes involucradas en un conflicto interno están obligadas a cumplir todas o parte de las demás disposiciones de la actual Convención a través de acuerdos especiales, parecería que si las partes se ponen de acuerdo en casos concretos para procesar y castigar a los responsables de dichas infracciones graves, dicho acuerdo se podría convertir en una base legal a nivel internacional para poder imputar la responsabilidad individual por dichas infracciones. *Apelación contra Auto Interlocutorio en el Caso Tadic*, *supra* No. 29, párrafos 89, 136; ver también *Apelación contra Auto Interlocutorio en el Caso Tadic*, *supra* No. 29, Salvamento de voto del juez Abi-Saab, en 6.

- 162 Resolución No. 1999/1, párrafo 2 (6 de abril de 1999) (en la cual se le recuerda a todas las facciones y fuerzas en Sierra Leona que en cualquier conflicto interno, incluyendo aquellos que no tienen un carácter internacional, la toma de rehenes, los asesinatos premeditados, la tortura y el tratamiento inhumano a las personas que no participan activamente en las hostilidades son graves infracciones al derecho internacional humanitario, y que todos los países tienen la obligación de investigar a las personas que presuntamente cometieron o dieron la orden de cometer estas graves infracciones y de demandar a dichas personas ante sus propias cortes, independientemente de su nacionalidad').
- 163 Fiscalía vs. Darko Knesivic, Corte Suprema de Holanda, 11 de noviembre de 1997, NJ 1998, 463. Traducción al inglés en 1YIHL 601-607 (1998). Ver en este caso, R. van Elst, 'De Zaak Darco Knesivic; Rechtsmacht over Joegoslavische en Andere Buitenlandse Oorlogsmisdadigers', 35 NJB 1587-1593 (1998). Sin embargo, el Estatuto de la Corte de Sierra Leona no incluye estas graves infracciones.
- 164 Colombia firmó el Estatuto el 10 de diciembre de 1998; pero hasta el momento no ha ratificado este instrumento. Las condiciones para que la Corte Penal Internacional pueda ejercer la jurisdicción son que el Estado en cuyo territorio se comete el delito sea parte del Estatuto o haya aceptado la jurisdicción de esta Corte, o que el Estado de nacionalidad del acusado sea parte del Estatuto o haya aceptado la jurisdicción de esta Corte, Artículo 12 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Se hace una excepción cuando el Consejo de Seguridad de NU, de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta de Constitución de NU, remite el caso a esta Corte. Entonces no se requiere el consentimiento del Estado en cuestión: la Corte tendrá jurisdicción sobre estos delitos incluso cuando los ciudadanos de los Estados que no son parte del Estatuto los cometen en Estados que tampoco son parte de dicho Estatuto y sin consentimiento del estado territorial o del estado de la nacionalidad del acusado, Artículo 13 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.









## 5. Los extranjeros: la presa más apetecida

### EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS EN EL CONFLICTO COLOMBIANO

Los noticieros colombianos frecuentemente informan sobre el incendio de carros y remolques y sobre la voladura de los oleoductos de las multinacionales extranjeras. Estas son las manifestaciones más palpables del fenómeno que tienen que enfrentar muchas compañías extranjeras: las prácticas de extorsión y secuestro de los grupos armados ilegales. Incluso antes de que una empresa extranjera comience a operar en una región determinada, alguno de estos grupos empieza a extorsionarla económicamente. Si dicha compañía se rehúsa a ceder a las exigencias de los extorsionistas, entonces secuestrarán al personal, o sabotearán el equipo o la infraestructura. Además, se ha comprobado que la seguridad estatal oficial, tal y como la ofrecen distintas organizaciones estatales, es insuficiente para proteger a los extranjeros y a los civiles colombianos.

*Muchos inversionistas extranjeros se ven forzados a ceder a las demandas extorsivas, por cuanto se sienten responsables del bienestar de sus empleados, del funcionamiento normal de sus empresas y de la protección de sus inversiones. Algunas veces se ven obligados a pagarle a todos los grupos armados ilegales de una región (ideológicamente opuestos) simultáneamente. Por otra parte, no se puede negar que estos pagos sustanciales por concepto de los rescates y de las extorsiones proporcionan a las partes enfrentadas la posibilidad de mejorar su capacidad militar y de aumentar aún más la violencia. Los primeros signos de este dilema aparecieron en la década de los 80.*

#### 5.1 **El secuestro de extranjeros: surge un nuevo fenómeno**

*En los años 80, los grupos guerrilleros comenzaron a pedir dinero a las empresas multinacionales para los proyectos de desarrollo social en la región donde éstas tenían sus sedes. Sin embargo, compañías como BP Amoco, Skanska y Mannesmann rápidamente se dieron cuenta de que estos proyectos no eran suficientes para frenar a la guerrilla.*

Las fuerzas insurgentes trataron de indulgarse todo el crédito, diciéndole a la población que estos proyectos se estaban llevando a cabo gracias a la pre-

sión que ellas ejercían sobre las compañías. Poco tiempo después, la guerrilla empezó a solicitar a estas empresas pagos en efectivo con el fin de mantener su maquinaria de guerra, tal y como se puede comprobar en la siguiente cita: “Al principio el ELN pedía para los proyectos sociales, por ejemplo, para un puente, la pavimentación de una carretera y, especialmente, para los centros de salud por cuanto la mayoría de la población moría de malaria, enfermedades contagiosas y picaduras de serpiente que no se atendían a tiempo. La compañía [Mannesmann] contribuyó con muchos de estos proyectos, pero después la guerrilla comenzó a amenazarla diciendo que si los proyectos no se llevaban a cabo, destruirían la maquinaria; luego, empezó a pedirle dinero en efectivo”.<sup>165</sup>

Los grupos guerrilleros y los delincuentes comunes rápidamente se dieron cuenta de que la extorsión a las compañías multinacionales y el secuestro de sus empleados, especialmente de los extranjeros, les brindaban oportunidades sin precedentes. En primer lugar porque los ciudadanos de muchos países son muy sensibles al secuestro de sus compatriotas en el exterior y, a menudo, organizan campañas para que la opinión pública le exija al gobierno y a la compañía una pronta solución. En segundo lugar, los grupos guerrilleros justifican el secuestro de los extranjeros más fácilmente, utilizando su nacionalismo anti-capitalista y anti-occidental como excusa. Sin embargo, la mayor ventaja del secuestro de extranjeros es económica. Todo el mundo sabe que las multinacionales en Colombia usualmente hacen inversiones a gran escala y que disponen de una gran cantidad de activos líquidos. La guerrilla confiaba en obtener grandes cantidades por los rescates y estaba segura de que estas compañías e instituciones pagarían rápidamente en una moneda fuerte como el dólar americano.

### **El primer caso de extorsión masiva: Mannesmann Anlagenbau AG**

Uno de los primeros casos de secuestro del cual se habló mucho fue el de un ingeniero alemán y dos empleados colombianos de la empresa multinacional alemana Mannesmann Anlagenbau AG en enero de 1984. A comienzos de los años 80, el gobierno colombiano comisionó a la compañía de construcción Mannesmann para que construyera 278 kilómetros del oleoducto necesario para llevar el petróleo desde los yacimientos en el noreste, a través de los Andes y hasta la costa Caribe.<sup>166</sup> La suma acordada para construir este complicado proyecto fue de 169 millones de dólares, bajo la condición de que estuviera listo en un año, un período de tiempo extremadamente corto teniendo en cuenta las circunstancias técnicas y el hecho político de que el ELN controlaba parte de esta región. De acuerdo con el antiguo director alemán del proyecto, Ecopetrol y Oxy (Compañía de Petróleo Occidental) les recomendaron ponerse de acuerdo con los insurgentes y lograr un buen *modus vivendi*. Sin embargo, en ese tiempo el ELN era un grupo armado relativamente pequeño e insignificante que había rechazado los acuerdos de paz con el presidente Betancur (a diferencia del M-19 y el EPL).

Con el fin de terminar la construcción dentro de los términos establecidos en el contrato, Mannesmann cedió a las exigencias de la extorsión y del secuestro del ELN. Este grupo solamente liberó a los tres rehenes después de cuatro meses (a mediados de febrero) cuando Mannesmann finalmente pagó el dinero solicitado y cumplió con las otras condiciones. La construcción del oleoducto se terminó en 1985, dentro de los términos estipulados en el contrato: un año.<sup>167</sup>

*De acuerdo con el director del proyecto de Mannesmann, la compañía pagó dos millones de dólares al ELN por la liberación de los rehenes.<sup>168</sup> Un miembro de alto rango del ELN (miembro de COCE) declaró que el ELN recibió en ese período la cantidad total de US \$20 millones (por la extorsión y el rescate) de la compañía alemana.<sup>169</sup> Esta cantidad coincide con las declaraciones del actual líder del ELN, 'el cura Manuel Pérez'.<sup>170</sup> El mismo cura Pérez confirmó más adelante que el subcontratista italiano del mismo proyecto también había pagado dos millones de dólares por la extorsión.<sup>171</sup>*

*El número de soldados del ELN se incrementó rápidamente y pasó de 3 frentes en 1983 a cerca de 11 frentes en 1986. El cura Pérez confirmó este hecho cuando dijo que el dinero pagado por Mannesmann por la extorsión y el rescate había permitido el crecimiento en 500% del ELN durante esos años.<sup>172</sup>*

## 5.2 **'Unas pocas víctimas', ganancias astronómicas**

Poco tiempo después del caso Mannesmann, el ELN secuestró a otros extranjeros, a menudo empleados de multinacionales extranjeras. En una entrevista concedida a la televisión nacional de Colombia en el 2000, el comandante del ELN dijo abiertamente que su organización obtenía realmente parte de sus ingresos y de sus recursos de la extorsión a las compañías multinacionales y del secuestro de los empleados de dichas compañías. En la misma entrevista confesó que el dinero del rescate y de la extorsión no siempre se queda en Colombia sino que el ELN financia parte de sus actividades con los recursos que tiene en los bancos en el exterior.<sup>173</sup>

Los principales autores del secuestro de los extranjeros son los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN. Los estimados van desde el 40% hasta cerca del 70%. De acuerdo con el DAS, la guerrilla es responsable del 60% de los extranjeros secuestrados durante el período de 1995 a 2000.<sup>174</sup> Los grupos paramilitares son responsables de un secuestro durante el mismo período.<sup>175</sup> La mafia de la droga y los delincuentes comunes son responsables del resto de secuestros de extranjeros.

## Pocas víctimas (comparadas con las colombianas)

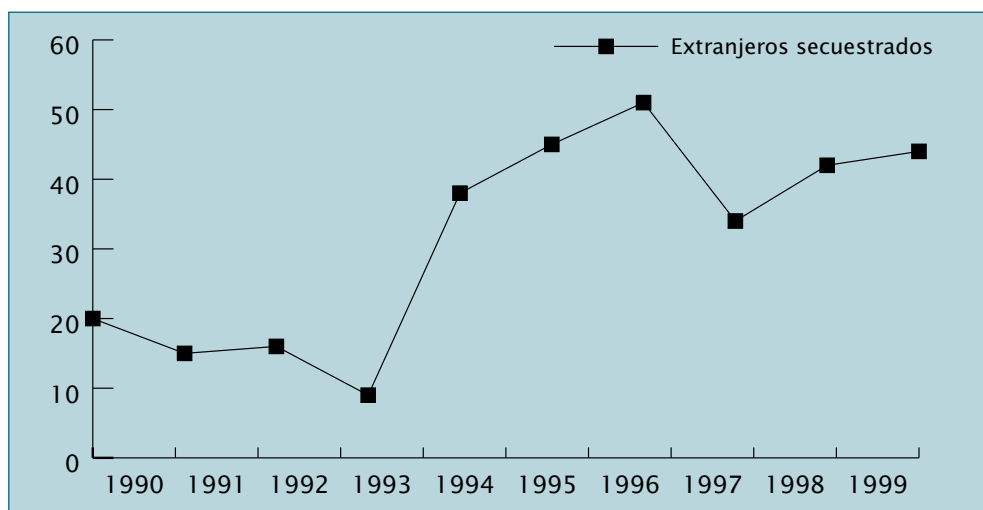
*Dependiendo del tipo de fuente que uno utilice, los estimados sobre el número de secuestros de extranjeros están entre 45 y 80 personas plagiadas anualmente.*

El DAS estimó que el número de secuestros de extranjeros fue de 408 durante el período entre 1995 y el 2000, es decir, un promedio de 81 casos por año. En otras palabras, cada cuatro días se secuestra un extranjero en Colombia.<sup>176</sup> El anterior Zar Anti-Secuestro dijo que 365 extranjeros habían sido secuestrados durante los años 1993-1998, lo cual indica un promedio de 65 secuestros por año.<sup>177</sup> De acuerdo con el ejército colombiano, 144 extranjeros fueron secuestrados entre 1996 y 1999, lo cual da un promedio de aproximadamente 48 casos por año.<sup>178</sup> Los estimados de la Fundación País Libre son un poco más bajos. De acuerdo con esta institución, en Colombia se secuestró un promedio anual de 45 extranjeros entre 1994 y 1998.<sup>179</sup>

La información de las estadísticas de la Fundación País Libre indica que más o menos el 50% de los extranjeros secuestrados son europeos.<sup>180</sup> Uno de los Zares Anti-Secuestro, después de su renuncia en 1998, analizó los años 1993-1998 y llegó a la conclusión de que el 30% de estos plagios correspondía a europeos (especialmente italianos, alemanes y españoles) y que el 52% de estas víctimas extranjeras provenían de América (de países como Venezuela con el 25% y los Estados Unidos con el 13%).<sup>181</sup>

A mediados de los años 90, la guerrilla intensificó la práctica de las ‘pescas milagrosas’ (vea capítulo 2) durante las cuales bloqueaban las carreteras con el fin de seleccionar los pasajeros más adinerados. Los grupos guerrilleros buscaban preferiblemente a los extranjeros y a los colombianos adinerados. Constantemente averiguaban el paradero de las compañías extranjeras, las rutinas y los inconvenientes inesperados de los empleados y, de acuerdo con la información recolectada, establecían los retenes. Desde mediados de los años 90, muchos extranjeros han caído en las redes de la guerrilla.<sup>182</sup> Sin embargo, este fenómeno no condujo al mismo crecimiento dramático del número de extranjeros secuestrados como sí al número de colombianos secuestrados.

*La siguiente gráfica muestra un pequeño incremento del número real de extranjeros secuestrados en la década de los 90. Las fuentes de información de esta gráfica son: Fundación País Libre (1990 – 1994 y 1996 – 2000) y el Ministerio de Justicia colombiano (1995). Sin embargo, este crecimiento es bastante relativo. Si lo comparamos con el número total de secuestros en Colombia, el porcentaje ha permanecido más o menos estable, es decir, 2-3%. La mayoría de las víctimas son colombianas, la mayor parte ganaderos, ejecutivos locales y gerentes locales de las multinacionales extranjeras.*



### Las medidas de seguridad mantienen las cifras bajas

El relativo bajo número de extranjeros secuestrados en Colombia se puede explicar en gran medida gracias a las estrictas medidas de seguridad establecidas por los inversionistas y las instituciones extranjeras. Estas instituciones usualmente prohíben a sus empleados transportarse por tierra. La movilización a las áreas rurales se hace por aire, a menudo utilizando helicópteros o avionetas privadas. Desde luego, esto no garantiza completamente que los empleados no sean secuestrados. Siempre surgen inconvenientes de último momento que obligan a un viaje por tierra, trabajos que realizar en lugares remotos y desprotegidos, o empleados demasiado confiados que no siguen los consejos de seguridad.

### Subcontratistas colombianos: ¿discriminación?

Los inversionistas extranjeros también tienden a contratar muy pocos extranjeros debido a los riesgos de seguridad. Sin embargo, esto no soluciona el problema completamente. Los secuestradores potenciales consideran que el personal local y los subcontratistas colombianos son empleados de una multinacional y, por lo tanto, se convierten en un objetivo obvio, aunque por ellos usualmente se paga menos. Pero las compañías extranjeras, quizás para cuidar su reputación, se sienten responsables del personal y de los subcontratistas locales.<sup>183</sup>

### Ganancias astronómicas

La escasa información sobre casos concretos, a menudo corrobora las suposiciones de la guerrilla de que las compañías extranjeras tienden a pagar mayores cantidades por el rescate y de que usualmente pagan más fácilmente. Después de todo, los inversionistas extranjeros disponen de una mayor cantidad de activos líquidos que las compañías colombianas y a menudo también contratan compañías de seguros. El proceso de negociación también es más

rápido por cuanto algunas empresas extranjeras tienen la costumbre de incluir los pagos por los rescates como ‘gastos imprevistos’ en el presupuesto anual.

Fuentes bien informadas<sup>184</sup> dicen, con base en su experiencia, que usualmente la guerrilla comienza pidiendo US \$10 millones de dólares por cada persona asociada con una compañía multinacional y termina aceptando aproximadamente el 10% de la cantidad inicial.

*Esto podría indicar una cantidad promedio por rescate de US \$ 1 millón por extranjero secuestrado. Sin embargo, este cálculo parece ser bastante moderado o desactualizado. En octubre de 2001 se denunció en el Congreso colombiano que en un solo mes (septiembre), dos extranjeros habían sido extorsionados por las sumas 9.5 millones de dólares y 7.5 millones de dólares respectivamente.*

### 5.3 **Un código de silencio guardado por todos**

#### **¿Por qué todo el mundo guarda silencio?**

Existe una barrera de silencio especialmente cuando el secuestrado es un extranjero. Cada grupo, persona o entidad involucrada en un caso de secuestro tiene sus propias razones para no dar información. **Las autoridades judiciales** se abstienen de dar información, por cuanto la reserva del sumario los obliga a guardar silencio. **Las autoridades militares** y los organismos de seguridad alegan razones de seguridad para no revelar más detalles sobre el secuestro o sobre cómo se está llevando a cabo la investigación.

**Las entidades extranjeras** que se ven involucradas en un caso de secuestro en Colombia están obligadas por la ley denunciar el delito a las autoridades colombianas. Lo usual actualmente es que los representantes diplomáticos y las empresas europeas afectadas a menudo solamente informan a las autoridades colombianas contra el secuestro. Casi nunca se conoce la cantidad que se paga por el rescate de las víctimas. Normalmente la Fiscalía General de la Nación informa que la víctima fue liberada por razones humanitarias o da una información distorsionada a los medios de comunicación sobre la cantidad exacta que se pagó, los cuales divulgan dicha suma que, desde luego, es inferior a la real.<sup>185</sup>

Usualmente, **las compañías extranjeras y los representantes diplomáticos** de la víctima también están interesados en guardar silencio sobre el caso. Una divulgación constante y amplia puede causar represalias por parte los secuestradores. Además, las compañías corren el riesgo de perder la licencia de operación en el país si violan la ley anti-secuestro. La situación es más complicada para las compañías privadas que son socias del Estado colombiano en cuanto a la participación de las utilidades.

Por ejemplo, todas las compañías (extranjeras) de petróleo privadas tienen contratos con la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, que es la compañía de petróleo estatal. Por consiguiente, todos los contratos entre las compañías privadas y el Estado Colombiano deben cumplir con la cláusula de la Ley 104 (1999) que invalida el contrato si las partes contratantes pagan por la extorsión o por el rescate a los grupos armados ilegales.<sup>186</sup> Este mecanismo se utiliza para sancionar a todas las compañías privadas que celebren contratos con las entidades del Estado colombiano.

**Los funcionarios colombianos de los mandos medios que trabajan con las compañías europeas** (en el sector minero, energético y químico), a quienes un investigador Colombiano entrevistó para este informe, dijeron que sabían que sus patronos pagaban cierta cantidad de dinero por la extorsión y/o rescate a alguno de los grupos armados ilegales. Habían participado directamente en las negociaciones o tenían información de primera mano. Todos ellos pidieron no divulgar sus nombres. La actual tasa de desempleo (20%) en Colombia es una buena razón para evitar involucrarse en el asunto. Además, todos quieren proteger su vida y la de sus familias.

Sin embargo, también podemos culpar a las **autoridades colombianas** por la falta de información sobre los secuestros de los extranjeros. Generalmente están en connivencia o tienen un acuerdo tácito con las compañías extranjeras para manejar el caso con un perfil bajo, con el fin de garantizar que dichas compañías puedan llevar a feliz término los proyectos que están ejecutando. Además, demasiada publicidad sobre los secuestros y la extorsión perjudica a las autoridades porque puede ahuyentar a los potenciales inversionistas extranjeros. Más aún, la corrupción desempeña un papel muy negativo.

Incluso los **representantes de la iglesia Católica y de las ONG**, reconocidos por su integridad y neutralidad, a quienes se les solicita ayuda en casos de secuestro, a menudo no conocen los detalles sobre la transferencia de dinero. Se les pide que reciban a la víctima o que corroboren la ‘acción humanitaria’ en el momento en que se realiza el pago por el rescate a través de vías desconocidas para ellos. Este tipo de manipulación de la iglesia y de las instituciones humanitarias se conoce en la jerga del secuestro como ‘el gancho ciego’.

## 5.4 **La implicación de los inversionistas extranjeros en Colombia**

### **La Unión Europea: el mayor inversionista extranjero en Colombia**

La Unión Europea se convirtió en el mayor inversionista extranjero en Colombia en el 2000 (por una suma de US \$ 528.6 millones), mientras que

las compañías estadounidenses invirtieron US \$ 158.2 millones en el país.<sup>187</sup> Las estadísticas de la acumulación histórica de la inversión directa extranjera durante el período entre 1995 y junio de 2000 muestran que **España** fue el mayor inversionista europeo durante dicho período (9.9%), seguido por **Holanda** (7.5%), **Alemania** (2.5%) y **Francia** (2.3%). Tanto España como Holanda fueron unos inversionistas bastante modestos en 1995.<sup>188</sup>

## La violencia en Colombia pone en peligro la inversión extranjera

*Sin embargo, el incremento de las inversiones españolas y holandesas en Colombia es una excepción a la regla. Es innegable que la mala situación de seguridad en Colombia ha causado un efecto dramático en el clima general para las inversiones en Colombia. En el 2000, la inversión europea en Colombia disminuyó en un 54% si se la compara con la del año anterior.<sup>189</sup>*

Si consideramos la gravedad de la situación de seguridad, podemos pensar que es un pequeño milagro que el país continúe siendo relativamente atractivo para los inversionistas extranjeros. La mayoría de ellos están muy preocupados por la seguridad, tal y como lo expresaron durante una reunión de 220 representantes de las multinacionales que operan en Colombia con el Presidente Pastrana el 4 de octubre de 2000.<sup>190</sup> Los empresarios dijeron que sufren por los ataques a la infraestructura, por la extorsión y el secuestro. El gerente general de la compañía multinacional Hewlett Packard dijo que consideraba muy difícil incrementar las inversiones bajo estas circunstancias. El presidente de Comcel dijo públicamente que la compañía había perdido tres millones de dólares ese año debido a los ataques a las torres de telecomunicaciones. Las visitas de los directores de las casas matrices se convirtieron en algo casi imposible.<sup>191</sup>

Además en años anteriores, los inversionistas potenciales se retiraron de las negociaciones comerciales más importantes por miedo a las amenazas, al sabotaje o al secuestro. Por ejemplo, en septiembre de 2000, la ciudad de Bogotá aspiraba a vender la compañía de teléfonos ETB por más de US \$ 700 millones a las compañías Telefónica y Telecom de España e Italia respectivamente. De acuerdo con el alcalde de Bogotá de ese entonces, el incremento de la violencia en el país en formas tales como el secuestro y los ataques a las torres eléctricas, hizo que los inversionistas potenciales se retiraran.[192]

## Efectos positivos y negativos de la inversión extranjera en Colombia

Las compañías multinacionales ubicadas en las zonas rurales pobres pueden causar un impacto positivo (económico y social) en el desarrollo de la región. Algunas veces, su presencia ofrece mayores oportunidades de trabajo para la mano de obra no calificada e incrementa los ingresos del gobierno departamental a través de las regalías. Infortunadamente, la presencia de los inversionistas extranjeros en las áreas rurales también implica automáticamente la



militarización de la zona y un aumento de la violencia. Como tienen que enfrentarse a la guerrilla o los grupos paramilitares, los inversionistas tienen a someterse a la extorsión, las amenazas y el pago de los rescates exigidos por estos grupos armados ilegales.

*Muchos estudios económicos y sociológicos<sup>193</sup> confirman que el crecimiento económico acelerado, producto de la inversión (extranjera), es un factor que contribuye al incremento de la violencia en una región.<sup>194</sup> Un análisis detallado de varios casos de inversión extranjera en las áreas rurales de Colombia muestra que existe una relación directa entre la presencia (temporal) de las multinacionales en la región y el incremento del número de combatientes y del número de ataques de los grupos armados ilegales y su correspondiente desarrollo militar.*

Con frecuencia, los grandes proyectos extranjeros terminan siendo un aguijón para el conflicto interno. El Cesar y la Guajira son ejemplos de esta situación porque allí se explotan (Drummond) las minas de carbón; otros ejemplos son Urrá (Córdoba), donde Skanska está construyendo una planta hidroeléctrica; el sur de Bolívar, donde está la reserva aurífera más grande de Latino América (Placer Domme); el este de Antioquia, donde el sector industrial está en auge (FL Smith); Arauca, Casanare, Norte de Santander y el Putumayo, donde se encuentran los yacimientos de petróleo y la infraestructura para transportar el crudo (explotación BP, Tipiel, Sicim, etc.).

Otro de los peligros relacionados con la inversión extranjera es el que se presenta cuando las compañías extranjeras empiezan a invertir en proyectos sociales con el fin de obtener la aprobación de la población local. Con frecuencia, los grupos armados ilegales y los políticos corruptos tratan de aprovecharse del capital político que estas compañías generan. El bando que maneja la zona le dice a la comunidad que el desarrollo de la misma es el resultado de su esfuerzo, con el propósito de incrementar la aceptación social. El impacto es aún mayor cuando la compañía extranjera acepta que este bando funcione como una ‘oficina de empleo’, es decir, como un intermediario no oficial entre dicha compañía y los desempleados en la región y que sea esta oficina la que decida quién trabajará en el proyecto y quién no.<sup>195</sup>

### **Ejemplo 1: La construcción de la carretera Bogotá – Villavicencio**

*Un ejemplo contundente de cómo los inversionistas extranjeros que operan en una zona rural pueden causar más violencia al ceder a las demandas extorsivas es el siguiente estudio de caso de la construcción de la carretera Bogotá-Villavicencio.<sup>196</sup>*

En 1994, la ampliación y reconstrucción de la carretera Santafé de Bogotá-Villavicencio se adjudicó a tres compañías diferentes, de acuerdo con una licitación pública: el primer tramo de la carretera, Santafé de Bogotá-Cáqueza, a la compañía española Dragados, el segundo tramo, Cáqueza-Pipiral, 33 kilómetros a la compañía brasileña Andrade Gutiérrez y el último tramo, Pipiral-Villavicencio, a la compañía italiana Grandi Latori. Todo el mundo en Colombia sabe que las zonas por las cuales pasa esta carretera están bajo el control de las FARC (frentes 53, 52 y 51).

La compañía Andrade Gutiérrez fue la primera que comenzó a trabajar en la ampliación y la reconstrucción de la carretera en la zona. Poco tiempo después de haber iniciado la construcción, el comandante del frente 53 de la guerrilla notificó a la compañía que debía pagar una vacuna, si quería continuar con el trabajo. La administración de Andrade Gutiérrez se negó a hacerlo. Con el fin de presionar aún más a esta firma, el frente 53 secuestró a dos ingenieros brasileños que trabajaban en el proyecto el 14 de agosto de 1996. Las FARC exigieron una suma de US \$ 8 millones por el rescate. Después de ocho meses de negociaciones, durante los cuales la tensión política entre Brasil y Colombia aumentó, se acordó pagar US \$ 1.8 millones por el rescate.

El rescate se pagó en efectivo, utilizando billetes viejos de US \$ 100. El dinero se trajo del exterior y lo recogieron en el aeropuerto de Villavicencio, sin ningún registro de la transferencia. Peor aún, no se informó a las autoridades colombianas sobre el transporte. No dejaron rastros de la transacción. Sorprendentemente y a pesar de que la compañía pagó la suma acordada, la guerrilla no liberó a los ingenieros. Dos días después, el negociador del frente 53 de las FARC exigió una cantidad adicional de US \$ 100.000.<sup>197</sup> Dos semanas después, el 7 de marzo de 1997, la firma pagó la cantidad adicional por el rescate de los dos ingenieros.<sup>198</sup> Después de la liberación de los dos ingenieros, los negociadores de las víctimas informaron al *Alto Secretario* de las FARC sobre la cantidad adicional que habían pagado por el rescate. En represalia, el frente 53 voló la infraestructura de asfalto y las plantas de trituración de Andrade Gutiérrez, así como las instalaciones para guardar los vehículos cerca de Guayabetal.<sup>199</sup> Las pérdidas se estimaron en US \$10 millones, obligando a la compañía a suspender definitivamente el trabajo y a renunciar al contrato.

Durante la construcción del tercer tramo, la compañía italiana Grandi Latori tuvo que enfrentar el secuestro de un ingeniero francés en octubre de 1996. Lo liberaron el 26 de octubre. El ejército colombiano informó públicamente que la familia de la víctima había pagado el rescate, sin especificar la cantidad entregada. Grandi Latori se negó a dar declaraciones sobre el tema, diciendo que el ingeniero no estaba en la nómina de la compañía porque era empleado de un subcontratista.<sup>200</sup> Sin embargo, las dos compañías europeas, Dragados y Grandi Latori, continúan trabajando en la carretera. Hasta el

momento, no se ha informado sobre nuevas hostilidades de la guerrilla. Dragados logró entregar el túnel del segundo tramo a tiempo, de acuerdo con los términos y las condiciones del contrato.

Estos hechos producen escepticismo entre los observadores públicos bien informados por cuanto los mismos frentes de las FARC continúan controlando la región y su posición política y militar se ha fortalecido aún más con la zona de despeje, la cual está a pocos kilómetros de la zona donde las compañías europeas trabajan. Es perfectamente posible que estas empresas, con base en un acuerdo tácito con las autoridades, hayan cedido a las exigencias de la extorsión y que de nuevo hayan construido la barrera del silencio.

## **Ejemplo 2: Occidental y los indígenas U'wa**

Otro ejemplo cínico de cómo los inversionistas extranjeros que operan en las áreas rurales contribuyen a generar (más) violencia al ceder a las exigencias de la extorsión es el caso trágico de la compañía de petróleo Occidental en el territorio de los U'wa. Como algunos frentes de las FARC veían con preocupación el desarrollo del negocio de las drogas, incrementaron la extorsión a las compañías multinacionales. Algunas personas con información confidencial dicen que Occidental (Oxy) llegó a un acuerdo con las FARC (frente 'Samoré') gracias al cual la compañía podía comenzar la exploración de petróleo en una región entre Arauca y Boyacá. Las comunidades indígenas U'wa, a quienes pertenece este territorio, se opusieron a la posible explotación en su territorio sagrado. El ELN apoyó la resistencia de las comunidades U'wa, alegando que ellos controlaban el área.

*Con el fin de proteger 'su negocio petrolero', las FARC mataron en el 2000 a los enviados del ELN que fueron a hablar sobre el hecho de que las FARC estaban operando en su área de influencia. Hubo muchas protestas a nivel internacional cuando las FARC tuvieron la osadía de matar a unos activistas ambientales estadounidenses que defendían a los U'wa.<sup>201</sup>*

## **5.5 El sector energético y de la ingeniería**

### **¿Defensa legal contra actores ilegales?**

Las compañías extranjeras en los sectores petrolero, minero y de la construcción de vías en las áreas rurales (usualmente fuera del control de las fuerzas de seguridad nacional) son especialmente propensas al sabotaje, la extorsión y el secuestro. En 1999, atacaron el oleoducto para el crudo de exportación de Caño Limón-Coveñas no menos de 79 veces.<sup>202</sup>

## De la negociación a las medidas de seguridad

*La política común de las compañías petroleras para contrarrestar los intentos de secuestro y sabotaje en los años setenta/ochenta era negociar con los grupos guerrilleros. Sin embargo, después adicionaron a esta política el fortalecimiento de sus sistemas internos de seguridad con la colaboración de los grupos colombianos de seguridad privada y estatal. Pero como aún estos esfuerzos no fueron suficientes, buscaron la protección de organizaciones privadas de seguridad.*

A finales de los años ochenta, sus medidas de seguridad alcanzaron un nivel aceptable y las negociaciones pasaron a un segundo plano. Las compañías petroleras y mineras se concentraron en las medidas de defensa y seguridad e incluyeron en su presupuesto anual una cantidad fija para gastos de seguridad, así como para los costos de reparación relacionados con los actos de sabotaje y los pagos por los rescates. Un portavoz de Ecopetrol dijo que la compañía asigna diariamente US \$ 600.000 dólares para este tipo de costos y estimó que las compañías extranjeras gastan más o menos la misma cantidad de dinero en seguridad.<sup>203</sup>

## Protección extra a través del impuesto de guerra

*El Estado colombiano le exigió a muchas compañías petroleras y mineras el pago del llamado 'impuesto de guerra'. Este impuesto les garantizaba que tanto sus instalaciones como su personal recibirían una protección especial de las fuerzas de seguridad nacional de Colombia.<sup>204</sup> El número total de miembros de las fuerzas públicas dedicado a proteger los campos petroleros en Colombia, aumentó enormemente en los años 90. Se dice que en 1996 se habían asignado 10.000 soldados colombianos, de un ejército de 120.000 hombres, solamente a esta tarea.<sup>205</sup>*

El acuerdo del impuesto de guerra entre las compañías extranjeras y el Estado colombiano produjo una gran controversia. El mayor inversionista en Colombia, BP Amoco, que opera parte de la infraestructura de la explotación del petróleo de Colombia le pidió al ejército protección contra las amenazas y los ataques de la guerrilla y llegó a un acuerdo con Ecopetrol (como el socio estatal de BP Amoco) y el Ministerio de Defensa. Los grupos de derechos humanos alegaron que BP no había estipulado que los regimientos del ejército debían abstenerse de abusar de los derechos humanos. De acuerdo con ellos, los miembros del movimiento de protesta civil se convirtieron en objetivos de la violencia del ejército y acusaron al personal de seguridad de BP de entregar al ejército fotografías de las reuniones de protesta comunitaria (por el daño ambiental causado por la compañía de petróleo).<sup>206</sup> Human Rights Watch y otras ONG llegaron a acusar a la Oficina de BP en Colombia de haber sido cómplice de asesinatos, torturas e intimidaciones, por haber contratado las fuerzas de seguridad del Estado.<sup>207</sup>

Estas y otras críticas causaron el efecto esperado. La compañía empezó a comunicarse más abierta y activamente con las personas y las instituciones internacionales en la región sobre temas relacionados con la seguridad, el medio ambiente y la política social.<sup>208</sup> BP Amoco, Ecopetrol y el Ministerio de Defensa redactaron un nuevo acuerdo, después de haber consultado a las ONG de derechos humanos. Este acuerdo incluye disposiciones con respecto a los derechos humanos y a una auditoría.<sup>209</sup> Además, BP fue una de las siete compañías petroleras y mineras de los Estados Unidos y el Reino Unido que firmaron un código de conducta voluntario en el 2000, en el cual se establece que las medidas de seguridad cumplirán con los estándares mínimos de los derechos humanos.<sup>210</sup>

### **Protección extra a través de las compañías de seguridad privada**

Las compañías vulnerables decidieron fortalecer la protección estatal con servicios de seguridad privada. Sin embargo, el rol de las compañías de seguridad privada provocó una gran controversia. El hecho de que un consorcio petrolero (entre la compañía estatal Ecopetrol y las compañías extranjeras BP, Total y Triton Corporation<sup>211</sup>) contratara la compañía de seguridad privada Sistemas de Defensa de Colombia (SDC<sup>212</sup>), causó una gran conmoción y preocupación. De acuerdo con una de las fuentes, el propósito del primer contrato que terminó en 1992 era “entrenar y crear una fuerte unidad de 540 hombres de la Policía Nacional de Colombia (que firmó en 1996 un acuerdo de tres años con BP por valor de US \$ 2 millones) para proteger las plataformas petroleras.” SDC, junto con la división de seguridad de BP, entrenó a esta unidad en “tácticas de defensa”, tales como seguridad, primeros auxilios y enlace con las fuerzas públicas.<sup>213</sup>

Sin embargo, BP sostiene que SDC no ‘entrenó’ a la unidad de la policía y que contrató a esta compañía para que le brindara asesoría en cuanto a seguridad: “El propósito de SDC era detectar las áreas en las cuales era necesario que la institución (la Policía Nacional) les diera un mejor entrenamiento a los miembros de la policía asignados para la protección de la infraestructura petrolera. De hecho, esta institución fue la que entrenó a los hombres y mujeres asignados para proteger las instalaciones petroleras... Dar entrenamiento militar es ilegal en Colombia para los ciudadanos colombianos que no pertenecen a las fuerzas armadas o para los extranjeros que actúan sin que medie un contrato de asistencia pública entre los gobiernos. El Fiscal de Derechos Humanos de Colombia investigó esta y otras acusaciones en contra de SDC, por solicitud de BP, y llegó a la conclusión de que estas acusaciones eran falsas”.<sup>214</sup> Sin embargo, la prensa ha hecho nuevas denuncias en contra de BP, acusándola de cooperar con los grupos paramilitares.

*La naturaleza misma del conflicto colombiano crea el dilema al cual se ven enfrentadas las compañías extranjeras: ¿cómo cumplir la ley y protegerse de manera legal en contra de una fuerza ilegal activa y armada?*

## 5.6 *¿Hacia un código de conducta para los inversionistas europeos?*

### *La extrema reserva de los inversionistas europeos*

#### **El cuestionario para los inversionistas europeos en Colombia.**

El Instituto de Investigación Belga, IPIS, debidamente autorizado por Pax Christi de Holanda, hizo una encuesta sobre las experiencias de los inversionistas europeos en Colombia con respecto a la extorsión, el secuestro y la seguridad general. Con base en la lista oficial del instituto estatal colombiano, COINVERTIR, el instituto belga envió un cuestionario a cerca de 200 inversionistas europeos registrados en Colombia en el año 2000.<sup>215</sup> A todas las compañías se les garantizó que estos cuestionarios eran estrictamente confidenciales. Podían saltarse preguntas o llenar el cuestionario anónimamente. El instituto contactó directamente, por e-mail o por teléfono, a las compañías que no respondieron, con el fin de verificar que el cuestionario había llegado al lugar apropiado.

*De 200 inversionistas europeos en Colombia, 43 compañías respondieron a nuestros intentos de establecer contacto. Al final, sólo 14 compañías, es decir, el 7% del número total de estos inversionistas en Colombia en el 2000, aceptaron relatar sus experiencias a través del cuestionario o por otros medios.*

Cinco compañías declararon abiertamente que en años anteriores habían sido objeto de amenazas, extorsión y/o secuestros. La mayoría de las 14 empresas dijo que no había tenido problemas de seguridad hasta ahora, o no respondió la pregunta 'por razones de seguridad'. Sin embargo, aproximadamente la mitad de estas empresas confirmó que tomaba medidas especiales de seguridad, tales como acuerdos de seguridad privada, seguros contra secuestro y apoyo extra de las fuerzas locales encargadas de la seguridad pública.

Un grupo pequeño de los inversionistas europeos en Colombia no está de acuerdo con un debate público sobre un código de conducta para los inversionistas europeos en Colombia con respecto al secuestro y la extorsión. Una de las compañías dijo: "consideramos que las compañías pueden manejar y resolver estos problemas individualmente y, por lo tanto, el código de conducta no sirve de mucho". Sin embargo, la mayoría de ellas (9) ve con buenos ojos el establecimiento de un código de conducta. Una de ellas dijo: "es importante que las compañías privadas vulnerables con intereses en Colombia no dirijan este debate. Las instituciones apropiadas para hacerlo son las ONG que defienden el bien común de la comunidad internacional".

#### **Los inversionistas europeos y la política de no pago**

Tal y como se mencionó en el capítulo 3, los movimientos civiles en Colombia defienden la idea de que los inversionistas extranjeros deben

adoptar una política común de no pago, por cuanto consideran que el pago por el rescate y la extorsión incentiva aún más el secuestro y la violencia.

La British Petroleum (BP), que opera parte de la infraestructura para la explotación del petróleo en Colombia, es un ejemplo de una multinacional europea con una política explícita de no negociar ni ceder a las exigencias de la extorsión.<sup>216</sup> Esta política corporativa no es solamente una posición teórica. La decisión de BP de no ceder a las campañas de extorsión de la guerrilla en Casanare ha causado varias ‘reprimendas’. Efectivamente, la compañía y sus subcontratistas locales han tenido que soportar las exigencias de los extorsionistas, quienes han secuestrado al personal cerca de las oficinas del complejo de BP en Casanare.<sup>217</sup> “Los insurgentes han colocado varios artefactos explosivos en los pozos (...) y han amenazado a muchos empleados. Desde 1988, han asesinado a 15 miembros del ejército y de la policía asignados a la protección de la infraestructura petrolera que manejamos. Los asesinaron mientras cumplían con su deber de proteger estas instalaciones. Además, han herido a más de 20 de ellos”.<sup>218</sup>

El propósito de la política explícita de BP de cumplir estrictamente con las políticas del gobierno colombiano es enviar una señal clara a los delincuentes comunes y a los guerrilleros activos en la región del Casanare de que la compañía no cederá tan fácilmente a sus exigencias. Sin embargo, esto es más que un compromiso valiente y voluntario. Esto se puede explicar en parte por el hecho de que BP puede perder el contrato con la compañía estatal Ecopetrol si el Estado descubre que paga a los grupos armados ilegales, lo cual se hacía normalmente hasta hace muy poco tiempo, de acuerdo con un antiguo gerente de Mannesmann. También se dice que a pesar de esta política corporativa de no pago, las compañías reembolsan el dinero por el pago del rescate a las familias de los empleados secuestrados.

### **¿Hacia un código de conducta para los inversionistas europeos?**

Los inversionistas extranjeros tienen un interés común: la promoción de un clima saludable para sus inversiones. Esto implica acabar la violencia, el secuestro y la extorsión.

*Un posible código de conducta para los inversionistas europeos en Colombia con respecto al secuestro y la extorsión incluiría parámetros, estándares y procedimientos aceptados por todos los grupos involucrados. Las partes involucradas en el establecimiento de dicho código de conducta (las compañías europeas, las autoridades, las ONG y los representantes de la sociedad civil colombiana) tendrán que enfrentar los siguientes problemas, dilemas y desafíos.*

#### **▪ El dilema de invertir en países en conflicto**

La inversión en países que pasan por un conflicto armado interno plantea dilemas muy complicados para garantizarles a los empleados su seguri-

dad. Se puede observar una tendencia generalizada entre las multinacionales a confiar en los servicios de empresas de seguridad privada o en grupos armados ilegales. En este último caso se crean serios problemas en cuanto a los derechos humanos.

- **¿Pagar o no pagar?**

Los inversionistas extranjeros se sienten responsables del bienestar de sus empleados y de sus familias y por esto tienden a ceder a la extorsión. Al mismo tiempo, deben ser conscientes de las consecuencias devastadoras del pago por el rescate, el cual nutre la guerra.

- **Las pólizas de seguro antisequestro (capítulo 6)**

¿Existe alguna correlación entre los seguros antisequestro y el incremento tanto de la industria del secuestro como del valor de los pagos de la extorsión?

¿Se les debe permitir a los extranjeros la exención del cumplimiento de la ley colombiana respecto a la prohibición de los seguros antisequestro?

¿El hecho de que los extranjeros estén en una posición económica aaventajada para obtener seguros contra el secuestro, discrimina a los colombianos quienes no poseen el potencial económico para contratar dichos servicios?

- **Alentando la participación**

Un código de conducta es un acuerdo voluntario. Pero si todos los inversores no se adhieren al mismo, los que perpetran estos actos criminales estarán en disposición de enfrentar a los países y a las compañías entre sí, como ocurre en la actualidad.

- **Supervisando el posible código de conducta.**

Pocas compañías apoyan un control externo de este código de conducta. Las ONG nacionales están en una posición vulnerable para esta tarea, es más, frecuentemente su punto de vista es parcial. Sin un control efectivo externo, un código de conducta puede resultar fácilmente un instrumento de propaganda corporativa. ¿Podría ser el control internacional una alternativa?

---

165 Cita de Gómez I., *La última misión de Werner Mauss*. (Santafé de Bogotá, 1998) 115.

166 A principios de los años 80, se descubrieron grandes yacimientos petroleros en Arauca al noreste de Colombia, que es una región controlada por el ELN. La compañía estadounidense de petróleo, Occidental, que está en Colombia desde comienzos de la década de los ochenta, obtuvo la concesión para la explotación de los yacimientos que se estimaba producirían 200.000 barriles al día, de acuerdo con el Sr. Zipfel, a quien mencionamos anteriormente.

167 A finales de 1989, Oxy vendió el oleoducto y la licencia a Shell por dos billones de dólares. Luego, esta compañía estadounidense se fue de Colombia y una nueva compañía europea empezó a operar en la zona: British Petroleum.

168 Carta del Sr. Georg Zipfel, ex-empleado de Mannesmann Anlagenbau AG, al Obispo alemán, Dr. Karl Lehman, con fecha del 20 de marzo de 1999. En dicha carta el Sr. Zipfel da testimonio de sus experiencias con Mannesmann durante el período en que ocurrieron los secuestros.



- 169 Valencia, L., *Secuestro, Extorsión y Guerra en Colombia*, facsímil (Bogotá, 2000) 4. La discrepancia entre los testimonios del Sr. Zipfel por un lado y del ex-miembro del ELN y del cura Manuel Pérez por el otro lado, probablemente se debe al hecho de que el Sr. Zipfel se fue de Mannesmann en 1984, antes de que la terrible experiencia del secuestro terminara.
- 170 Medina, C., ELN: *Una Historia Contada a dos Voces* (Santafé de Bogotá, 1996) 150.
- 171 La 'mano derecha' del cura Pérez, comandante del ELN, le dijo a Pax Christi que durante los años 80 el ELN había negociado con Oxy el pago de 70 millones por extorsión, es decir, por un 'acuerdo de no agresión' en el cual (por sugerencia de Oxy) el líder cubano Fidel Castro debería servir como garante. Sin embargo, debido al cambio gradual de la política del gobierno colombiano y de las multinacionales, la política de cooperación tácita con la guerrilla se convirtió en una política de búsqueda de la seguridad y lucha contra la guerrilla y, por lo tanto, la negociación finalmente no se pudo llevar a cabo. Castro nunca creyó que el ELN no hubiera recibido dicha cantidad de dinero.
- 172 Medina, C., ELN: *Una Historia Contada a Dos Voces*, 150.
- 173 "ELN tiene recursos en el exterior", en: *El Espectador*, 29 de octubre de 2000.
- 174 DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) *Temática Cuestionario Pax Christi* (Bogotá, 2000).
- 175 DAS, *Temática Cuestionario Pax Christi* (Bogotá, 2000) 10.
- 176 *Ibíd.*
- 177 El antiguo Zar Anti-Secuestro al cual nos referimos es el Sr. Dario Ramírez. Gómez Maseri, S., "Secuestro en Colombia Golpea al Mundo", en: *El Tiempo*, 29 de marzo de 1999.
- 178 Artículo en el periódico *El Espectador*, 10 de junio de 1999, página 6A.
- 179 Valencia, M., *Secuestro, Extorsión y Guerra en Colombia*, facsímil para Pax Christi, Holanda.
- 180 Fundación País Libre, *Secuestro de Extranjeros en Colombia durante los años 1996, 1997, 1998, 1999* (Boletín de Prensa). "Extranjeros secuestrados por las FARC". En: *El Espectador*, 1 de enero de 2000.
- 181 Gómez Maseri, S., "Secuestro en Colombia Golpea al Mundo", en: *El Tiempo*, 29 de marzo de 1999. Sus fuentes son el anterior Zar Anti-Secuestro Rubén Dario Ramírez y la Fundación País Libre.
- 182 Esto explica el comentario de Demetrio Piras, un oficial de la policía italiana, que dijo que 29 italianos habían sido secuestrados en Colombia entre 1994 y 1999, mientras que durante el mismo período solamente 5 personas habían sido secuestradas en Italia. "En Colombia secuestran más italianos que en Italia", en: *El Tiempo*, 10 de septiembre de 1999.
- 183 Esta información se obtuvo en la entrevista al Sr. E. Westropp, el 11 de noviembre de 2000.
- 184 Información dada por una persona (que participa activamente en un proyecto humanitario) y quien además participa como mediadora de ocho secuestros de extranjeros y por otras personas que sirven como mediadoras esporádicas en casos de secuestro.
- 185 Existen otras razones por las cuales es difícil averiguar las cantidades que las compañías y las organizaciones extranjeras pagan por los rescates. Los pagos se hacen en efectivo o a través de operaciones aparentemente legales en el exterior e, infortunadamente, las autoridades colombianas no tienen la competencia debida para investigar dichas transacciones. Algunas veces el dinero en efectivo se envía del extranjero en un avión alquilado para dicho propósito. Después lo llevan en helicóptero a los negociadores quienes se lo entregarán al grupo guerrillero en un sitio acordado previamente.
- 186 De acuerdo con el Artículo 45 de la Ley 104 de 1993 (modificada por la Ley 241 de 1995).
- 187 La inversión directa de Europa en Colombia, excluyendo el portfolio de inversiones y las inversiones petroleras. Comisión Europea en Colombia, *Evolución de las Relaciones Comerciales Colombia-Unión Europea*, (Santafé de Bogotá, 2001) 19.
- 188 Los porcentajes de las inversiones de España y Holanda fueron 1.3% y 2.6% en 1995. Comisión Europea en Colombia, *Evolución de las Relaciones Comerciales*, 20.
- 189 "Cumbre/ Pastrana solicita confianza en el País", en: *El Tiempo*, 5 de octubre de 2000. Comisión Europea en Colombia, *Evolución de las relaciones comerciales*, 19.
- 190 Oficina de Prensa "De avances en proceso de paz depende mayor inversión: multinacionales", 5 de octubre de 2000. (Por intermedio de la Embajada de Colombia).
- 191 *El Tiempo*, "Cumbre/Pastrana solicita confianza en el país", 5 de octubre de 2000.
- 192 "Colombia Considers Fund for Rebels", en: *The Associate Press*, 21 de septiembre de 2000.
- 193 Con respecto a este tema, ver: Bejarano, J., *Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales* (Santafé de Bogotá, 1997). Deas, M., y Gaitán, F., *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia* (Santafé de Bogotá, 1995). Rubio, M., *Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia* (Santafé de Bogotá, 1999).
- 194 Bejarano, J., *Colombia* 22.

- 195 Por ejemplo, el ELN se convirtió en un intermediario entre Mannesmann y las comunidades locales de la región en la década de los ochenta y obligó a Mannesman a aceptar sus 'indicaciones' con respecto al reclutamiento de personal y a la ayuda para el desarrollo comunitario. Como los miembros de las comunidades locales dependían en gran medida de las nuevas actividades económicas en la región y de la ayuda para el desarrollo, también aceptaron el rol del ELN como intermediario, e incluso estaban preparados para seguir algunas de sus instrucciones más precisas. Peñate, A., "El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado", en: *Reconocer la guerra para hacer la paz*, (Bogotá, 1999) 53-98.
- 196 Resumen de: Meluk, E., *El secuestro en Colombia y las multinacionales europeas*, facsímil para Pax Christi Holanda (Santafé de Bogotá, 2000).
- 197 Este tipo de incumplimiento se conoce en Colombia como *hacer conejo*.
- 198 En ese momento, solamente un diario de Sao Paulo confirmó el segundo pago. "El viacrucis de dos brasileños secuestrados", en: *El Tiempo*, 16 de marzo de 1997, 9.
- 199 "*Espanto en la vía al Llano*", *El Tiempo*, 14 de abril de 1997, 9A.
- 200 Ejército Nacional de Colombia, *Epitafio de los Inocentes*. Oficina de Derechos Humanos. Quinta División (Santafé de Bogotá, 1998).
- 201 Valencia, L., *Secuestro, Extorsión y Guerra en Colombia*.
- 202 Reuters, 1999 was record year for Colombia petro-guerrillas. Comunicado de prensa del 4 de enero de 2000.
- 203 Valencia, L., *Secuestro, Extorsión y Guerra en Colombia*, facsímil, 6.
- 204 Este impuesto ya no existe.
- 205 Declaración del Dr. Merlano, Vice-presidente de Desarrollo Social de Ecopetrol (la compañía de Petróleo de Colombia) en 1996. Valencia, L. *Secuestro, extorsión y guerra en Colombia*, 6.
- 206 McDonald, G., *Exploring Natural Resources as a Fuel for Conflict*, Documento Interno de SCIAF, borrador de 11 de junio de 2001, 13.
- 207 Atkinson, M., "BP pressed to vet army protectors" en: *The Guardian*, 21 de abril de 1998.
- 208 Tal y como lo comprobaron Aidan, Davy et al., *BPXCs; Operations in Casanare, Colombia: Factoring social concerns into development decision-making*. Documento sobre Desarrollo Social No. 31, El Banco Mundial, julio de 1999.
- 209 Frankental, Peter & House, Frances, *Human Rights: Is it any of your business?* Londres: Amnistía Internacional/The Prince of Wales Business Leaders Forum (2000) 114.
- 210 Este código de conducta voluntario es el resultado del diálogo entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el FCO Británico, las ONG de Derechos Humanos y los sindicatos. Las siete compañías son: Chevron, Texaco, Conoco, BP, Shell, Río Tinto y Freeport MacMoran. McDonald, G., *Exploring natural resources as a fuel for conflict*, 16
- 211 Este consorcio desarrolla y explota los yacimientos de Santiago de las Atalayas y transporta el crudo a través del sistema de oleoductos Ocesa.
- 212 Subsidiaria colombiana de DSL (ver capítulo 6).
- 213 Goulet, Y., "DSL: al servicio de los estados y las multinacionales" En: *Jane's Intelligence Review*, junio de 2000, 47.
- 214 Comunicación por e-mail de la sede de BP en Londres, 28 de septiembre de 2000.
- 215 COINVERTIR, *Compañías Extranjeras en Colombia*. El número total de inversionistas extranjeros en la lista de COINVERTIR era de 417.
- 216 Información suministrada por el personal de BP en su sede en Londres.
- 217 Peñate, Andrés, *Arauca: Politics and Oil in a Colombian Province*. (Oxford, 1993).
- 218 Información suministrada por BP a través del correo electrónico el 1 de junio de 2000.





## 6. ¿El riesgo bajo control?

### DEBATE SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA SEGURIDAD PRIVADA COMO SOLUCIÓN CONTRA EL SECUESTRO<sup>219</sup>

Colombia tiene numerosas y diversas instituciones estatales responsables de la seguridad de los individuos y las organizaciones. Desafortunadamente, dichas instituciones son insuficientes para garantizar la seguridad de los ciudadanos colombianos o de las compañías establecidas en el país. Esta es una consecuencia de la ausencia de estructuras de seguridad del Estado en las zonas rurales y de la insuficiente dotación de las instituciones existentes para responder a la gravedad del problema de inseguridad. Además, la eficacia de estas instituciones está socavada por la corrupción.

Por lo tanto, no sorprende que muchos en Colombia – en especial las empresas extranjeras – acudan a los servicios de seguridad privada como una forma de complementar la seguridad que les garantiza el Estado. Se estima que el mercado de la seguridad privada en América Latina se ha incrementado en un 12% anual desde mediados de los noventa, lo cual la convierte en la segunda región con mayor crecimiento del mundo después de Europa Oriental.<sup>220</sup> Las empresas que conforman este mercado son de diversa magnitud, desde las muy pequeñas (por ejemplo, las compañías locales que vigilan edificios o escoltan individuos) hasta enormes grupos multinacionales.<sup>221</sup> La mayor parte del servicio lo prestan empresas que pertenecen a un conglomerado más amplio, al cual también pertenecen empresas fabricantes de armas o con vínculos con empresas aseguradoras que ofrecen paquetes especiales para minimizar el riesgo personal o económico.

Son muchos los proveedores que atienden este mercado de los servicios corporativos de seguridad en Colombia. Los que ofrecen servicios de defensa ofrecen protección a particulares, empleados, instalaciones y bienes a través de la vigilancia, disuasión y protección. Sin embargo, este tipo de servicio está fuera del alcance de este estudio; son los siguientes tres servicios de seguridad privada los que están relacionados con el secuestro y la extorsión:

- a) Asesoría sobre el riesgo, incluidas todas las formas posibles de servicios de consultoría;
- b) Seguros antisequestro y rescate, incluidos todos los paquetes de secuestro y rescate;
- c) Servicios ‘curativos’, tales como el manejo de crisis y los servicios de respuesta contra el secuestro, que se prestan apenas sucede la crisis.

*Las aseguradoras y las empresas de seguridad privada hacen especial énfasis en los efectos positivos de sus servicios. Sin embargo, la pregunta fundamental es: ¿contribuirá el rápido crecimiento del mercado de seguridad privada al mejoramiento de la seguridad en Colombia a largo plazo? O, por el contrario, ¿contribuyen estos servicios al incremento del secuestro y la extorsión, dado que los potenciales secuestradores y terroristas saben que tienen asegurado el pago del rescate sin mayor dificultad? Estos son interrogantes que deberían ser motivo de discusión entre los ejecutivos de las empresas, la ciudadanía, las empresas de seguridad privada, las aseguradoras y los políticos.*

## **6.1 Asesoría sobre el riesgo**

Se entiende por asesoría sobre el riesgo todos los servicios de consultoría que previenen el secuestro y la extorsión. Una forma conocida de asesoría sobre el riesgo es el ‘servicio de información’ sobre el desarrollo actual de los temas de seguridad en el país. Kroll Inc., por ejemplo, publica Informes de asesoría sobre el riesgo en el país<sup>222</sup> que son adquiridos por los gobiernos y las empresas (multinacionales), con el fin de minimizar los riesgos de su personal y de sus instalaciones. El grupo Ackerman brinda información relevante, desarrollos actuales y estudios detallados de casos anteriores a través de su Red de Servicio sobre el Riesgo. El costo de la suscripción es de alrededor de US \$ 8.500 anuales (valor vigente para el 2000).

Otras formas de servicios de asesoría sobre el riesgo que ofrecen las empresas de seguridad privada son: asesoría personalizada sobre medidas de seguridad; entrenamiento en *tácticas defensivas*; y asesoría de seguridad para el personal.<sup>223</sup> Estas formas de asesoría son el negocio principal para muchas de las empresas de seguridad privada europeas y norteamericanas que operan en Colombia.

## **6.2 Servicios de seguros antisequestro y rescate**

La firma Lloyd's de Londres empezó a vender pólizas de seguro antisequestro y rescate después del secuestro del hijo de Lindbergh en 1932.<sup>224</sup> En el presente, el Grupo Hiscox – perteneciente a Lloyd's – realiza alrededor de 5.000 pólizas al año, que representan aproximadamente 60% de todo el mercado mundial. Además, controla 50% del mercado de seguros antisequestro en América Latina.<sup>225</sup> Se cree que Hiscox (Lloyd's) cubre cerca de 30 secuestros anuales, pero el grupo se niega a suministrar nombres de sus clientes o detalles sobre el monto de los rescates que ha realizado hasta ahora. La aseguradora norteamericana AIG ocupa el segundo lugar en el mercado mundial,

seguida por Chubb, con sede en Nueva Jersey. Algunas de las pólizas que ofrecen estas empresas cubren también los casos de extorsión que se puedan presentar.

Dado que Colombia se considera un país de alto riesgo, las primas fijadas por las aseguradoras se encuentran entre las más altas del mundo. La prima anual para una familia de 5 personas oscila entre US \$18.000 a US \$ 30.000 anuales y cubre una suma de rescate de hasta un millón de dólares. Una póliza de US \$ 70.000 cubre un rescate de hasta cinco millones de dólares. AIG ofrece cubrir hasta cincuenta millones de dólares en caso de pérdidas ocasionadas por el secuestro o la extorsión.<sup>226</sup>

### **Seguros antisequestro prohibidos por la ley colombiana**

Para la firma Lloyd's de Londres, las pólizas antisequestro y rescate son un producto legítimo. “Las sociedades que enfrentan la amenaza del asesinato, el secuestro, u otros hechos desafortunados, bien sean de origen político o criminal, buscan que su gobierno las proteja (...), y luego de aceptar que la seguridad absoluta es imposible o muy costosa, buscan distribuir las pérdidas de algunos en los hombros de muchos, es decir, buscan el amparo de una póliza de seguros”.<sup>227</sup> Sin embargo, la aseguradora omite informar que la legislación colombiana actual prohíbe la venta de pólizas antisequestro. Como se detalló en el capítulo tercero, la legislación colombiana de hecho penaliza a las empresas que venden dichas pólizas en Colombia. La Superintendencia de Sociedades (encargada de aprobar la licencia de funcionamiento de las aseguradoras en el país) tiene poder amplio y suficiente para efectuar la sanción.<sup>228</sup>

### **Evasión por parte de las aseguradoras de la legislación colombiana**

*Al ser confrontadas con esta legislación, los vendedores de pólizas empezaron a evadirla mediante el contacto de los potenciales clientes en Colombia y la posterior venta de la póliza en el exterior. En efecto, luego de establecer en Colombia el contacto a través de un vendedor de seguros y acordar el tipo de póliza, la compañía se encarga de los viáticos necesarios para firmar el contrato en el exterior.*

La póliza siempre se paga en dólares.<sup>229</sup> Inicialmente, este negocio se realizaba en Panamá, luego en otros países centroamericanos y Miami, y finalmente, en Europa misma.<sup>230</sup> Por ejemplo, la empresa Seitlin & Company – con sede en Miami – utiliza esta vía alterna y se ha convertido en una de las vendedoras más importantes de pólizas antisequestro y rescate en Colombia, a las que denominan ‘Seguro Especial de Indemnización’.<sup>231</sup> La ya mencionada empresa Lloyd's de Londres opera de la misma manera en Colombia, bajo el nombre de Nicholson Leslie Group Special Risks.<sup>232</sup>



Muchas empresas extranjeras que envían a sus empleados a Colombia, evaden la Ley colombiana mediante la compra de la póliza en el país en donde se encuentra radicado el asegurador. En otras palabras, el empleado llega a Colombia asegurado. De esta manera, no existe mecanismo legal alguno para que el Estado colombiano prevenga que las empresas multinacionales aseguren a sus empleados. Asimismo, no se puede evitar que las empresas extranjeras aseguren a sus empleados de nacionalidad colombiana bajo la misma póliza corporativa antisequestro y rescate.<sup>233</sup> Algunas multinacionales tienen una política explícita de no adquirir dichas pólizas. Por ejemplo, la British Petroleum (BP) asegura que ninguno de sus empleados está cubierto por este tipo de pólizas.<sup>234</sup>

### **¿Qué tan seguras son las pólizas antisequestro?**

Una vocera de Hiscox (Lloyd's) afirma que: "si se convierte de conocimiento público el hecho de que una persona tiene seguro antisequestro, se da por supuesto que esta persona tiene más probabilidades de convertirse en objeto de este delito".<sup>235</sup> Por lo tanto, se les exige a los clientes que adquieren este tipo de pólizas que mantengan la discreción y que guarden confidencialidad sobre el pago de rescates, de tal manera que no despierten el apetito de los potenciales secuestradores para buscar más presas aseguradas. Como parte del contrato antisequestro y rescate de Lloyd's, los firmantes o el individuo beneficiario se comprometen a no revelar a nadie que tienen dicho contrato.<sup>236</sup> Otras aseguradoras incluyen cláusulas de confidencialidad similares en sus paquetes antisequestro y rescate también.

Para garantizar el anonimato del beneficiario de la póliza, las empresas generalmente no aseguran a la persona natural sino al cargo que detenta la persona. De esta manera, ni siquiera la misma persona sabe si su cargo está asegurado o no. En todo caso, indiferente de si el cliente es una persona natural o jurídica, las pólizas nunca llevan nombres propios, sino un código secreto en su lugar, que en teoría solamente conocen la aseguradora y los altos funcionarios de la empresa contratante.

*Sin embargo, a pesar de todas estas medidas de seguridad, el sistema no es perfecto. Varios casos en el pasado demuestran que los secuestradores tenían acceso a información detallada sobre la póliza de su víctima. ¿Acaso hay 'espías' infiltrados en las aseguradoras?*

Por ejemplo, cuando la esposa de un ex presidente de basf (multinacional alemana) fue secuestrada en Medellín en 1996, la primera llamada de los secuestradores mencionaba ya que la víctima estaba asegurada por seis millones de dólares.<sup>237</sup>

La evidencia de infiltraciones también salió a la luz en el caso de la comunidad judía colombiana. En 1984, los grupos guerrilleros M-19 y ELN empezaron a secuestrar a hombres de negocios e industriales adinerados de la comuni-



dad judía, quienes habían adquirido pólizas a su nombre de empresas inglesas. Según parece, estos grupos guerrilleros lograron infiltrarse en los archivos con esta información mediante otro miembro de la comunidad judía y obtuvieron así el listado de los beneficiarios y la suma por la cual estaban asegurados. Entre 1984 y 1989 se presentaron más de 40 secuestros, uno tras otro, de miembros asegurados de la comunidad judía. Y en todos estos casos, el negociador entre la familia y los secuestradores era el mismo hombre: Víctor Sassón. Estas sospechosas extorsiones llegaron a su fin tras el asesinato de Sassón, quien se cree que filtró la información a la guerrilla en primer lugar. El asesinato fue atribuido al servicio secreto israelí, Mossad.<sup>238</sup>

### 6.3 **Manejo de la crisis** (incluyendo los servicios de respuesta antisecuestro)

#### **Paquetes de seguros antisecuestro y rescate**

Las tres principales aseguradoras (Hiscox, AIG y Chubb) ofrecen paquetes especiales contra el secuestro y el pago de rescate, conocidos como 'Paquetes anti-secuestro y rescate'. Estos paquetes incluyen también asesoría sobre el riesgo, seguro antisecuestro y manejo de la crisis como un servicio integral. Cada aseguradora emplea a su vez los servicios de empresas especializadas en el manejo de crisis en caso de secuestro o extorsión. Hiscox utiliza los servicios del Grupo Control de Riesgo (Control Risks Group, CRG); AIG, los de Kroll; y Chubb, los del Grupo Ackerman, localizado en Miami. El consorcio asegurador PIA-Nassau Europa, ofrece a su vez servicios de seguros que están ligados con la Corporación de Riesgo Internacional (Corporate Risk International, CRI).

#### **Servicios de manejo de la crisis**

Algunas empresas de seguridad privada se promueven ofreciendo experiencia en "cómo responder desde el principio ante el secuestro o la extorsión". El conjunto de servicios que ofrecen para este tipo de crisis lo denominan *manejo de la crisis*. La respuesta ante el secuestro es una forma especial del manejo de la crisis que busca resolver la crisis aguda que causa un secuestro.

Los servicios de respuesta al secuestro incluyen en general cuatro tipo de operaciones: contactar a las autoridades y ayudarlas a que capturen a los secuestradores; contactar a los secuestradores para iniciar la negociación del rescate; facilitar el ingreso del rescate a Colombia; y ayudar, de manera eficaz, al intercambio efectivo de la víctima por el rescate.<sup>239</sup> El manejo de la crisis es una 'forma más suave' de responder al secuestro, en la cual la aseguradora no negocia directamente con los secuestradores. Los equipos de manejo de la crisis (y de respuesta al secuestro) se encargan de asistir al cliente afectado o a la aseguradora que debe facilitar el dinero para el rescate.

## Las empresas de seguridad privada que brindan servicios de manejo de crisis

La principal empresa en este segmento del mercado de la seguridad privada es **Kroll Inc.**, fundada en 1972 como Kroll Associates. Kroll Inc. no tiene oficina en Colombia, pero envía personal para que se encargue de realizar los servicios de respuesta al secuestro.<sup>240</sup>

La competencia principal de Kroll en este segmento es el Grupo Británico de Control del Riesgo (**British Control Risk Group, CRG**), fundado en 1975 en Londres.<sup>241</sup> En la actualidad, el equipo antisequestro de CRG ofrece servicios de manejo de la crisis a los beneficiarios de las pólizas antisequestro y rescate firmadas con Hiscox (Lloyd's). CRG inició sus actividades en Colombia el 22 de marzo de 1985 bajo el nombre de Control de Riesgos, y desde entonces, ha atendido más de 103 secuestros y 43 casos de extorsión.<sup>242</sup> Esta fecha coincide con la llegada al país del señor Werner Mauss (detective privado y negociador de secuestros alemán avalado por el gobierno del ex canciller Kohl. Véase el capítulo séptimo) en diciembre de 1984.

Algunas pequeñas empresas privadas que también ofrecen servicios de respuesta ante el secuestro aseguran que tienen algún tipo de 'alianza de seguros' con prestigiosas compañías aseguradoras. Desde 1978 hasta la fecha, la firma del ex agente de la CIA, **Mike Ackerman**, con sede en Miami, ha enviado equipos profesionales para rescatar a víctimas secuestradas que adquirieron una póliza con la aseguradora Chubb.<sup>243</sup> Ackerman es reconocido como negociador de secuestros, aunque también brinda otro tipo de servicios contra terroristas. Se dice que en el portafolio de clientes de Ackerman "se encuentran 65 de las 100 principales multinacionales estadounidenses, al igual que numerosas empresas europeas y japonesas".<sup>244</sup> La empresa Corporate Risk International (CRI) es de reciente aparición en este segmento del mercado (tiene su sede en Fairfax, Virginia).<sup>245</sup>

Los honorarios de las empresas de respuesta al secuestro son considerables. Los de Ackerman ascienden a dos mil dólares diarios más gastos adicionales (1996). Si se necesitan los servicios de un segundo agente, se cobran US \$ 1.350 adicionales por día.<sup>246</sup> Si se considera el hecho de que la negociación de un secuestro puede tomar varios meses, la cuenta de cobro puede ascender a cientos de miles de dólares. La tarifa de CRG es de dos mil dólares diarios más gastos adicionales.

## Los servicios de respuesta antisequestro bajo la legislación colombiana

Kroll sostiene que la Ley Antisequestro (1993) "tuvo poco efecto en la disminución de los casos de secuestro o del pago de extorsiones; además, desde entonces, ha pasado por varios ajustes. En resumen, la justicia colombiana ha sentenciado que los individuos u organizaciones que actúan a favor de los más altos intereses de una víctima del secuestro, siempre y cuando se ciñan a los procedimientos y protocolos legales, se encuentran dentro del margen de la ley".<sup>247</sup>

Esta afirmación de Kroll es, en sí misma, correcta. Sin embargo, no corresponde en todos los aspectos con la lectura oficial de la Ley Antisecuestro colombiana, ni con las sentencias relevantes de la Corte Constitucional. Como se dijo anteriormente en el capítulo tercero, esta Ley prohíbe por norma el pago o entrega del rescate a organizaciones terroristas. La Ley estipula ‘causales de justificación’ muy limitadas como excepción a la norma. De hecho, el pago de rescates se restringe a razones humanitarias.<sup>248</sup> En consecuencia, la Ley determina que cualquier persona que se beneficie de la transacción del pago de un rescate está cometiendo un crimen. Esta legislación deja un margen de maniobra muy angosto a las víctimas del secuestro y sus familiares para recibir asistencia para resolver la liberación del secuestrado.<sup>249</sup>

*Las empresas de seguridad privada que operan en Colombia no están autorizadas para negociar directamente con los secuestradores el rescate. El hecho de que algunas de estas empresas insistan en llamar sus servicios ‘manejo de la crisis’ en lugar de ‘respuesta al secuestro’ implica que son muy conscientes de esto. Sin embargo, no existen mecanismos legales para prevenir que estas empresas les aconsejen a sus clientes el pago del rescate.*

Control de Riesgos afirma que se ajusta a la categoría de manejo de crisis en Colombia, por lo tanto, no incluye los servicios de respuesta al secuestro. Esto significa que ellos no negocian directamente con los secuestradores, no entregan el rescate, sino que se limitan a aconsejar a la familia y a las empresas sobre cómo manejar la crisis.<sup>250</sup> Sin embargo, en la práctica la diferencia es mínima, puesto que es muy común que el consejero le recomiende a la familia que contrate a un negociador, con el cual trabajará estrechamente.<sup>251</sup>

#### **6.4 Seguros y servicios de respuesta antisecuestro; el debate**

A partir de mediados de los ochenta, tanto la venta de pólizas antisecuestro y rescate como los servicios de manejo de crisis han venido siendo severamente criticados. Una serie de iniciativas que buscaban cambiar esta situación se produjeron con motivo del secuestro altamente publicitado de Jennifer Guinness. Ella fue secuestrada por criminales sospechosos de tener lazos con el IRA (Ejército Republicano Irlandés) y quienes solicitaron US\$2.6 millones por el rescate. Cuando la prensa hizo público que el CRG estaba llevando el caso, miembros del Parlamento británico solicitaron su procesamiento, al igual que el del contratante, por violación de las leyes de prevención del terrorismo. Un alto oficial de la Policía le dijo a los medios: “Las empresas de seguridad privada como la que se menciona en el caso Guinness están actuando al margen límite de la tolerancia oficial”.

*El gobierno irlandés, argumentando que la existencia de pólizas anti-secuestro y extorsión eran un incentivo para secuestrar, cabildearon en las instituciones europeas a favor de la prohibición de este tipo de pólizas.<sup>252</sup> Aunque esta iniciativa no fue aceptada, no por ello se ha silenciado el debate sobre las pólizas antisequestro y la legitimidad de los servicios de respuesta al secuestro.*

### **Objeciones contra los seguros antisequestro**

En Colombia, las ONG como País Libre, las autoridades y la prensa han afirmado que el negocio de los seguros antisequestro y rescate tiene múltiples efectos negativos. A continuación se presentan sus argumentos.

En primer lugar, los colombianos consideran que estos servicios son **un incentivo para que se produzcan más secuestros y se garantice el pago fácil de los mismos**. A pesar de que la legislación colombiana prohíbe en la actualidad la adquisición de este tipo de pólizas, está fuera de discusión que el mercado de este tipo de seguros se disparó hacia finales de los noventa. Según Kroll Inc., la mayoría de los ejecutivos extranjeros de alto perfil que trabajan en América Latina están cubiertos por este tipo de seguro. De los gerentes locales empleados por inversionistas extranjeros, se estima que cerca del 50% está asegurado también.<sup>253</sup> Múltiples casos han demostrado que las medidas estándar de confidencialidad no son suficientes para prevenir que no se filtre la información de los clientes asegurados por estas pólizas. Una vez que los secuestradores están seguros de que su (potencial) víctima está cubierta por una de estas pólizas, la probabilidad de que ésta sea secuestrada y de que aumente la suma del rescate solicitada, se incrementa notablemente.

*Pero aún sin que se filtre la información, es suficientemente claro que el simple hecho de saber que la mayoría de las empresas extranjeras aseguran a sus empleados (tanto extranjeros como nacionales), los hace a estos unos candidatos lucrativos a ser secuestrados. Los secuestradores saben que la captura de estas víctimas (aseguradas bien por una póliza comercial o por una póliza interna) les garantiza el pago de una suma considerable por el rescate.*

En segundo lugar, el seguro antisequestro y rescate puede llevar al autosequestro. Tal es el caso de un empleado o una persona natural que está cubierta por una de estas pólizas y que se pone en contacto con el potencial secuestrador para negociar su secuestro a cambio de un porcentaje del rescate. Este no es un caso hipotético: hay pruebas de que dichos autosequestros se han llevado a cabo. Un claro ejemplo fue el autosequestro que se dio en 1997 en un crucero atracado en la bahía de Santa Marta. Se pagó un rescate de cinco millones de dólares.<sup>254</sup>

Más aún, algunas organizaciones colombianas sostienen que el seguro antisequestro y rescate es **discriminatorio contra los colombianos**. En térmi-

nos estrictos, aquellos que adquieren su póliza en el extranjero no están violando la ley colombiana, así participen en un sistema que socava la política antisequestro. Este sistema excluye a la amplia mayoría de colombianos, que no se encuentra en posición alguna de evadir los obstáculos legales para adquirir una de estas pólizas en el extranjero. Además, el valor de dichas pólizas se encuentra totalmente fuera de su alcance. Y aunque haya algunos colombianos con capacidad económica para adquirirlas, ni ellos ni sus familiares podrán beneficiarse de los términos del contrato por cuanto son empleados de una institución oficial o que tiene contratos con entidades estatales (como Ecopetrol).

### **Argumentos a favor presentados por las aseguradoras**

La industria aseguradora ha respondido a estas objeciones con varios argumentos con el fin de aclarar sus actividades. Sostienen que existe muy poca probabilidad de que los seguros antisequestro y rescate estimulen la industria del secuestro, porque **sólo el 5% de todas las víctimas estaría cubierto por dichas pólizas.**<sup>255</sup> Según las mismas empresas aseguradoras, la pregunta sobre si las empresas están o no cubiertas por estas pólizas es irrelevante. Lo que atrae a los secuestradores no es la póliza sino el patrimonio de la empresa. Muchas multinacionales ni siquiera adquieren dichas pólizas, sino que asignan una partida de su presupuesto anual para cubrir los costos de un eventual secuestro o rescate. Esto es lo que se conoce como póliza interna, y que a la postre termina siendo más económica que un seguro comercial.<sup>256</sup>

También consideran que la probabilidad de que se filtre la lista de clientes asegurados es prácticamente nula, puesto que guardan máxima confidencialidad respecto a esta póliza, al igual que obligan a sus clientes a actuar con igual recelo.

### **Debate sobre el manejo de la crisis; argumentos de las empresas de seguridad**

Con respecto a los servicios de respuesta al secuestro, las empresas de seguridad privada sostienen que la tasa de mortalidad más alta entre las víctimas del secuestro es la de las no aseguradas. Esta afirmación la hacen con base en el concepto de que los consultores de sus empresas son considerados como **profesionales**. Los familiares de la víctima que quieren desempeñar este papel son más proclives a cometer errores fatales. Por ejemplo, los profesionales en el asunto sienten menos la presión del tiempo que los familiares de la víctima: una de las estrategias que emplean es dilatar el pago del secuestro por lo menos a tres meses. Después de este periodo, la suma solicitada por el rescate disminuye drásticamente. Según el CRG, tanto las organizaciones de derechos humanos como otras instituciones sin ánimo de lucro, tienen menos experiencia que los consultores de las empresas de seguridad privadas.<sup>257</sup> A pesar de esta opinión, CRG coopera ocasionalmente con ONG y otras organizaciones tales como la iglesia. Pax Christi Holanda por experiencia propia sabe que CRG ha proporcionado servicios gratuitos a particulares.

Otro argumento de las empresas de seguridad privadas es que los servicios de manejo de crisis **tienden a terminar en menores sumas de dinero entregadas a manos de las organizaciones terroristas, debido al profesionalismo** de sus negociadores y consultores. Su misión es recuperar a las víctimas al menor precio posible. La aseguradora garantiza esta última condición (costo de efectividad) mediante el pago de elevadas primas a los equipos de respuesta al secuestro entre menor sea la suma pagada por el rescate de los secuestrados.

Los consultores del manejo de crisis consideran una ventaja positiva para su trabajo el hecho de que **informan a las autoridades** (locales o nacionales) sobre el caso. Los familiares de la víctima generalmente se niegan a informar o cooperar con las autoridades locales por temor a un intento de rescate. Este temor se encuentra fundamentado en el hecho de que el 97% de las víctimas que no han sobrevivido al secuestro ha fallecido en operaciones fallidas de rescate. Según las compañías de seguridad privadas, el hecho de involucrar negociadores profesionales contribuye a eliminar la posibilidad de que la familia transfiera el pago del rescate antes de que la policía siquiera se entere del delito.

### **Manejo de crisis y servicios de respuesta antisecuestro: el otro punto de vista**

La sociedad civil colombiana contempla con escepticismo los servicios de manejo de crisis y de reacción al secuestro. Se tiende más a pensar que las empresas de seguridad privada realizan un trabajo que también podría ser desempeñado por representantes de la iglesia o de las ong, como la Cruz Roja o País Libre.

Muchos colombianos opinan que los argumentos de estas empresas sobre la poca experiencia de dichas instituciones son infundados. Sostienen que varios representantes de la Iglesia al igual que varias ong se encuentran en perfecta condición y tienen la motivación suficiente para emplear tiempo y recursos en el apoyo de la familia, en mantener el contacto entre la familia y la víctima, y en la mediación con los secuestradores. **Conocen el lenguaje, la cultura colombiana, las diferencias entre las distintas regiones geográficas y el comportamiento de los grupos armados y criminales ilegales mucho mejor que los consultores extranjeros.**

Los representantes de la Iglesia (la mayoría de las veces con gran experiencia en estos asuntos), las ong y las instituciones gubernamentales trabajan sin ánimo de lucro, **sin cobrar honorario alguno, es decir, de la manera más transparente para llevar a cabo la negociación de un secuestro.** En este sentido, pueden realizar su actividad mediadora sin violar ni el espíritu ni la intención de la legislación colombiana contra el secuestro.

---

219 Parte de la información de este capítulo fue recopilada por An Vranckx, de IPIS (International Peace Information Service) en Amberes, Bélgica.

- 220 Lock, P., "Privatisierung von Sicherheit im Zeitalter der Globalisierung - Das Beispiel Lateinamerika". En: *Lateinamerika Analysen - Daten - Dokumentation*, 15 (1998) 13-28.
- 221 Una introducción a las principales empresas del mercado de la seguridad privada se puede encontrar en Lewis, William y Edgecliffe-Johnson, A., *Corporate Security: The masked man's guide to the industry*. En: [www.globalarchive.ft.com](http://www.globalarchive.ft.com), 2000.
- 222 El servicio de información de Kroll K.I.N.S. ofrece un ejemplo de la regularidad y actualización de sus informes sobre el país (que actualmente tienen a Colombia como tema central) en su sitio de internet [www.krollworldwide.com](http://www.krollworldwide.com).
- 223 Woellert, L., "New weapons for scary world - Services provide security with brains, technology, not arms". En: *Washington Business Times*, 5 de mayo de 1997
- 224 Radcliffe, J., citado en: A. Hagedorn Auerbach, *Ransom: The untold story of international kidnapping*. (New York, 1998) 212.
- 225 Boggan, S., "Kidnap policies pay out millions". En: *The Independent*, 9 de octubre de 1998, 9.
- 226 Bamrud, J., "Kidnapping , Inc." En: *Latin Trade*, Feb. 1996.
- 227 Radcliffe, J., en: A. Hagedorn Auerbach, *Ransom*, 212.
- 228 Información obtenida de la misión colombiana en Bélgica.
- 229 Meluk, E., *El secuestro en Colombia y las multinacionales Europeas*, investigación realizada para Pax Christi Holanda (Bogotá 1999), 23.
- 230 En Panamá, los representantes de la aseguradora mantenían buenas relaciones con los funcionarios estatales y los miembros de las fuerzas armadas, los cuales facilitaban la circulación y el lavado de dinero. Valencia, L., *Secuestro, extorsión y guerra en Colombia*, investigación realizada para Pax Christi Holanda.
- 231 Time, Junio 12, 1995, no. 23, Edición para América Latina, 20-21.
- 232 Meluk, E., *El secuestro en Colombia y las multinacionales Europeas*, 23.
- 233 Ibidem.
- 234 Información obtenida de empleados de los cuarteles generales de la BP en Londres.
- 235 Wilson, J., "Kidnaps for ransom reach worldwide high". En: *The Guardian*, Abril 21, 2000.
- 236 Hagedorn Auerbach, A., *Ransom*, 203-204.
- 237 Rienhardt, J., "Agent aus Liebe", En: *Stern*, 28 de junio de 1997, 55.
- 238 Valencia, L., *Secuestro, extorsión y guerra en Colombia*.
- 239 Meluk, E., *El secuestro en Colombia y las multinacionales Europeas*, 24.
- 240 Lee, I., "El dinero siempre deja huellas", en: *Cambio16*, 11 de julio de 1994.
- 241 Hagedorn Auerbach, A., *Ransom*, 201-219.
- 242 Entrevista con E. Westropp, 11 de noviembre de 2000.
- 243 Williams, H., "Kidnap and Ransom Insurance to the Rescue". En: *insure.com*.
- 244 The Ackerman Group, *Information brochure*.
- 245 CRG, la empresa *mejor establecida* en asesoría sobre el riesgo y respuesta al secuestro, demandó a CRI por violación de su marca registrada, arguyendo que con el uso de acrónimos similares se pretendía confundir a los clientes.
- 246 Bumrad, Joachim, "Kidnapping Inc.", En: *U.S./Latin Trade*, February 1996.
- 247 KINS, Country Risk Reports: Colombia, [www.kinsonline.com/ccr1.cfm](http://www.kinsonline.com/ccr1.cfm) (updated October 2001).
- 248 Información obtenida de la misión diplomática colombiana en Bélgica.
- 249 Meluk, E., *El secuestro en Colombia y las multinacionales Europeas*, 23-24.
- 250 Valencia, L., *Secuestro, extorsión y guerra en Colombia*.
- 251 Un empleado de Pax Christi fue contactado por CRG a petición de las FARC (a través del Gobierno Sueco) para que cooperara con el caso Skanska en 1995. Querían que Pax Christi estuviera presente en la entrega de dos ingenieros suecos capturados por las FARC. Apenas se frustró la entrega, la CRG actuó como consejero en las negociaciones subsiguientes.
- 252 Hagedorn Auerbach, A., *Ransom*, 215-217.
- 253 Bamrud, J., "Kidnapping , Inc." En: *Latin Trade*, febrero de 1996. También Mr. E. Westropp confirmó en la entrevista fechada el 11 de noviembre del 2000, que el porcentaje de extranjeros asegurados en Colombia es mucho mayor que el mencionado.
- 254 "Interview met Meluk door Edwin Koopmans", Julio de 1999, facsímil de Pax Christi.
- 255 Entrevista con E. Westropp, 11 de noviembre de 2000.
- 256 Ibidem.
- 257 Ibidem.







## 7. ¿Hacia una política común europea sobre el secuestro?

### 7.1 *Los esfuerzos realizados por la comunidad internacional*

#### **Los Principios Rectores del G-7/G-8**

La Convención de NU en 1979 consideró la toma de rehenes en general como un delito, por cuanto dice que “la toma de rehenes es un delito que preocupa enormemente a la comunidad internacional y que (...) cualquier persona que cometa este delito debe ser procesada o extraditada”. La convención no prohibió los pagos por los rescates.<sup>258</sup>

Los socios del G-7 emitieron una declaración en diciembre de 1995, en la cual establecen que “todos estamos de acuerdo en nuestra determinación de trabajar mancomunadamente con la comunidad internacional para combatir el terrorismo en todas sus formas”. Con respecto a la toma de rehenes, este grupo hizo un llamado a todos los países a “no hacer concesiones sustantivas a aquellos que toman rehenes”, a “negarle a aquellos que toman rehenes los beneficios por sus actos delictivos” y a “procesar a todas las personas responsables”.<sup>259</sup> En esta declaración, El G-7 desaprobó los pagos por los rescates.

*En 1998, el Reino Unido utilizó la presidencia del G-8 para convocar a un grupo de funcionarios a trabajar sobre el tema de la toma de rehenes. El resultado fue un consenso del G-8, entre los funcionarios del estado que no son ministros, sobre ‘mejores alternativas’ para manejar el secuestro, incluyendo el no pago del rescate.<sup>260</sup>*

A nivel ministerial se emitió una declaración de intenciones mucha más vaga. Los Ministros de Relaciones Exteriores dijeron que “un frente unido en contra de los pagos por los rescates es esencial para disuadir a todas aquellas personas que toman rehenes”. Con el fin de promover un enfoque común, acordaron establecer unos principios y propusieron una asesoría para las organizaciones que operan en países de alto riesgo.<sup>261</sup>

Además, el G-7 prometió en una declaración emitida en septiembre del 2000 integrar los planes de acción nacional, con el fin de congelar los activos de los terroristas y de sus asociados y de elaborar una estrategia global para combatir la financiación de los terroristas en todo el mundo.<sup>262</sup> Los Estados Unidos y la Unión Europea también declararon públicamente sus intenciones de establecer nuevas estrategias y una nueva legislación para combatir el lavado de dinero de los grupos terroristas.<sup>263</sup> Se cree que los grupos armados ilegales de Colombia abusan de la infraestructura financiera legal de los Estados Unidos y de la Unión Europea, a menudo con base en un acuerdo

tácito con las instituciones bancarias. Tanto los paramilitares (AUC) como los principales grupos guerrilleros (el ELN y las FARC) figuran en la lista de terroristas internacionales del FBI. La Unión Europea tendrá que hacer lo mismo con el fin de que la estrategia común sea una realidad.

### **Políticas de la Unión Europea**

En la convención europea sobre la supresión del terrorismo (Estrasburgo, 27 de enero de 1977) se dijo que los Estados europeos miembros del Consejo de Europa estaban de acuerdo en que el secuestro y la toma de rehenes no debían ser considerados como delitos políticos, haciendo posible con esto la extradición entre los estados. La convención no menciona una política de no pago.

*El Reino Unido, presidente de la Unión Europea en 1998, promovió un debate de los parámetros del G-8 con respecto al secuestro y propuso adoptar los mejores principios de este grupo, incluyendo el no pago por el rescate, como parte de su política común de relaciones exteriores. De acuerdo con el Sr. Blumberg, del Departamento de Políticas contra el Terrorismo del Reino Unido, el resultado de esta propuesta no fue el esperado.<sup>264</sup>*

Debido a la toma de ciudadanos europeos y estadounidenses como rehenes en el sur de Filipinas en septiembre del 2000, nuevamente se observó con claridad que el tema del no pago es un tema muy delicado para los Estados Miembros de la Unión Europea. Estados Unidos, que no quiso descartar la posibilidad de utilizar la fuerza militar para liberar a los rehenes, acusó a los países de la UE involucrados (Alemania, Francia y Finlandia) de fomentar aún más la toma de rehenes al permitir el pago de grandes cantidades de dinero por el rescate. El Reino Unido, que es el promotor de la adopción de unos 'mejores métodos' comunes para combatir el secuestro, no pronunció sentencia contra los países europeos involucrados. Un funcionario de la UE dijo: "mantenemos este tema [pago por rescates] bajo discreción porque es muy delicado".<sup>265</sup>

Sin embargo, existe otra diferencia en cuanto a la política entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Varios Estados Miembros de la UE conceden visas a los miembros de los grupos armados de Colombia y los reciben oficialmente (en diferentes niveles gubernamentales), mientras que los Estados Unidos los ha incluido en la lista de grupos terroristas.

También se han adoptado otras alternativas para combatir el secuestro. Hace muy poco (enero-febrero del 2001) se realizó una conferencia sobre el terrorismo en Madrid y las conclusiones se encuentran en el "Documento de Madrid". Una de las siete propuestas de este documento es la intención de crear una estrategia común para enfrentar el secuestro de ciudadanos europeos en los países que no pertenecen a la UE.<sup>266</sup> En conferencias anteriores como la del Consejo Extraordinario Europeo en Tampere, los Estados Miembros de la Unión Europea ya habían comisionado a Europol con la tarea

de establecer estrategias operativas para combatir el terrorismo.

Además, la Comisión Europea escribió una propuesta para el Consejo Europeo sobre la lucha contra el terrorismo, que se analizará en diciembre del 2001. La Comisión Europea propone manejar una definición común de terrorismo (incluyendo el secuestro) en la UE y utilizar esta definición en la legislación nacional de los distintos Estados Miembros. El objetivo de la propuesta es facilitar la detención de los terroristas en la UE, la extradición de los mismos, y promover la emisión de una visa y la formulación de una política de asilo común para los terroristas.<sup>267</sup>

## 7.2 **No existen unos principios rectores comunes europeos sobre el secuestro**

*Como no existe una estrategia común formal para manejar un caso de secuestro, cada Estado Miembro de la UE tiende a tratar el caso utilizando sus propios métodos. Algunos países, al menos formalmente, tienen políticas explícitas para no hacer concesiones, mientras que las políticas de otros son menos explícitas o no tienen ningún tipo de política al respecto. La UE no ha hecho ningún debate sobre estrategias generales para manejar el secuestro ni sobre las estrategias utilizadas en secuestros anteriores y mucho menos sobre los pagos por los rescates.*

### **(La falta de) políticas formales**

Pax Christi de Holanda se puso en contacto con varios Estados Miembros de la UE y les solicitó definir su política nacional para enfrentar el secuestro de uno de sus ciudadanos en países que no pertenecen a la UE. Algunos de estos Estados querían hablar sobre los principios rectores, pero otros se rehusaron o simplemente dijeron que no tenían parámetros al respecto.

**El Reino Unido** tiene una política formal de no pago y de no hacer concesiones políticas, de acuerdo con los principios establecidos por el G-8 en 1998 (tal y como se describió anteriormente). Estos principios y mejores métodos aparecen en un documento semi-restringido que se envió a todas las embajadas del Reino Unido. En caso de un secuestro en el exterior, la embajada correspondiente aplica esta política formal y trata de evitar el pago por el rescate. Al analizarla por segunda vez, esta política es menos estricta de lo que parece, por cuanto las terceras partes son libres de negociar y pagar el rescate. La embajada correspondiente no hará en una forma activa nada para convencerlos de lo contrario.<sup>268</sup>

**Los principios Holandeses** estipulan que una embajada holandesa siempre debe comunicarse con las autoridades locales para manejar el caso. La embajada se mantendrá en contacto con las autoridades colombianas, mien-

tras que el Ministerio de Relaciones Exteriores en La Haya apoyará a la familia de la víctima en Holanda.<sup>269</sup> Las autoridades holandesas piden que no se pague por el rescate y tratan de evitar que la familia pague.<sup>270</sup>

**Italia**, el país que tiene una legislación nacional muy estricta contra el secuestro, con base en la cual los colombianos redactaron la suya, no prohíbe a sus ciudadanos pagar por el rescate en Colombia. De acuerdo con el Sr. Piras de la embajada de Italia en Colombia, los representantes del Estado italiano no facilitarán el proceso. Solamente están autorizados para apoyar moralmente a la familia y para aconsejarla con respecto a una posible mediación.<sup>271</sup>

**Las autoridades belgas en Colombia** dijeron que en el caso del secuestro de un ciudadano belga, tendrían que comunicarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bélgica porque si existen ciertas directrices para manejar los casos de secuestro, la embajada en Colombia no las podría conocer sino hasta cuando la situación se presente. **Las autoridades alemanas** no respondieron las preguntas sobre la política nacional, pero Alemania proscribió el seguro contra secuestros en la legislación nacional.<sup>272</sup> Con respecto a la reciente liberación de dos rehenes alemanes retenidos por las FARC, el Ministerio de Cooperación para el Desarrollo en Berlín dijo que la política oficial es el no pago. **El Ministerio sueco** dijo que en caso de una crisis por secuestro, ante todo tratan de utilizar el “sentido común”. **Los ciudadanos finlandeses** secuestrados en Colombia pueden recurrir a cualquier tipo de principios o parámetros que se consideren adecuados para ellos, a menos que la ley colombiana diga lo contrario.

### **Las prácticas informales versus la política formal**

Desde 1992, diferentes personas han solicitado a Pax Christi que las ayude a solucionar al menos 30 secuestros de colombianos y extranjeros, realizados por la guerrilla y los paramilitares. Los siguientes casos solamente se refieren a algunos ejemplos de europeos en los cuales Pax Christi ha intervenido, o a casos sobre los cuales esta institución tiene información detallada y verdadera. Lo que es claro, en medio de esta confusión y de esta falta de claridad, es que la respuesta de Europa ante el secuestro de sus ciudadanos en otros países no cumple con la política común sino que depende de los intereses (económicos) y los dilemas que se presentan en cada caso individual. Una amplia gama de diferentes fuentes confirmaron la información confidencial de la siguiente perspectiva general.

**1975**; las FARC secuestraron a Eric Leupin, cónsul holandés y empleado de la compañía colombiana ‘Reforestaciones Ltda.’ en febrero de 1975. Este grupo exigió el pago por el rescate. Después de 20 meses lo liberaron. No se sabe cuánto se pagó por el rescate ni quién lo pagó.

*Política y método: desconocidos*

**1988;** supuestamente el M-19 secuestró a dos empleados holandeses de la compañía holandesa Holanda - Colombia, filial de Holland Chemical International (HCI), en Bogotá el 19 de febrero de ese año. Esta firma estaba dedicada a vender y abastecer productos químicos que no se podían producir en Colombia porque la ley lo prohibía. Las compañías holandesas como Shell, Akzo Nobel y DSM figuraban entre los proveedores de materia prima.

De acuerdo con la información no oficial del entonces comisionado de HCI, el grupo insurgente exigió una suma de US \$ 80 millones por el rescate. Después de cuatro meses, en julio de 1988, la compañía pagó el rescate (se dijo que había pagado US \$ 10 millones). El grupo liberó a uno de los empleados y exigió una nueva suma por el otro. Finalmente, el ejército liberó al otro empleado en octubre de 1988. La embajada holandesa facilitó los pagos, aunque era consciente del carácter dudoso de la empresa. Los círculos holandeses en Colombia sabían que HCI vendía productos químicos a los narcos para la producción de cocaína. El Director de la Policía Nacional de Colombia, general Miguel Padilla, sus sucesores, el ministro de Justicia, Dr. Lara, (a quien la mafia de la droga asesinó en 1984) y la DEA ya habían acusado a la compañía en varias oportunidades. Sin embargo, las autoridades correspondientes solamente tomaron las medidas judiciales cinco años después y sin éxito.

Durante este período, el M-19 guardó silencio y nunca se adjudicó el secuestro. Actualmente, los anteriores líderes de este grupo niegan su participación en este evento. De hecho, el secuestro hacía parte de un convenio en los círculos de la mafia de la droga. En diciembre de 1989, el parlamento holandés cuestionó a HCI, pero el Ministerio de Asuntos Económicos nunca entregó la información solicitada. Poco tiempo después, endurecieron la ley sobre el control de las exportaciones de ciertas sustancias químicas a los países productores de cocaína.

*Política: no pago. Práctica: pago.*

**1992;** las FARC secuestraron a un turista holandés en la región de Urabá el 16 de febrero de ese año. Inicialmente, las FARC creían que este joven era un agente de la CIA que estaba buscando los laboratorios de la industria de la coca. Cuando se enteraron de que era un simple jardinero holandés, llamaron a la embajada y exigieron US \$ 2 millones por el rescate. La embajada les dijo que la familia del jardinero no podía pagar esa cantidad, pero que tratarían de conseguir una suma más pequeña. Además, informó a los secuestradores que la embajada tenía que cumplir con la política de no pago. La embajada solicitó ayuda a la policía y esto estancó las negociaciones. Después de varias semanas, ni la policía colombiana ni las autoridades de la policía holandesa habían avanzado en la solución del problema. Entonces la desesperada familia solicitó la ayuda de Pax Christi.

Tras seis semanas de preparación y deliberaciones con las FARC, Pax Christi viajó al Urabá (mayo de 1992). El grupo prometió entregar al jardinero a Pax Christi como un gesto de buena voluntad, supuestamente a través de la embajada de Holanda (de acuerdo con el entonces embajador de Colombia en La Haya). Sin embargo, todo era mentira. Solamente años después se supo que los secuestradores habían asesinado al rehén antes de la llegada de Pax Christi. De acuerdo con los guardianes de la víctima, el motivo de su asesinato fue que la embajada había informado a la policía (desatendiendo las instrucciones de las FARC) y que, por lo tanto, no podían esperar un pago sustancial.

*Política: no pago (gobierno). Práctica: pago (familia).*

**1995;** las FARC plagiaron a dos topógrafos suecos de la compañía hidroeléctrica sueca Skanska en diciembre de 1994. En marzo del siguiente año, el gobierno sueco solicitó la presencia de Pax Christi en la entrega de los dos rehenes, a petición de las FARC. La liberación debía ser considerada como un gesto político de buena voluntad dentro del contexto de los diálogos de paz y, por ende, no exigieron un pago por el rescate. Sin embargo, este fue un intento fallido por razones militares. Finalmente, el grupo insurgente liberó a los dos rehenes en mayo de 1995, con la ayuda de la iglesia en Urabá.

El gobierno sueco, la compañía de seguridad contratada, Control Risk, y la compañía Skanska dijeron que no se había pagado por el rescate. Pero las autoridades colombianas, la prensa nacional y las personas con información confidencial dijeron lo contrario y afirmaron que alguien había pagado US \$ 6 millones por los dos suecos.

*Política: no pago. Práctica: pago.*

**1995;** el grupo guerrillero Jaime Bateman secuestró a un diplomático inglés en septiembre de ese año. El embajador inglés solicitó a Pax Christi que facilitara la liberación, asumiendo que este grupo guerrillero tendría un gesto político positivo. En ese entonces, el gobierno colombiano estaba muy interesado en las negociaciones de paz con este grupo por cuanto los diálogos con los otros grupos armados habían fracasado. Después de establecer algunos contactos, Pax Christi decidió suspender las conversaciones con el Jaime Bateman por considerarlo poco confiable, por sus vínculos con la mafia de la droga de Cali y por su falta de voluntad para dejar de secuestrar.

Sin embargo, hacia finales del año, el grupo subversivo liberó al diplomático en circunstancias poco claras hasta el momento. Las personas (religiosos) que participaron en la mediación dijeron que la familia había pagado por el rescate (con el conocimiento del gobierno inglés) y que ellos habían entregado el dinero en efectivo a los secuestradores. No obstante, el gobierno inglés negó el pago. El ejército colombiano dijo que el grupo guerrillero había liberado al inglés gracias a sus acciones militares y mostró fotografías

del hecho. De acuerdo con las partes involucradas, esta fue una demostración falsa del éxito militar. Las personas con información confidencial dicen que el contexto real del misterioso secuestro está en el ‘proceso 8000’, que se refiere a la investigación penal en contra del presidente Samper a quien acusaron de haber aceptado dinero del narcotráfico en su campaña electoral.

*Política: no pago. Práctica: pago.*

**1998;** las FARC secuestraron a tres empleados colombianos de un proyecto técnico agrario (de Cega/Corpoica) en el noreste de Colombia, el cual era financiado en parte por la oficina del gobierno holandés de cooperación internacional para el desarrollo. Un ex-empleado holandés del proyecto solicitó ayuda a Pax Christi, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Cuando las FARC liberaron a los colombianos un año después, un funcionario holandés que participó en las negociaciones admitió que la oficina había cedido a algunas de las exigencias de las FARC, quienes habían solicitado específicamente apoyo económico para algunos pequeños proyectos de desarrollo en una región dominada por ellos. Sin embargo, las personas con información confidencial sobre este caso en particular dijeron que el grupo subversivo había pedido inicialmente US \$ 4 millones, pero que después de largas negociaciones había aceptado la suma de US \$ 500.000.

*Política: no pago. Práctica: pago*

**2000;** las FARC secuestraron a un holandés en la ciudad de Cali en octubre del 2000. De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, este grupo exigió US \$ 5 millones por su liberación. La Policía Nacional también dijo que este hombre tenía fuertes nexos con la mafia de la droga de Cali. El personal de la embajada holandesa participó en una mediación secreta. El Ministerio de Relaciones Exteriores, apelando a la responsabilidad moral de los periodistas, le solicitó a un periódico holandés influyente que no publicará información sobre el caso “porque ésta podría poner en peligro la vida del rehén”. Después de 10 meses, el grupo insurgente liberó al holandés, quien regresó a Holanda. Poco tiempo después, algunas fuentes dentro de la Policía Nacional afirmaron que la liberación no hubiera sido posible si no hubieran pagado una enorme suma por el rescate. Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda dijeron que no tenían información al respecto, a pesar de que son políticamente co-responsables. Hasta donde sabemos, el Departamento de Justicia no emprendió ninguna acción en contra del supuesto traficante de drogas.

*Política: no pago. Práctica: pago.*

### **La política alemana de secuestro hasta 1998: el negocio de un detective privado<sup>273</sup>**

El gobierno alemán dirigido por el Canciller Helmut Kohl (hasta octubre de 1998) estaba muy interesado en asegurar las inversiones alemanas en

Colombia. En su lucha por alcanzar este objetivo, el gobierno llegó hasta el punto de permitirle a un detective privado alemán, Werner Mauss, y a su esposa mediar entre las compañías multinacionales alemanas, los gobiernos de Alemania y Colombia y la guerrilla colombiana. El problema central era la industria del secuestro y, específicamente, algunos de los secuestros realizados por el movimiento guerrillero del ELN.

*El gobierno alemán de Kohl manejó una política (no oficial) de negociación y pago de rescates. No solamente le permitió a la pareja Ida y Werner Mauss realizar estas operaciones oscuras sino que se hizo el de la vista gorda ante los enormes pagos por los rescates al ELN. El gobierno alemán facilitó este proceso, suministrándole a Mauss 'documentos de identidad falsos'. Además, le permitió a la pareja Mauss influir en la agenda política alemana con respecto a los grupos armados colombianos en conflicto. El homólogo del Sr. Mauss en el gobierno alemán era el Staatsminister (el Ministro de Estado) Bernd Schimidbauer.*

Hasta la fecha, no se han aclarado todos los pormenores de este asunto. El caso es altamente complejo porque Mauss operaba en diferentes niveles al mismo tiempo y la gente con la cual trataba solamente tenía información parcial sobre la amplia gama de sus actividades. Además, el silencio de aquellos que conocen un poco más -particularmente sobre los detalles de las transacciones de los rescates- deja mucho espacio para la especulación. Podemos subdividir las actividades de Mauss en tres partes que, sin embargo, se superponen en muchos sentidos.

1. Mauss ofrecía servicios de consultoría y cabildeo a las multinacionales que operaban en Colombia, tales como Siemens y Mannesmann.
2. Se desempeñaba como negociador para resolver crisis provocadas por el secuestro, especialmente en los secuestros de los empleados extranjeros de las multinacionales en Colombia. El ELN realizó la mayoría de los secuestros en los cuales Mauss sirvió como mediador. A menudo, el gobierno alemán sabía de sus actividades o le pedía que interviniera en el caso.<sup>274</sup> Las publicaciones de los periodistas alemanes y colombianos indican que el pago de grandes cantidades de dinero – en efectivo o en las cuentas del ELN en el exterior – coinciden con la liberación de ciertos rehenes. Sin embargo, Werner Mauss dijo en una entrevista que solamente conoció un caso en el cual se pagó US \$ 2 millones en efectivo por el rescate.<sup>275</sup>
3. A Werner Mauss también se le atribuyen otras actividades que hicieron saltar los objetivos 'políticos' a primera plana. El secuestro del senador Carlos Espinoza permitió al ELN presentar sus exigencias políticas al gobierno colombiano, reclamándole una mejor atención para los refugiados internos de Colombia. En el caso del secuestro de un turista alemán,



el ELN exigió que el gobierno alemán se comprometiera con el proceso de paz colombiano. El fuerte contenido táctico y político de los recientes secuestros colectivos también se ve claramente en la exigencia de que la prensa cubra masivamente la liberación de los rehenes y, así, se la pueda utilizar como un instrumento de propaganda de la guerrilla.

Mauss trató de llevar a cabo un proceso de paz entre el gobierno colombiano y el movimiento guerrillero del ELN, con claros propósitos propagandísticos. Mauss fue el principal organizador de la reunión de paz en Alemania (Mainz) entre el ELN y los representantes de la sociedad civil colombiana. De esta forma, el ELN pretendía mejorar su imagen pública como un homólogo interesado en la paz. Con el fin de lograr este objetivo, se aprovecharon de sus socios europeos, especialmente de las iglesias y sus representantes. El gobierno alemán de Kohl participó en las etapas de preparación de la reunión organizada por Mauss, quién llegó incluso a concebir la idea de que Alemania patrocinara el plan de paz.

El 17 de noviembre de 1996, el gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, arrestó a Ida y Werner Mauss en Colombia. La pareja viajó como el Sr. y la Sra. Möllner para intervenir en el secuestro de la esposa del anterior gerente de área de la corporación BASF (Sra. Brigitte Schöne) a quien el ELN había secuestrado. Se los acusó de estar involucrados en un caso de extorsión por secuestro.<sup>276</sup>

Poco después, Werner Mauss acusó a la competencia, es decir, a la compañía de seguridad privada British Control Risks Group (CRG) de haber urdido “la intriga que ocasionó su arresto”.<sup>277</sup> CRG contestó su acusación.<sup>278</sup> El gobernador de Antioquia, responsable del arresto de Ida y Werner Mauss, dijo públicamente y en conversaciones privadas con Pax Christi que primero se había pedido la ayuda de CRG y que más tarde la misión diplomática alemana y Schmidbauer habían traído a Mauss para que participara en las negociaciones. El gobernador declaró que el ELN había elevado la cantidad de dinero del rescate como consecuencia de la participación de Werner Mauss en las negociaciones. No se sabe si pagaron el rescate por la liberación de la Sra. Brigitte Schöne. *Der Spiegel* informó que su esposo había pagado un millón de dólares.<sup>279</sup> Poco tiempo después, *Der Stern* publicó un artículo donde decía que la compañía para la cual trabajaba el Sr. Schöne, BASF corporation, había pagado “varios millones” por el rescate e, incluso, añadió que “habían transferido el dinero a una cuenta de Barclay Continental, que es una compañía de buzones en Luxemburgo”.<sup>280</sup>

Los Mauss estuvieron detenidos durante la investigación, en la que el gobierno alemán trató de intervenir. Los dejaron en libertad en julio de 1997 por cuanto el fiscal no presentó las pruebas suficientes para los cargos formulados inicialmente, pero la pareja tuvo que permanecer en Colombia durante la etapa de mayor investigación. Sin embargo, les permitieron salir

de Colombia en mayo de 1988 porque el fiscal finalmente suspendió la investigación. Gracias a la ley colombiana, esta decisión de la Fiscalía regional de Antioquia en Medellín significa un veredicto de inocencia. Mauss se considera completamente rehabilitado por la decisión del juez.

### 7.3 **¿Mayor presión política de la Unión Europea sobre las partes en conflicto?**

El conflicto armado en Colombia lleva 40 años sin una solución en el ámbito militar. A pesar de las grandes concesiones del gobierno de Pastrana, tales como la desmilitarización de una zona en el sur de Colombia, es posible que los actuales diálogos de paz tengan el mismo resultado. El incremento del número de secuestros desde la desmilitarización de la zona es evidente por sí mismo.

*Esto no quiere decir que el diálogo en sí no sea el método apropiado. Pero de acuerdo con los estándares internacionales, las negociaciones entre los grupos armados ilegales el Estado colombiano se deben apoyar en un estatuto que las partes en conflicto deben cumplir y respetar: el Derecho Internacional Humanitario. Durante el proceso de las negociaciones, inicialmente se acordó que las partes involucradas promoverían la vigilancia y la verificación de la comunidad internacional (o europea). Esto nunca funcionó.*

Desde mediados del 2000, los países europeos y de la comunidad internacional han adquirido una gran importancia en el conflicto armado colombiano. Veintiún representantes de gobiernos extranjeros, entre los cuales estaban el Vaticano, Inglaterra y Bélgica, participaron en una reunión con las FARC en el Corregimiento de los Pozos el 29 de junio del 2000. Todos los delegados rechazaron enfáticamente las masacres, la extorsión y los secuestros que este grupo realiza. El Sr. Jean Paul Warnimont, embajador de Bélgica en Colombia, explicó que “un secuestro es un secuestro, aun cuando se lo considere como una detención”. Esta fue una actuación importante de los Estados Miembros de la Unión Europea, por cuanto, con respecto al secuestro, trataron de imitar el estilo del gobierno de Pastrana en cuanto a la utilización de eufemismos.

La Sra. Mary Robinson, Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estuvo en Bogotá a principios de diciembre del 2000. La Sra. Robinson hizo énfasis en la necesidad de un acuerdo global sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario propuesto por cualquiera de las partes, ya sea la sociedad civil o los facilitadores y mediadores del proceso que se debe llevar a cabo. Este acuerdo debe ser un compromiso con acciones concretas que las terceras partes, establecidas con anterioridad, puedan verificar. Por ejemplo, el acuerdo podría incluir que la guerrilla dejara

de secuestrar y extorsionar a los colombianos y a los extranjeros y que el Estado combatiera efectivamente a los paramilitares. Sabemos que la Unión Europea ve con muy buenos ojos la propuesta de la Alta Comisionada y que está dispuesta a apoyarla.

*Mientras tanto, Europa tendrá que asumir una posición común con respecto a los secuestros concretos (a través del establecimiento de una política común europea) de ciudadanos europeos. Indudablemente, la actuación de la comunidad internacional en contra del secuestro, incluso en casos concretos, es la que permite que la presión nacional cause un impacto sobre los secuestros de la guerrilla. A los subversivos les da miedo que todo el mundo los considere criminales, por cuanto esto puede tener un impacto sobre su objetivo de ser reconocidos como una fuerza beligerante y sobre el margen de legitimidad que algunas organizaciones internacionales todavía les conceden.*

### **¿Resulta rentable la presión política?**

Las FARC secuestraron a tres ciudadanos alemanes en el Departamento del Cauca el 18 de julio del 2001. Dos de ellos eran empleados de GTZ, el Departamento Alemán para la Cooperación Técnica, que estaban trabajando en proyectos de desarrollo social para la población indígena de la región. El tercero de ellos estaba visitando a su hermano, es decir, a uno de los empleados de GTZ. Las FARC dijeron que la razón del secuestro era investigar el rol del GTZ en el campo de la cooperación para el desarrollo. Poco después dijeron que en adelante considerarían cualquier proyecto de desarrollo extranjero en Colombia como parte del Plan Colombia, elaborado por los estadounidenses. Una acusación sin sentido porque la Unión Europea se desvinculó públicamente de la parte militar del Plan Colombia.

La UE apoyó unánimemente al gobierno alemán en sus esfuerzos por liberar a los rehenes. La presión europea abarcó varios temas. La UE anunció que, como consecuencia de estos secuestros, Colombia corría el riesgo de perder la ayuda europea (especialmente los US \$ 293 millones planeados) y de perder el apoyo internacional al proceso de paz (en el cual participaron varios Estados europeos como parte del 'grupo de países amigos de Colombia').<sup>281</sup> En septiembre, la UE (Bruselas) congeló el apoyo futuro a los proyectos humanitarios realizados por las ONG en Colombia.<sup>282</sup> Esto no impresionó a las FARC, aunque oficialmente están muy comprometidas con el desarrollo social. Obviamente, el proceso de 'Verelendung' hace que los pobres dependan más de la guerrilla por cuanto ella es la única autoridad en la región, lo cual es ideal para su agenda política.

En octubre del 2001, la UE envió un mensaje a las FARC; o este grupo liberaba a los rehenes o la UE tomaría medidas tales como no volver a expedir visas a los miembros de las FARC, cerrar sus oficinas y congelar sus cuentas en los bancos. Es posible que la liberación de los rehenes también se hubiera

acelerado por los ataques terroristas a los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001 y la consiguiente 'guerra al terrorismo' iniciada por este país. Actualmente, las FARC figuran en la lista de terroristas del FBI (junto con las AUC y el ELN). Sin embargo, a pesar de que el gobierno alemán niega haber pagado por el rescate, algunos expertos colombianos dudan de que no haya habido algún tipo de 'pago'.

*Esta situación plantea algunas preguntas imperativas a la comunidad europea con respecto a su relación con el gobierno colombiano y con el adversario del gobierno, es decir, con las FARC.*

- ¿Implica la liberación de los rehenes alemanes que la UE continuará otorgando visas y residencia a las FARC, que no tocará sus cuentas bancarias y que seguirá recibiendo a sus representantes en las oficinas gubernamentales? Esta situación deja un sabor amargo porque hizo falta que secuestraran a tres ciudadanos alemanes para que la UE reaccionara, lo que no había conseguido el secuestro de más de 4.000 colombianos por año. Un aspecto complicado es que fue el gobierno de Pastrana quien solicitó a los Estados Miembros de la UE (dentro del contexto del apoyo de la UE a los diálogos de paz en Colombia) que recibieran a los representantes de las FARC a nivel gubernamental.

Recientemente, el presidente mejicano Fox forzó a las FARC a anunciar un inmediato cese de secuestros de ciudadanos mejicanos en Colombia, advirtiendo que expulsaría de Méjico a los representantes de las FARC si continuaban estas agresiones. El grupo de trabajo de la Unión Europea sobre América Latina (Colat) debatirá la posibilidad sobre este tipo de medidas en Octubre del 2001.

- ¿Continuará la UE y la cooperación europea para el desarrollo en Colombia? o ¿lograron realmente las FARC asustar suficientemente a Europa?

258 Convención Internacional contra la toma de rehenes, firmada en Nueva York el 18 de diciembre de 1979.

259 Declaración Ministerial de Ottawa en Contra del Terrorismo, 12 de diciembre de 1995.

260 La reunión de los expertos contra el terrorismo del G-8 se llevó a cabo en Londres entre el 5 y el 6 de marzo de 1998. Todavía no se han publicado los documentos correspondientes. *The Financial Times* publicó afirmó que los funcionarios de estado del G-8 llegaron a un consenso sobre la política de no pago. Filder, S. y Williamson, H., "Estados Unidos Culpa a los Aliados por Haber Defendido la Política de Pago por Rescates", en *Financial Times*, 1 de septiembre de 2000.

261 [www.library.utoronto.ca/g7/foreign/](http://www.library.utoronto.ca/g7/foreign/). Conclusiones de la Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores en Londres, el 9 de mayo de 1998. (Conclusiones 27 y 28).

262 Declaración de los Ministros de Hacienda (Ministerios de Hacienda) del G-7, 25 de septiembre del 2001.

263 Reuters/AFP, "Campaña de EU y otros países contra el lavado de dinero", en: *La Jornada*, 20 de septiembre del 2001.

264 Entrevista con el Sr. Blumfield, Oficina de Relaciones Exteriores y de la Comunidad Británica del Reino Unido, Departamento de Políticas Contra el Terrorismo, (noviembre 2001).

- 265 Filder, S. and Williamson, H., "Estados Unidos Culpa a los Aliados por Haber Defendido la Política de Pago por Rescates", en: *Financial Times*, 1 de septiembre de 2000.
- 266 [www.mir.es/policia/prensa](http://www.mir.es/policia/prensa). Documento de Madrid (Madrid, 2 de febrero de 2001).
- 267 Comisión de las Comunidades Europeas, *Proposition de décision-cadre du Conseil relative a la lutte contre le terrorisme*, Bruselas, 19 de octubre de 2001 (COM (2001) 521 final).
- 268 Entrevista con el Sr. Blumfield, Oficina de Relaciones Exteriores y de la Comunidad Británica del Reino Unido, Departamento de Políticas Contra el Terrorismo.
- 269 Distintas fuentes (familias de las víctimas) han informado a Pax Christi que consideran que el apoyo del Ministerio en La Haya es bastante deficiente.
- 270 Entrevista con la Sra. J. Faber del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Haya (Departamento DPC), el 26 de enero de 2001.
- 271 Entrevista con el Sr. Demetrio Piras el 15 de agosto de 2001.
- 272 Hagedorn, Auerbach, A., *Ransom*, 248.
- 273 Este párrafo está basado en la información suministrada en un artículo del periodista alemán Peter Schumacher. Schumacher, P., *German involvement in the Colombian kidnap industry* (2000). Este periodista también escribió (junto con Ignacio Gómez) el libro: *La última misión de Werner Mauss* (Bogotá, 1998).
- 274 Es decir, el gobierno CDU dirigido por Helmut Kohl. Por el contrario, el gobierno de Gerhard Schröder que se posesionó en octubre de 1998, se distanció por completo de Mauss y de su homólogo en el gobierno alemán *Staatsminister* Bernd Schmidbauer.
- 275 Tageszeitung, 13 de julio de 1998, 10.
- 276 Eckart Spoo: "Einer, der oft für Verwirrung sorgt", en: *Frankfurter Rundschau*, 20 de noviembre de 1996; "Skandal um deutsches Lösegeld in Kolumbien", en: *Neue Zürcher Zeitung*, 22 de noviembre de 1996; Jean-Paul Picaper, "Un James Bond 'fabricado en Alemania'", en: *Le Figaro*, 22 de noviembre de 1996; Ludwig Greven, "Aus die Mauss!" en: *Die Woche*, 29 de noviembre de 1996; "Le tribulations d'un 'agent privé' allemand en Colombie", en: *Le Monde*, 30 de noviembre de 1996; "Die Chronologie der 'Affäre Mauss' - Bundesregierung durch Agent in Kolumbien unter Druck" en: *Agence France Presse*, 3 de diciembre de 1996; "Arrangierter Einzelgänger", en: *Focus*, 25 de noviembre de 1996; "Hansdampf in Macondos zwielichtigen Gassen", en: *Neue Zürcher Zeitung*, 28 de febrero de 1997.
- 277 "El ELN debe dejar el secuestro" en: *Cambio*, 21 de junio de 1999. El artículo dice que Mauss declaró literalmente: "La empresa Control Risk (sic) fue responsable de las intrigas que llevaron a nuestra detención". También Heinz Vielain, "Privatagent Mauss offenbar Opfer eines Komplotts", en: *Welt am Sonntag*, 23 de febrero de 1997; Rienhardt, J., "Agent aus Liebe", en: *Stern* 27/1997, 28 de junio de 1997. Mauss presenta su propio punto de vista sobre los hechos en Karl-Ludwig Günsche y Hans Werner Loose: "Das System Mauss", en: *Die Welt*, 31 de julio de 1998.
- 278 Schröm, O., "Der Agent trieb die Preise hoch", en: *Stern* 51/1996, 12 de diciembre de 1996.
- 279 "Das Ende von 007", en: *Der Spiegel* 48/1996.
- 280 Müller, L. y Wirtgen, K., "Deckmantel für kriminelle Geschäfte", en: *Stern* 49/1999, 2 de diciembre de 1999.
- 281 "Farc ponen en peligro ayuda de la Unión Europea", en: *El Tiempo*, 12 de agosto de 2001.
- 282 "ONG suspenden ayuda en Colombia", en: *El País*, 28 de septiembre de 2001.



# ***Principales temas de la campaña contra el secuestro***<sup>283</sup>

***(noviembre del 2001 - noviembre del 2002)***

## **CONSIDERANDO QUE:**

### **El secuestro nutre la guerra**

La guerrilla y los paramilitares son los causantes de la guerra interna de Colombia. Estos grupos financian sus acciones militares a través de métodos delictivos, tales como el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro. Este negocio lucrativo ha permitido a los poderes militares convertirse en algo casi incontrolable. El efecto de estos poderes en este entorno de caos y anarquía es garantizar la continuidad del secuestro de civiles indefensos y desarraigados.

En vista de la posición militar y económica holgada de los grupos insurgentes, parece poco realista esperar resultados apropiados de las actuales negociaciones de paz del gobierno con la principal organización guerrillera, es decir, con las FARC. Como una de las partes oficiales de la negociación, las FARC deben cumplir con el Derecho Internacional Humanitario, lo cual implica no atacar a los civiles indefensos (Artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra de 1949 y Protocolo II de 1997 común a las Convenciones de Ginebra), pero evidentemente no cumplen con este mandato.

### **El dilema personal**

Cuando se exige el pago de un rescate, la familia de la víctima tiene que enfrentar un dilema imposible de resolver: es probable que si no paga, maten al ser querido secuestrado, pero el pago causa aún más secuestros. Este es un círculo vicioso.

### **La responsabilidad colombiana**

Los colombianos son los principales responsables de solucionar el problema de violencia e impunidad en su país. Los grupos armados ilegales continúan secuestrando y extorsionando debido a la falta de instrumentos militares y legales pero, sobre todo, debido a la falta de voluntad política para combatir la corrupción y el clientelismo generalizados.

### **La responsabilidad europea**

Tanto la sociedad civil como el gobierno de Colombia le han solicitado a Europa que apoye el proceso nacional de paz, incluyendo la presión que Europa pueda ejercer para que los grupos enfrentados lleguen a un acuerdo humanitario. Sin embargo, la política europea con respecto a Colombia ha

sido muy difusa e inconsistente hasta el momento. Esto se aplica a la política oficial de la UE, a los Estados Miembros, a las ONG y a los inversionistas.

Aunque Europa se adhirió verbalmente a las iniciativas de paz, al mismo tiempo contribuye a avivar la guerra. La mayoría de las multinacionales y de los inversionistas europeos también tienden a cumplir tácitamente con las normas informales con respecto al pago de la extorsión a diferentes grupos armados ilegales. Cuando secuestran europeos, generalmente se pagan enormes sumas de dinero por los rescates a estos grupos, ya sea directamente o a través de las compañías de seguros. Estos ingresos derivados de los rescates frecuentemente se lavan a través de la infraestructura financiera de Europa.

El código de silencio sobre el tema, al cual nos sometemos tanto los colombianos como los extranjeros, nos convierte a todos en cómplices del suplicio de los ciudadanos colombianos.

#### **DEBERÍA DISCUTIRSE LO SIGUIENTE:**

### ***Estrategias provisionales para combatir el secuestro con un método común***

- **Acabar con el código de silencio.** Si todas las partes involucradas empiezan a dialogar, este diálogo será el comienzo del fin del negocio.
- **El Derecho Internacional Humanitario (DIH).** El secuestro de civiles dentro del contexto de una guerra civil es una grave violación al DIH. No solamente nos referimos a las instituciones estatales que han guardado silencio por mucho tiempo, sino también a las ONG internacionales de derechos humanos.
- **Una Corte Internacional.** La comunidad internacional debe facilitar los juicios internacionales a los grupos armados ilegales que utilizan el secuestro como un instrumento de guerra. Una corte internacional podría servir como elemento de disuasión y como mecanismo para acelerar las negociaciones de paz. Cuando la Corte Penal Internacional empiece a funcionar como tal, tendrá la jurisdicción debida sobre el delito de toma de rehenes por parte de los grupos armados ilegales, siempre y cuando Colombia ratifique sus estatutos.
- **Un acuerdo humanitario** que incluya una prohibición expresa del secuestro puede contribuir a disminuir el número de secuestros en Colombia. Sin embargo, esto requiere que en Colombia se establezca una política gubernamental consistente con respecto a las partes en conflicto, con base en el DIH y combinada con una fuerte presión internacional sobre todas las partes involucradas.



- **Una política común europea** podría evitar que los gobiernos, las multinacionales y los civiles se enfrenten entre sí por culpa de los secuestrados colombianos. Es necesario incluir los siguientes temas en la agenda política de la UE con el fin de elaborar una política integral:<sup>284</sup>
  - (la falta de) una política sobre los pagos por los rescates;
  - el rol de las pólizas de seguros contra el secuestro;
  - el lavado de dinero que hacen los grupos armados ilegales en la UE;
  - la emisión de visas a los representantes de los grupos armados ilegales de Colombia.
  
- **Los Principios Rectores de la UE con respecto a las inversiones** en países como Colombia deben incluir unas ‘mejores alternativas’ para manejar los pagos por los rescates y la extorsión. Además, los inversionistas europeos deberían establecer una política común que vele por la seguridad de sus compañías (y de los subcontratistas) sin ceder a los métodos que evidentemente avivan la violencia (refiérase a las recomendaciones, capítulo 5).
  
- **Promover un debate público sobre los dilemas del no pago.** Es necesario sopesar los argumentos a favor y en contra, tanto a nivel corporativo como personal.

---

283 El 12 de noviembre de 2001 se realizó la conferencia antisequestro en La Haya que anunció el comienzo de una campaña antisequestro con la duración de un año. Se publicará un informe sobre la conferencia en febrero del 2002, incluyendo conclusiones y recomendaciones.

284 La posición adoptada por México recientemente con respecto al secuestro de sus ciudadanos en Colombia y la respuesta de las FARC son uno claro indicio de que la presión ayuda. (Sin embargo, esperamos que esta firme posición también cubra a los civiles colombianos).



## ***Glosario***

<b>ACCU -</b>	Autodefensas Colombianas de Córdoba y Urabá. Un grupo paramilitar.
<b>AIG -</b>	American Insurance Group (Grupo Estadounidense de Seguros). El segundo asegurador más grande contra el secuestro y los pagos por los rescates en el mundo.
<b>AUC -</b>	Autodefensas Unidas de Colombia. Un grupo paramilitar.
<b>COINVERTIR -</b>	Corporación Invertir en Colombia.
<b>CRG -</b>	Control Risks Group (Grupo de Control de Riesgos). Una compañía británica de seguros que brinda asesoría sobre seguridad y entrenamiento especial a las multinacionales que operan en Colombia.
<b>CRI -</b>	Corporate Risk International. Esta es una compañía de reacción y manejo de casos de secuestro. Los servicios de esta compañía los ofrece el consorcio de seguros PIA-Nassau.
<b>DAS -</b>	Departamento Administrativo de Seguridad. Este es la unidad de la policía dedicada a la investigación, administrada por el poder ejecutivo de Colombia y que trabaja sin uniforme. El Ministerio del Interior administra las demás unidades de la policía.
<b>DSC -</b>	Defense Systems Colombia (Sistemas de Defensa de Colombia). Una compañía privada de seguridad contratada por las compañías multinacionales.
<b>DNP -</b>	Departamento Nacional de Planificación. Este es el organismo gubernamental encargado de la planeación.
<b>ELN -</b>	Ejército de Liberación Nacional. El segundo grupo guerrillero más grande de Colombia.
<b>EPL -</b>	Ejército de Liberación Popular. Un grupo guerrillero más pequeño.
<b>FARC-EP</b>	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El grupo guerrillero más grande de Colombia. Usualmente se lo conoce como las FARC.

<b>FBI -</b>	Federal Bureau of Investigation (Oficina Federal de Investigaciones). Organismo Federal de los Estados Unidos encargado de hacer cumplir la ley.
<b>FISCALÍA -</b>	Fiscalía General de la Nación. Cuerpo de fiscales de Colombia encargado de investigar los casos de secuestro y de procesar a los secuestradores.
<b>FMLN -</b>	Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Antiguo grupo guerrillero Salvadoreño que actualmente es una organización política.
<b>GAULA -</b>	Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal y Antiextorsión. El GAULA es el brazo operativo del ejército encargado de solucionar los casos de secuestro y extorsión.
<b>JEGA -</b>	Jorge Eliécer Gaitán. La organización guerrillera Jorge Eliécer Gaitán es un grupo guerrillero muy pequeño.
<b>M-19 -</b>	Movimiento 19 de Abril. Este movimiento guerrillero se acogió a la amnistía del gobierno en 1990 y, gracias a esto, lograron desmovilizarlo. El grupo Jaime Bateman Cayón (un grupo disidente del M-19) todavía opera en Colombia.
<b>MAS -</b>	Muerte a Secuestradores. Esta es una organización paramilitar.
<b>MILF -</b>	Moro Islamic Liberation Front (Frente Moro de Liberación Islámica). Grupo armado, separatista y musulmán de Filipinas que utiliza el secuestro.
<b>MNLF -</b>	Moro National Liberation Front (Frente Moro de Liberación Nacional). Grupo armado, separatista y musulmán de Filipinas que utiliza el secuestro.
<b>NGO -</b>	Organización No Gubernamental.
<b>PPDLP -</b>	Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal. Campaña contra el secuestro del gobierno, que en Colombia se conoce como la Oficina del Zar antisequestro.

**UNASE -**

Unidad Antisecuestro y Extorsión. El personal de esta unidad está conformado por funcionarios de la policía, el DAS y el ejército que trabajan como brigadas del ejército.



## CONDENA TOTAL AL CRIMEN DEL SECUESTRO

Con el secuestro del avión comercial de Avianca el 12 de abril pasado por parte del ELN, se ha entrado en una nueva etapa de la triste historia del secuestro en Colombia.

El Movimiento por la Paz y los Derechos Humanos Pax Christi ha condenado repetidamente el crimen cobarde del secuestro.

El siguiente es un fragmento de la reciente intervención de Pax Christi Internacional ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (marzo de 1999) sobre la necesidad de abolir el secuestro:

'Uno de los crímenes más horrendos que se comete en la guerra colombiana es el secuestro de personas con el propósito de obtener beneficios económicos o de presionar decisiones políticas. Nada puede ser más lesivo a los derechos humanos que arrancar de sus familias a las personas y someterlas a la más brutal opresión psicológica y social. Este crimen de lesa humanidad cometido por la guerrilla, la delincuencia común y los paramilitares, ha degradado hasta límites indecibles el conflicto colombiano y está causando daños irreparables a la sociedad. Al mantener estas prácticas - que son violaciones del Convenio IV de Ginebra del artículo 3, inciso 1, acerca de la toma de rehenes - la guerrilla sigue perdiendo su credibilidad sobre las pretensiones altruistas y éticas de su lucha.

'Las empresas multinacionales han contribuido a estimular esta práctica mediante el pago de grandes sumas de dinero por el rescate de secuestrados. Con esto han alimentado la violencia y el conflicto mismo. Ha llegado la hora de que los empresarios extranjeros busquen alternativas que permitan ayudar de verdad a superar este flagelo. La Unión Europea podría formular un código de conducta para multinacionales que tengan que afrontar el secuestro y la extorsión, crímenes que se presentan en Colombia más que en cualquier otro lugar del mundo.'

Con este último secuestro masivo, el ELN ha demostrado el cinismo de su estrategia. El ELN se está burlando de las expectativas que se crearon entre los colombianos y en la comunidad internacional luego de los acuerdos de 'La Puerta del Cielo' en Alemania el año pasado. Se está burlando tanto de la Iglesia colombiana como de la alemana, las cuales hicieron un gran esfuerzo para realizar dicho evento. Y se está burlando del Derecho Internacional Humanitario que tanto dice que quiere respetar.

Pero más que todo la guerrilla se está burlando de toda aquella gente de buena voluntad y compasión con los que sufren la guerra en Colombia, porque sus actos sólo provocan más guerra en vez de paz entre sus compatriotas.

Con este comunicado Pax Christi Holanda hace un llamado a los miembros de todos los grupos armados que no están de acuerdo con estos actos de lesa humanidad para que convengan a sus líderes de abolir la práctica del secuestro y de iniciar la liberación de todos los indefensos que mantienen retenidos como rehenes. Mientras se sostenga la práctica del secuestro, lo único que se cosechará en Europa no será otra cosa que el repudio y menosprecio de la comunidad internacional, cuyo apoyo se trató de conseguir para presuntos proyectos de paz.

Holanda, abril de 1999.

postbus 19318  
3501 DH utrecht

godebaldkwartier 74  
3511 DZ utrecht

e-mail: [paxchristi@antenna.nl](mailto:paxchristi@antenna.nl)  
[www.antenna.nl/paxchristi](http://www.antenna.nl/paxchristi)

telefoon 030 - 2 33 33 46  
fax 030 - 2 36 81 99

generale bank: 23.07.06.177  
postbank: 59.33.52

pax christi nederland maakt deel uit van de internationale katholieke vredesbeweging pax christi

**pax**  
christi  
holanda

P.O. Box 19318  
3501 DH Utrecht  
Holanda

Teléfono: +31 (0) 30 2 33 33 46  
Telefax: +31 (0) 30 2 36 81 99

E-mail: [paxchristi@paxchristi.nl](mailto:paxchristi@paxchristi.nl)  
[www.paxchristi.nl](http://www.paxchristi.nl)

